



**PODER LEGISLATIVO
NAYARIT
XXX LEGISLATURA**

**Comisión de Justicia y Derechos
Humanos**

**Dictamen con Proyecto de Código
Penal para el Estado de Nayarit.**

Honorable Asamblea Legislativa.

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fueron turnadas a los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su estudio y dictamen, las iniciativas presentadas por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto, a través de la cual propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del Estado y por el Gobernador Constitucional del Estado, Roberto Sandoval Castañeda, misma que propone la emisión de un nuevo Código Penal para el Estado de Nayarit; por lo que procedimos a darles el trámite correspondiente en atención a las siguientes:

Consideraciones

El proyecto de Código Penal que hoy se discute es el resultado de un ejercicio de relación institucional entre los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, éste último a través de la Fiscalía General del Estado.

El primer problema a dilucidar fue la creación de un nuevo código penal o bien, reformar el hoy vigente.

Se argumenta en la exposición de motivos: haber optado por la expedición de un nuevo código en lugar de reformar el vigente, atiende fundamentalmente a razones prácticas, de didáctica legislativa que permitan tener un documento estructuralmente aseado de reformas y derogaciones, que no en pocas ocasiones hacen cuando menos, difícil su manejo, y más aun su entendimiento para todo aquel que es ajeno a la ciencia del derecho.

En ese mismo sentido, haber propuesto una reforma a la ley penal vigente implicaba modificar más del cincuenta por ciento del Libro Primero, lo que concomitantemente traía como consecuencia un sinnúmero de artículos reiterados en su numeración bajo la distinción de los tradicionales latinajos, lo que sin duda vendría a dificultar el manejo e interpretación de las disposiciones penales, lo cual, visto en un extremo, podría resultar riesgoso en una ciencia del derecho que se rige por principios constitucionales “duros” como la exacta aplicación de la ley en materia penal con todas las modalidades que de ello derivan como la taxatividad, tipicidad, legalidad, entre otras.

Como lo expresa el iniciador en la exposición de motivos, otro elemento que definió el debate respecto de la creación de un nuevo código, fue el factor de transición entre el sistema penal que actualmente opera y el sistema penal acusatorio. Es decir, resultaría complejo que un mismo código aun cuando se trate del sustantivo penal, coexistiera para operar en ambos sistemas, es así que consideramos más afortunado guardar la vigencia del código penal que actualmente rige, y al propio tiempo expedir un nuevo Código Penal que sea la base para la operatividad del sistema penal acusatorio, que a su vez, en la medida en que vaya adquiriendo vigencia territorial y por tipo de delito, generará la abrogación gradual de la ley sustantiva penal que hoy en día rige.

Ahora bien, para esta Comisión Dictaminadora la incorporación del nuevo sistema de justicia penal no se agota únicamente en dar paso a la vigencia de las reglas procesales. Desde nuestra perspectiva, los principios y reglas propias del sistema penal acusatorio y oral tienen una implicación directa también en las normas generales que del derecho penal sustantivo; de ahí que para una adecuada instrumentación de la justicia oral se requiere no solo la adopción de nuevas reglas procesales, sino también, la armonización y actualización de las sustantivas para darle coherencia al sistema y evitar en un extremo, la impunidad.

Sin embargo, debe reconocerse que la base del documento que hoy se discute es justamente la ley penal vigente, especialmente por lo que hace a los delitos.

Bajo esa panorámica, el presente proyecto modifica prácticamente toda la parte general del código vigente, a la vez que incrementa las penalidades, incorpora nuevos tipos penales y suprime o adecúa otros más.

Análisis relativo al Libro Primero

El Libro Primero del Código Penal referente a la parte general, constituye a nuestro juicio, el vértice del presente documento normativo, pues en él se establecen las reglas y fórmulas generales que permean la parte sustantiva del derecho penal; por esa razón las modificaciones que se plantean con relación al código penal vigente, se centran en ése apartado.

El Libro Primero se traduce en es una parte dinámica de la ley penal en cuanto a la práctica jurisdiccional se refiere. En éste, el juez hace efectivo su arbitrio judicial basado en factores y lineamientos concretos para la imposición de la pena, para que obsequie o niegue un beneficio, para decretar oficiosamente la prisión preventiva, entre otras circunstancias. Por su parte el libro segundo “de los delitos en particular”, constituye un apartado estático que se limita a reconocer delitos y penas, pero que no por ello resulta

ménos importante. En cambio, aquél, es el espacio propio para establecer incluso, los lineamientos sobre la política criminal a la que aspiramos como sociedad.

El derecho penal como ciencia institucionalizada que permite la imposición de penas cuando se incurre en la comisión de delitos, está legitimado por el propio Estado a través de la norma jurídica. Esa legitimación para imponer una pena de prisión con todas sus consecuencias para quien la reciente, se reafirma democráticamente mediante el reconocimiento social cuando somos capaces de plantear de manera clara y concreta en la ley, el tipo de política criminal que habrá de guiar labor de procuración y administración de justicia.

En la elaboración del presente documento hemos sido cuidadosos para que de ninguna manera se sugiera siquiera por asomo, que pretendemos generar un estado represor que imponga penas a partir de criterios meramente retributivos. Nada más alejado de ello. La finalidad de los poderes públicos del Estado de Nayarit expresada en este nuevo código penal es enviar el mensaje a la sociedad en general de que asumimos a plenitud nuestra responsabilidad constitucional de brindar seguridad pública, de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, y cuando sea necesario, de procurar y administrar justicia cuando se ha cometido un delito buscando un justo equilibrio entre los derechos del procesado, el fin de reinserter al sentenciado a la sociedad y el interés colectivo de sancionar con el rigor legal que cada conducta punible merezca.

Con esa lógica es que se plantea la sustitución condicionada de penas regulada en el capítulo noveno del título cuarto correspondiente al Libro Primero.

Con esta medida lo que se busca es, por un lado, hacer visibles las “sanciones-beneficios” que hoy por hoy están vigentes en la norma penal y que son medidas punitivas alternas a la pena de prisión que por infortuna en la práctica no se toman en consideración por ninguno de los operadores jurídicos, trátese del ministerio público,

juez o defensores particulares o de oficio. Por otro lado, regular de manera más amplia la posibilidad de que la pena de prisión sea sustituida por otras medidas sancionatorias, nos permite ir construyendo una idea de política criminal a la que pretendemos aproximarnos. Ningún sujeto reincidente, habitual o quien previamente haya conmutado, podrá volver a gozar de este beneficio, sin embargo, como se explica en la exposición de motivos, el propósito no es el de abarrotar las cárceles de reos; de lo que se trata es de generar un necesario vínculo post-procesal entre quien ha sido sentenciado y la resolución que lo declara culpable, como un factor objetivo de persuasión e inhibidor de nuevas conductas delictivas. La experiencia da testimonio de que en la actualidad el sujeto que resulta sentenciado y alcanza a conmutar, accede a este beneficio y vuelve a incurrir en nuevas conductas delictivas, de las que por igual, en tanto alcance el beneficio de referencia, cubre los días de prisión con numerario y se desatiende totalmente de las consecuencias jurídicas que conlleva una sentencia condenatoria.

Es aquí donde cobra especial relevancia el capítulo de la sustitución condicionada de penas; pues quien se ubique en algunos de los supuestos arriba enlistados, en todo caso podrá solicitar que la pena de prisión le sea sustituida por la semilibertad, trabajo en beneficio de la víctima o a favor de la comunidad.

A lo anterior debe añadirse un elemento de tolerancia como parte de la política criminal. Cabe la posibilidad de que a quien cometa un delito se le aplique un criterio de oportunidad por parte de la Fiscalía General del Estado; si en un segundo momento ese mismo agente vuelve a delinquir, se le sujetará a proceso en donde de resultar sentenciado y alcance a conmutar, podrá hacerlo; sin embargo, si ese sujeto incurre en una tercer conducta antijurídica, ya no podrá conmutar con independencia del *quantum* de la pena impuesta, pues objetivamente se puede aseverar que la imposición de la pena ha sido insuficiente para persuadirlo de que asuma una conducta que se ajuste a los convencionalismos sociales y a las disposiciones jurídicas que norman la conducta social.

En el Código materia de la dictaminación se dispone que la prohibición de conmutar no será aplicable a quien cometa un delito meramente culposo pues evidentemente en estos casos existe ausencia de dolo en su comisión.

Debemos precisar que no pasamos por alto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su Primera Sala ha sustentado en lo que ahora es jurisprudencia firme, que no deben tomarse en cuenta los antecedentes penales en perjuicio del sentenciado. Los integrantes de esta Comisión estamos convencidos de ello y por esa razón es que en la iniciativa a examen se prescindió de los efectos penales que hoy en día se le atribuyan a quien es declarado delincuente o habitual, esto es, el código penal vigente en su artículo 79 establece una pena autónoma para quienes tengan las condiciones anteriores.

Sin embargo, en la idea de construir nuestra propia política criminal, en determinados casos el juez sí podrá valorar los antecedentes penales pero no para imponer penas autónomas a la correspondiente al delito cometido, ni para graduar el grado de culpabilidad, sino única y exclusivamente para hacer las declaratorias de reincidente y habitualidad y de ese modo, otorgar o negar un beneficio: el de la conmutación, y de ese modo alcanzar un justo equilibrio entre los derechos humanos del sentenciado, el interés social y los intereses del estado reflejados en su política criminal.

Otros aspectos que deben destacarse del documento en análisis son:

1. Incorporación de principios constitucionales que revisten naturaleza de derechos humanos.
2. Reconocimiento expreso de que este código se decanta por el derecho penal de acto explicado en los términos de la iniciativa.
3. Con sustento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se enlistan los delitos que ameritarán prisión preventiva oficiosa.

4. Respecto de la reincidencia se prescinde de la penalidad autónoma que a esta corresponde en términos del artículo 79 del Código Penal vigente. Así también, se establece que los reincidentes no podrán gozar del beneficio de la conmutación.
5. Se regulan de manera pormenorizada las diferentes formas de intervención delictiva.
6. Se añaden causas de exclusión del delito y de la responsabilidad.
7. Se norma lo relativo a las medidas de seguridad que podrán imponerse a los inimputables.
8. Se detalla de mejor forma las sanciones para los delitos culposos.
9. Se norma la figura delictiva de daños culposos a consecuencia de semovientes.
10. Se establecen criterio para sancionar la complicidad.

Todos ellos conllevan importantes implicaciones de hecho, mas sin embargo, nos enfocaremos en algunos de ellos.

Derecho penal de acto

En el artículo 17 del código que hoy se discute, se establece de manera categórica que no podrá restringirse ningún derecho humano ni imponerse consecuencia jurídica del delito basado en la peligrosidad del agente o en los rasgos de su personalidad.

Esta prevención legal resulta de suma importancia toda vez que en ella subyace un cambio de paradigma en el tratamiento procesal que habrá de darse a toda persona sujeta a la jurisdicción penal. Hoy en día el Código Penal vigente y algunas leyes colaterales asumen que toda persona imputada o sentenciada refleja o representa cierto grado de peligrosidad social; que se trata de personas patológicas, desviadas, que es preciso reivindicar, reeducar a través de la imposición de la pena. Esta visión respecto de quien comete un delito a la fecha está presente en el sistema jurídico mexicano cuyos pilares están sustentados en lo que se conoce como derecho penal de autor.

En este sistema conocido como derecho penal de autor, el estado a través de su brazo punitivo sanciona al agente activo del delito no propiamente en función del hecho delictivo cometido, sino preponderantemente en razón de quién es o lo que puede llegar a ser la persona que lo cometió; es decir, la imposición de la pena se sustenta en los rasgos personalísimos del sujeto activo del delito. Por ello, prácticamente en la totalidad de las sentencias penales que se emiten en la entidad y en buena parte del país, resulta común que el ministerio público y el órgano jurisdiccional fundamenten la imposición de la pena en factores personales del agente, tales como sus creencias religiosas, sus aficciones a las bebidas embriagantes, cigarrillo de uso común o a las drogas, si trae tatuajes en su cuerpo, su edad, ilustración, costumbres, condiciones económicas, estado civil, entre otros; todo lo cual invariablemente ha derivado en un uso arbitrario y absurdo de estos pretendidos factores de individualización, ya que se adoptan criterios ambivalentes al momento de tomarlos en consideración, pues el hecho de que una persona esté o no unida en matrimonio por igual es un hecho que le perjudica según el órgano jurisdiccional que esté resolviendo, lo que al final del día se traduce en falta de seguridad jurídica en detrimento de las personas sujetas a proceso penal; además de que la valoración de este tipo de factores para imponer una pena, claramente resultan difusos y al extremo subjetivos.

Por tanto, esta prohibición de no tomar en consideración la supuesta peligrosidad del agente del delito ni los rasgos de su personalidad, no se agota en la mera retórica jurídico-penal; conlleva importantes implicaciones prácticas a las que deberán de estar atentos los operadores jurídicos, una de ellas, supone que el ministerio público y el juez no podrán bajo ninguna circunstancia, interpretaciones dogmáticas y carentes de objetividad respecto de los lineamientos que para individualizar la pena prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales y el código que hoy se somete a su respetable consideración.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha sido ajena al presente debate. Al resolver el amparo directo en revisión 343/2012 por medio de su Primera Sala, precisó que nuestra Constitución General de la República se decantaba por el paradigma del derecho penal de acto, abandonando la idea del derecho penal de autor.

Principio pro persona

En el artículo 20 se propone la incorporación del principio pro persona. Entre las variables que presenta este principio informador de los derechos humanos, está la de ser un criterio de aplicación de normas, es decir, cuando más de una disposición normativa resulte aplicable en la solución de un determinado caso, este principio obliga a preferir aquella que más favorezca a la persona.

Importante es no confundir y malversar los alcances de este principio en el ámbito penal, especialmente por lo que hace a los concursos de delitos.

Cuando se esté en presencia de un concurso de delitos el juez debe atender la regla establecida en el Código Penal, esto es, imponer la sanción del delito mayormente penado a la cual puede incrementar las penalidades de los otros delitos en las proporciones que la propia norma establezca. En tales supuestos no resulta aplicable el principio pro persona en función de que no estamos en presencia de diversas normas que por igual, puedan resolver o resulten aplicables al caso concreto. En los concursos de delitos el agente activo con una o varias conductas (según sea concurso ideal o real) termina por violar diversas disposiciones penales en donde se tutelan también diversos bienes jurídicos que deben ser protegidos por la ley penal.

Prisión preventiva oficiosa

En el artículo 36 de la presente iniciativa se crea el catálogo de delitos que ameritarán prisión preventiva oficiosa. Con plena observancia a lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en dieciocho fracciones se precisan los delitos en lo que no cabrá posibilidad de que el proceso se siga estando el

imputado en libertad. Las diecisiete primeras no presentan problema de interpretación alguno.

Especial mención merece la fracción dieciocho en donde se dispone que también serán materia de prisión preventiva oficiosa los delitos de amenazas, asalto, extorsión, lesiones, robo, abigeato, despojo, daño en las cosas, fraccionamiento ilegal de inmuebles, siempre y cuando se comentan con medios violentos como armas o explosivos. Me explico.

Para que en estos delitos resulte procedente la medida que se analiza, es necesario que su comisión sea al tal grado grave, que se lleven a cabo mediante medios violentos utilizando armas o explosivos, tal como lo exige el artículo 19 de la Carta Magna Federal. A partir de lo anterior, debe entonces tenerse presente que en aquellos delitos que por su naturaleza requieren la realización de algún tipo de violencia, como el de daño en las cosas o el de despojo en alguna de sus formas de comisión. En estos supuestos para la procedencia de la prisión preventiva oficiosa no bastará el ejercicio de una violencia que podría ser connatural a la idea misma que subyace en el delito y que resulta mínimamente necesaria para que tenga lugar; no, en casos como esos deberá demostrarse la existencia de violencia reforzada, de ahí que el 19 constitucional aluda a la que se realiza utilizando armas o explosivos; en suma, en los delitos que de suyo requieran ejercicio de violencia para su configuración, no por ese sólo hecho se hacen merecedores de la prisión preventiva oficiosa, si es que no concurre una transgresión de tal magnitud, como la que se puede causar con armas o explosivos, ya sea por sus consecuencias materiales en el caso de los explosivos, o por la alteración psicoemocional y el peligro en la integridad física que puede generar el uso de armas en la víctima del delito.

Reincidencia

El Código Penal vigente en su artículo 18 regula los supuestos en que se puede actualizar la figura de la reincidencia y al propio tiempo, en el diverso numeral 79 establece una penalidad autónoma al delito cometido la cual debe imponerse por el solo hecho de ser reincidente.

En nuestra consideración esa penalidad autónoma vulnera los más elementales derechos de tipicidad, no ser juzgado o sancionado dos veces por los mismos hechos, proporcionalidad de la pena respecto de "algún bien jurídico".

Tomando en cuenta lo anterior es que en la presente iniciativa se prescinde de esa penalidad independiente que hoy por hoy corresponde a la reincidencia, conservando únicamente los supuestos en los que será factible decretar como reincidente a un sentenciado, pues la reincidencia como tal, como figura declarativa, no sancionadora ni prohibitiva o restrictiva de derechos humanos es perfectamente compatible con el ideal de respecto a los derechos constitucionales de toda persona que ha incurrido en la comisión de delitos.

Igualmente, se plantea la posibilidad de que los sujetos reincidentes no puedan acceder al beneficio de la conmutación de la pena.

La práctica jurisdiccional en el Estado de Nayarit da muestra de cómo sujetos que han cometido diversos delitos llegando a acumular hasta 10 antecedentes penales, aun habiendo sido declarados reincidentes logran el beneficio de la conmutación en función de que las penas impuestas no exceden los cinco años, exigencia fundamental que establece el Código Penal vigente y que aquí se incorpora.

Análisis Libro Segundo de los delitos en particular

En la exposición de motivo se reconoce el incremento generalizado de penas y se dan las razones que justifican dicho proceder.

Esta Comisión suscribe los argumentos vertidos por el iniciador pero además, encuentra razones de peso para incrementar ponderadamente las penas bajo una perspectiva de actualización del quantum de las sanciones respecto del bien jurídico que en cada delito se tutela.

De todos es conocido que uno de los elementos caracterizadores de la justicia penal oral es que estamos en presencia de un sistema de justicia penal garantista. Así se patentiza por ejemplo, con los postulados constitucionales como el que dispone que la libertad será la regla y la prisión preventiva la excepción, entre otros más.

Lo anterior sugiere que el nuevo modelo de justicia penal está diseñado para funcionar bajo reglas distintas a las tradicionalmente aceptadas y adoptadas en nuestra legislación penal. Aun cuando pueda parecer un contrasentido, son justamente esos postulados garantistas los que determinan el incremento de las penas. El sistema penal vigente que quizá justificadamente se ha ganado la categoría de inquisitivo, funciona al amparo de reglas de esa naturaleza que se complementan con una serie de beneficios que al final del día terminan por hacer de la pena tasada para cada delito un ilusorio que excepcionalmente termina por compurgarse cuando son individualizadas en cada caso concreto.

El Código Penal vigente reconoce una serie de medidas que bajo la modalidad de sanciones o beneficios, atraen aparejadas ventajas a favor de todo sentenciado. Es el caso de la conmutación, la semilibertad, trabajo en beneficio de la víctima del delito o a favor de la comunidad, libertad condicional, remisión de la pena, suspensión condicional de la condena, perdón del ofendido, indulto, por citar algunos. Todo ello debe analizarse de manera contextual con los "beneficios" propios del nuevo sistema de justicia penal acusatorio como lo son los criterios de oportunidad y la disminución de la pena en procedimiento abreviado fundamentalmente.

Como se ve, el espectro de ventajas que rodean el nuevo sistema podría llevar al extremo de diluir o dejar sin sentido la imposición de la pena, pues en casos particularizados donde un sujeto se someta al procedimiento abreviado el parámetro para la imposición de la pena necesariamente deberá disminuirse por disposición del Código Nacional de Procedimientos Penales; si a ello le añadimos que si el delito lo permite el sujeto podrá acceder a la libertad condicional, estaríamos asumiendo que en realidad la pena a cumplir sería la mitad de la que corresponde al delito: un tercio que de origen se reduce por aceptar el procedimiento abreviado y un tercio que no se cumplirá al acceder a la libertad condicional para lo que se requiere haber estado en prisión únicamente las dos terceras partes de la pena impuesta.

Sin embargo, lo anterior no es el único factor determinante para incrementar las penalidades. Nuestro Código Penal vigente en muchos aspectos se ha visto superado por la realidad. Ése es el caso de las penas. Actualmente la pena mínima es de 3 días, lo cual no en pocas ocasiones trae aparejado que los procesados cuenten con un activo a su favor al haber estado en prisión más de tres días, y la sentencia que se les impone es justamente por ese lapso. Esta es una realidad que nos supera, que ya no corresponde a la época en que estas normas fueron creadas.

Otro aspecto que se valoró para elevar las penalidades es la realidad cotidiana. Delitos como robo en general y más concretamente a casa habitación, abigeato, abandono de familiares, homicidios, en últimas fechas el parricidio, fraudes, violencia familiar, entre otros más, son delitos con un elevado índice de comisión, ante lo cual el Estado debe reaccionar con políticas de prevención del delito pero además, con el reproche social requerido expresado en la imposición de una pena justa.

Es por estas razones que a consideración de esta Comisión se justifica el incremento generalizado de las sanciones.

Por lo que hace a este libro segundo, es menester comentar la incorporación y replanteamiento de nuevas conductas típicas con relación al código penal vigente:

- Usurpación de identidad;
- Extorsión;
- Daño en las cosas;
- Delitos informáticos;
- Encubrimiento por receptación;
- Abandono de familiares;
- Robo Equiparado;
- Aborto; y
- Infanticidio.

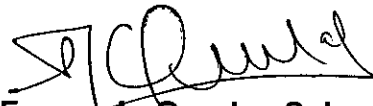
En la exposición de motivos se expresan de manera detallada las razones que justifican la incorporación o supresión de ciertos tipos penales, motivos todos ellos que suscribimos y hacemos propios.

Finalmente cabe decir que con relación al tipo penal coloquialmente conocido como "halconeos" esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos decidió acotar el ámbito punitivo de esta figura que tal parece a la fecha es un tipo penal bastante amplio. Así, se añade una porción normativa al final del primer párrafo a efecto de precisar que la búsqueda de información acerca de operativos de seguridad pública en general solo será punible cuando el sujeto activo tenga el propósito de transmitir esa información a un delincuente o grupo de delincuentes para facilitarles la comisión de delitos o bien, facilitarles la huida.

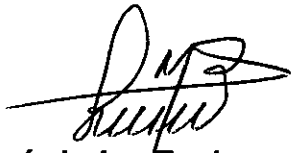
Por lo antes expuesto, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos nos pronunciamos por la viabilidad de la propuesta hecha por el iniciador y se pone a consideración de la Honorable Asamblea Legislativa para la aprobación en su caso, el presente dictamen al tenor del Proyecto de Código Penal que se adjunta.

DADO en la Sala de Comisiones "General Esteban Baca Calderón" del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los cuatro días del mes de agosto de dos mil catorce.

Comisión de Justicia y Derechos Humanos



Dip. Fernando Ornelas Salas
Presidente



Dip. María Luisa Espinoza Martínez
Vicepresidenta



Dip. Pedro Tello García
Secretario



Dip. Rafael Valenzuela Armas
Vocal



Dip. José Antonio Serrano Guzmán
Vocal



Dip. Miguel Ángel Arce Montiel
Vocal



Dip. Armando García Jiménez
Vocal

Hoja de firmas correspondiente al Dictamen con Proyecto de Código Penal para el Estado de Nayarit.

PROYECTO DE CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT

LIBRO PRIMERO

PARTE GENERAL

TÍTULO PRIMERO

ÁMBITO DE VALIDEZ DE LA LEY PENAL

CAPÍTULO I

APLICACIÓN DE LA LEY PENAL EN EL ÁMBITO ESPACIAL

ARTÍCULO 1o.- Este código se aplicará a los delitos cometidos en el Estado de Nayarit, que sean de la competencia de sus tribunales.

ARTÍCULO 2o.- Se aplicará igualmente a los delitos cuya ejecución se inicie fuera del territorio del estado y se consuman o causen sus efectos dentro del territorio del estado. En los supuestos a que se refiere este artículo, la ley penal del estado se aplicará cuando no se hubiere ejercitado acción penal en contra del imputado o imputados en otra entidad federativa.

ARTÍCULO 3o. Asimismo se aplicará a los delitos permanentes, y continuados que se estén ejecutando o tenga efecto dentro del territorio de Nayarit.

ARTÍCULO 4o.- Cuando se cometa un delito no previsto en este código, pero sí en una ley especial local o una ley general, se aplicará ésta, observando, en su caso, las disposiciones contenidas en este código.

ARTÍCULO 5o.- La sentencia penal absolutoria o condenatoria firme, pronunciada en el extranjero o en las distintas entidades de la Republica conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendrá en el estado, valor de cosa juzgada para todos los efectos legales.

CAPÍTULO II

APLICACIÓN DE LA LEY PENAL EN EL ÁMBITO TEMPORAL

ARTÍCULO 6o.- Las consecuencias jurídicas de los delitos, se determinarán conforme a la ley vigente en el momento de la comisión del delito.

ARTÍCULO 7o.- Cuando una disposición normativa posterior al hecho delictivo le quite ese carácter o disminuya las sanciones, el juez de manera oficiosa, deberá aplicar la norma más favorable.

La reparación del daño quedará subsistente cuando ya se haya pronunciado sentencia ejecutoriada.

Tratándose de medidas de seguridad impuestas como consecuencias jurídicas del delito, se estará a lo dispuesto en los artículos anteriores.

CAPÍTULO III APLICACIÓN DE LA LEY PENAL EN EL ÁMBITO PERSONAL

ARTÍCULO 8o.- La ley penal en el estado de Nayarit se aplicará a todas las personas que la contravengan a partir de que cumplan 18 años de edad.

A las personas menores de dieciocho años edad que realicen una conducta activa u omisiva prevista en el presente código o en una ley especial, se les aplicarán las disposiciones contenidas en las leyes correspondientes, por los órganos especializados destinados a ello y según las normas de procedimiento que las mismas establezcan.

TITULO SEGUNDO PRINCIPIOS CAPÍTULO ÚNICO PRINCIPIOS

ARTÍCULO 9o.- Toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

ARTÍCULO 10.- A ninguna persona se le podrá imponer pena, medida de seguridad, ni cualquier otra consecuencia jurídica del delito, sino por la realización de una acción u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre que concurren los presupuestos señalados en la ley y la pena, la medida de seguridad o cualquier otra consecuencia jurídica, se encuentre previamente establecida en este código.

ARTÍCULO 11.- A ninguna persona se le podrá imponer pena, medida de seguridad, o consecuencia jurídica del delito, si no ha realizado la conducta dolosa o culposamente.

ARTÍCULO 12.- Solo puede ser constitutiva de delito la acción u omisión que lesione o ponga en peligro al bien jurídico tutelado por la ley penal.

ARTÍCULO 13.- No podrá imponerse pena alguna, ni declararse penalmente responsable a una persona, si la acción u omisión no han sido realizadas culpablemente. La medida de la pena estará en relación directa con el grado de culpabilidad de la persona respecto del hecho cometido, así como de la gravedad de éste. En ningún caso podrá imponerse pena alguna que sea mayor al grado de culpabilidad.

Igualmente se requerirá la acreditación de la culpabilidad de la persona para la aplicación de una medida de seguridad, si ésta se impone accesoriamente a la pena y su duración estará en relación directa con el grado de culpabilidad.

Para la imposición de cualquiera de las restantes consecuencias jurídicas será necesaria la acreditación, al menos, de un hecho típico y antijurídico, siempre que de acuerdo con las circunstancias personales del sujeto activo, hubiera merecimiento, necesidad racional e idoneidad de su aplicación en atención a los fines de prevención especial del delito y de reinserción social que con aquéllas pudieran alcanzarse.

ARTÍCULO 14.- Sólo podrá imponerse una sanción por resolución de la autoridad competente y mediante un procedimiento seguido ante los tribunales previamente establecidos, por lo que ninguna persona podrá ser juzgada por leyes privativas ni por tribunales especiales.

ARTÍCULO 15.- La sanción que resulte de la comisión de un delito no trascenderá de la persona y bienes del sujeto activo.

ARTÍCULO 16.- Quienes tengan la calidad de autores o de partícipes del delito responderán cada uno en la medida de su propia culpabilidad.

ARTÍCULO 17.- No podrá restringirse ninguna garantía o derecho fundamental de la persona imputada, ni imponerse alguna consecuencia jurídica del delito, con base en la peligrosidad del agente o en los rasgos de su personalidad. Toda determinación deberá fundamentarse en el hecho cometido y en el grado de lesión o puesta en peligro al que haya sido expuesto el bien jurídico tutelado.

ARTÍCULO 18.- La culpabilidad no trasciende de la persona y bienes de los sentenciados.

ARTÍCULO 19.- Las consecuencias jurídicas del delito serán impuestas por resolución de autoridad judicial competente, mediante proceso seguido ante los Tribunales previamente establecidos.

ARTÍCULO 20.- Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones deberá aplicarse aquella que favorezca en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

TÍTULO TERCERO

CAPÍTULO I

REGLAS GENERALES SOBRE DELITOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTERVINIENTES

ARTÍCULO 21.- Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales.

ARTÍCULO 22.- El delito sólo puede ser realizado por acción o por omisión.

ARTÍCULO 23.- En los delitos de resultado material, será atribuible el resultado típico producido a quien omite impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo, si:

I. Es garante del bien jurídico protegido;

II. De acuerdo con las circunstancias podía evitarlo, y

III. Su inactividad es equivalente a la actividad prohibida en el tipo penal.

Es garante del bien jurídico quien:

a) Aceptó efectivamente su custodia;

b) Voluntariamente formaba parte de una comunidad que afrontaba peligros de la naturaleza;

c) Con una actividad precedente, imprudente o fortuita, generó el peligro para el bien jurídico tutelado, o

d) Se halla en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, la salud o integridad corporal de algún miembro de su familia.

ARTÍCULO 24.- Los delitos pueden ser:

I. Dolosos:

Obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico de que se trate, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta su realización;

II. Culposos:

Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar;

III. Instantáneo:

Cuando su consumación se agota en el preciso momento en que se han realizado todos los elementos constitutivos del tipo penal;

IV. Permanente:

Cuando se viola el mismo precepto legal y la consumación se prolonga en el tiempo, y

V. Continuado:

Cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas e identidad de sujeto pasivo, se concretan los elementos de un mismo tipo penal.

ARTÍCULO 25.- La detención en caso urgente procederá cuando se reúnan los requisitos que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales y se trate de delitos de prisión preventiva oficiosa previstos en el presente Código.

CAPÍTULO II TENTATIVA

ARTÍCULO 26.- La tentativa del delito es punible cuando la intención se exterioriza ejecutando la actividad que debería consumir el delito u omitiendo la que debería evitarlo, si por causas ajenas a la voluntad del agente, no hay consumación pero si pone en peligro el bien jurídico.

Existe tentativa inacabada cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando parcialmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, y aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

ARTÍCULO 27.- Si el sujeto activo desiste espontáneamente de la ejecución ya iniciada del delito o impide la consumación de dicho delito, no se le impondrá consecuencia jurídica alguna, ni pena ni medida de seguridad, por lo que a éste se refiere, sin perjuicio de aplicar la consecuencia jurídica que corresponda a los actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismo delitos.

CAPÍTULO III CONCURSO DE DELITOS

ARTÍCULO 28.- Existe concurso ideal o formal, cuando con una sola conducta se cometan varios delitos.

ARTÍCULO 29.- Existe concurso real o material, cuando con pluralidad de conductas se cometan varios delitos, si no han sido motivo de sentencia ejecutoriada y la acción para perseguirlos no está prescrita.

ARTÍCULO 30.- No hay concurso cuando las conductas constituyan delito continuado.

CAPÍTULO IV PERSONAS RESPONSABLES DE LOS DELITOS

ARTÍCULO 31.- La responsabilidad penal en el hecho delictuoso, se produce bajo las formas de autoría y participación:

Son autores los que:

- I. Lo realicen por sí;
- II. Lo realicen conjuntamente con otro u otros autores;
- III. Lo lleven a cabo sirviéndose de otro como instrumento;

Son partícipes:

- IV. Los que induzcan o instiguen al autor a cometerlo;
- V. Los que presten ayuda o auxilio al autor para su comisión, y
- VI. Con posterioridad a su ejecución auxiliien, al autor en cumplimiento de una promesa anterior al delito.

ARTÍCULO 32.- Si varias personas toman parte en la realización de un delito determinado y alguno de ellos comete un delito distinto al acordado, todos serán responsables de éste, según su propia culpabilidad, cuando concurren los siguientes requisitos:

- I. Que sirva de medio adecuado para cometer el principal;
- II. Que sea una consecuencia necesaria o natural de aquél, o de los medios concertados;
- III. Que hayan sabido antes que se iba a cometer, o
- IV. Que cuando hayan estado presentes en su ejecución, no hayan hecho cuanto estaba de su parte para impedirlo.

ARTÍCULO 33.- Cuando varios sujetos intervengan en la comisión de un delito y no pueda precisarse el daño que cada quien produjo, para su punibilidad se estará a lo previsto en el artículo 104 de este Código.

ARTÍCULO 34.- Las circunstancias calificativas o agravantes de la conducta delictiva son aplicables a todos los que con conocimiento de éstas intervengan en cualquier grado de su comisión; las modificativas que la atenúen los favorecerán en todo caso.

ARTÍCULO 35.- Las circunstancias personales de alguno o algunos de los sujetos activos o pasivos del delito, cuando sean agravantes o atenuantes del mismo, serán aplicables a todos los que lo cometen teniendo conocimiento de ellas.

ARTÍCULO 36.- Se clasifican como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los previstos en los siguientes artículos de este Código:

- I. Homicidio doloso, previsto en el artículo 353, así como el relacionado con los artículos 357, 358, 359, 361 fracción IX y 362;
- II. Delitos contra el orden constitucional del Estado y su integridad territorial, previsto en el artículo 159;
- III. Rebelión, previsto en los artículos 161 y 162;
- IV. Sedición, previsto en el artículo 170;
- V. Terrorismo, previsto en el artículo 174;
- VI. Evasión de presos, previsto en los artículos 175 y 177, siempre que se trate de procesados o sentenciados por alguno de los delitos previstos en el presente catálogo;
- VII. Ataques a las vías generales de comunicación previsto en los artículos 199 y 200;
- VIII. Delito de contagio sexual, previsto por el artículo 222;
- IX. Corrupción y prostitución de menores o incapaces, previstos en los artículos 230 fracciones II, III y IV; 231, 232 y 233;
- X. Lenocinio, previsto en los artículos 234 y 237;
- XI. Tortura, previsto en el artículo 245;
- XII. Violación en relación con los artículos 293, 294 y 295;
- XIII. Sustracción y tráfico de menores, previsto en el artículo 302;
- XIV. Desaparición forzada de personas, previsto en el artículo 329;
- XV. Parricidio, previsto por el artículo 366;

XVI. Filicidio, previsto por el artículo 367;

XVII. Los delitos de amenazas previsto en el artículo 316, asalto tipificado en los artículos 321 y 322, extorsión reconocido en el artículo 328, lesiones en cualquiera de sus modalidades, robo previsto en el artículo 376, abigeato reconocido en el artículo 388, despojo en términos del artículo 405, daño en las cosas, previsto en los artículos 406, 407 y 409, fraccionamiento ilegal de inmuebles previsto en el artículo 413, en todos los casos siempre y cuando los delitos se cometan con medios violentos como armas o explosivos, y

XVIII. Tentativa de los delitos de violación, previsto por los artículos 293 al 295; homicidio doloso, previsto en el artículo 353, así como el relacionado con los artículos 357, 358, 359, 361 fracción IX y 362; parricidio, previsto en el artículo 366; filicidio previsto en el artículo 367; terrorismo previsto en el artículo 174; tortura, previsto en el artículo 245; y asalto, previsto en los artículos 321 y 322 este último delito siempre y cuando se haya pretendido cometer con medios violentos como armas o explosivos.

ARTÍCULO 37.- Las causas personales de exclusión de la pena sólo favorecen a aquél en quien concurran.

ARTÍCULO 38.- Cuando algún miembro o representante de una persona jurídica, con la excepción de las instituciones del Estado, cometa un delito con los medios que para tal objeto aquella le proporcione, de modo que resulte cometido a nombre, bajo el amparo o en beneficio de la representación societaria, el juez le impondrá a la persona moral, con audiencia del representante legal de la misma y previo procedimiento correspondiente, las sanciones previstas en este código, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por los delitos cometidos.

CAPÍTULO V

CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEL DELITO Y DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

ARTÍCULO 39.- El delito y la responsabilidad penal se excluyen cuando:

I. La acción u omisión se realice sin intervención de la voluntad del agente;

II. Falte alguno de los elementos que integran la descripción legal del delito de que se trate;

III. Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, o del legitimado legalmente para otorgarlo, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- a) Que se trate de un bien jurídico disponible;
- b) Que el titular del bien jurídico, o quien esté legitimado para consentir, tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del bien, y
- c) Que el consentimiento sea expreso o tácito y no medie algún vicio del consentimiento.

Se presume que hay consentimiento, cuando el hecho se realiza en circunstancias tales que permitan suponer fundadamente que, de haberse consultado al titular del bien o a quien esté legitimado para consentir, éstos hubiesen otorgado el consentimiento.

IV. El error de tipo vencible que recaiga sobre algún elemento del tipo penal que no admita, de acuerdo con el catálogo de delitos susceptibles de configurarse de forma culposa prevista en este Código, así como el error de tipo invencible;

V. El consentimiento presunto;

VI. Se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor.

Se presume que existe legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando se cause un daño a quien por cualquier medio trate de penetrar o penetre, sin derecho, al lugar en que habite de forma temporal o permanente el que se defiende, al de su familia o al de cualquier persona respecto de las que el agente tenga la obligación de defender, a sus dependencias o al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación. Igual presunción existirá cuando el daño se cause a un intruso al momento de sorprenderlo en alguno de los lugares antes citados en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión;

VII. Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el sujeto, lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo;

VIII. La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional de la conducta empleada para cumplirlo o ejercerlo;

IX. Al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, a no ser que el sujeto hubiese provocado su trastorno mental para en ese estado cometer el hecho, en cuyo caso responderá por el resultado típico producido en tal situación.

Si la capacidad del autor sólo se encuentra considerablemente disminuida, por desarrollo intelectual retardado o por trastorno mental, a juicio del juzgador se le impondrá de una cuarta parte de la mínima hasta la mitad de la máxima de las penas aplicables para el delito cometido o las medidas de seguridad correspondientes, o bien ambas, tomando en cuenta el grado de inimputabilidad, conforme a un certificado médico apoyado en los dictámenes emitidos por cuando menos dos peritos en la materia;

X. Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible, respecto de:

a) Alguno de los elementos objetivos que integran la descripción legal del delito de que se trate, o

b) La ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma o porque crea que está justificada su conducta.

En caso de que sea vencible el error a que se refiere el inciso a) la penalidad será la del delito culposo, si el hecho de que se trata admite dicha forma de realización.

Si el error vencible es el previsto en el inciso b), la penalidad será de una tercera parte del delito que se trate.

Al que incurra en exceso, en los casos previstos en las fracciones IV, V y VI de este artículo, se le impondrá la cuarta parte de las penas o medidas de seguridad, correspondientes al delito de que se trate, siempre y cuando con relación al exceso, no exista otra causa de exclusión del delito;

XI. En atención a las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible al sujeto una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido conducir conforme a derecho;

XII. Ocultar al autor de un delito o los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impedir que se investigue, cuando no se hiciera por un interés legítimo, si no se emplea

algún medio reprobado por la ley, siempre que se trate de ascendientes o descendientes consanguíneos, afines, o civiles, cónyuge, concubino o concubina, o parientes colaterales por consanguinidad o civiles en su caso, hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo, y los que estén ligados con el autor del delito por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad;

XIII. El Estado de necesidad disculpante, y

XIV. Causar un daño por mero accidente sin dolo, ni culpa, ejecutando un hecho lícito con todas las precauciones debidas.

CAPÍTULO VI REINCIDENCIA

ARTÍCULO 40.- Hay reincidencia siempre que el sancionado por sentencia ejecutoria dictada por cualquier Tribunal de la República o del Extranjero, cometa otro u otros delitos:

I. Mientras esté cumpliendo su primera condena;

II. Después de haberla cumplido, si no ha transcurrido desde entonces o desde que fuere liberado por cualquier causa un término igual a la prescripción de la sanción impuesta;

III. Si el responsable al perpetrar el nuevo delito se encuentra prófugo o sustraído a la acción de la justicia con relación a la primera sentencia, y

IV. En los demás casos que señale la Ley.

La sanción impuesta o sufrida en el extranjero, se tendrá en cuenta si proviniera de un delito que tenga tal carácter en este Código o en alguna otra ley del Estado.

No hay reincidencia cuando el primero o segundo delito sea culposos y el otro intencional.

ARTÍCULO 41.- Los delincuentes reincidentes no gozarán de los siguientes beneficios:

I. Conmutación de la pena, y

II. Libertad condicional de la condena.

CAPÍTULO VII CAUSAS DE INIMPUTABILIDAD

ARTÍCULO 42.- Es inimputable quien no tuviere la capacidad de comprender el carácter antijurídico del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión por las causas siguientes:

- I. Trastorno mental transitorio, producido en forma accidental o involuntaria;
- II. Trastorno mental permanente, y
- III. La sordomudez, careciendo totalmente de instrucción.

ARTÍCULO 43.- Los inimputables que hayan ejecutado acciones u omisiones tipificadas como delitos, serán reclusos en establecimientos especiales, por un tiempo que no excederá al máximo de la pena aplicable al delito de que se trate.

ARTÍCULO 44.- En los casos previstos en este capítulo las personas o enfermos a quienes se aplica reclusión, podrán ser entregadas a quien corresponda hacerse cargo de ellas, siempre que se otorgue caución, depósito o hipoteca hasta por la cantidad equivalente hasta seis meses del salario mínimo vigente en el Estado, a juicio del Juez, para garantizar el daño que pudiera causar por no haberse tomado las precauciones necesarias para su vigilancia.

ARTÍCULO 45.- Cuando el Juez estime que ni aún con la garantía queda asegurado el interés de la sociedad, seguirán en el establecimiento especial en que estuvieron reclusos.

CAPÍTULO VIII DE LOS DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERRELLA DE PARTE

ARTÍCULO 46.- Se perseguirán por querrela de parte los siguientes delitos:

- I. Delitos de contagio sexual;
- II. Atentados al Pudor, salvo que la víctima sea impúber o persona privada de razón, en cuyo caso el delito será perseguido de oficio;

- III. Estupro;
- IV. Abandono de familiares, salvo los casos de excepción que este mismo código señala;
- V. Violencia familiar, salvo los casos a que se refiere el artículo 313, en los que el delito se perseguirá de oficio;
- VI. Golpes simples;
- VII. Injurias;
- VIII. Difamación;
- IX. Calumnias;
- X. Abuso de confianza;
- XI. Robo simple y robo de uso;
- XII. Fraude;
- XIII. Daño en las cosas;
- XIV. Allanamientos de morada, oficina o establecimiento mercantil;
- XV. Administración fraudulenta;
- XVI. Despojo de inmuebles y aguas;
- XVII. Violación o retención de correspondencia;
- XVIII. Revelación de secreto;
- XIX. Responsabilidad médica y técnica;
- XX. Lesiones simples previstas por el artículo 342;
- XXI. Usura;
- XXII. Hostigamiento o acoso sexual, salvo que el sujeto pasivo sea menor de edad o incapaz;
- XXIII. Violación entre cónyuges y concubinos;
- XXIV. Amenazas simples prevista en el artículo 316 de este Código;
- XXV. Los delitos culposos contemplados en el artículo 96 primer párrafo, y 97 del presente código, y
- XXVI. Las demás que contemple el presente código.

TÍTULO CUARTO
SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

CAPÍTULO I

**SANCIONES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONSECUENCIAS LEGALES PARA
LAS PERSONAS JURÍDICAS
SECCIÓN PRIMERA
MEDIDAS DE SEGURIDAD**

ARTÍCULO 47.- Las medidas de seguridad que se pueden imponer con arreglo a este Código son:

- I. Supervisión de la autoridad;
- II. Prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él;
- III. Tratamiento de inimputables o imputables disminuidos;
- IV. Prohibición de comunicarse por cualquier medio, por sí o por interpósita persona con la víctima u ofendido, o con las víctimas indirectas, y
- V. Cuando se trate de delitos que impliquen violencia contra las mujeres, quien juzgue podrá imponer además las siguientes:
 - a. La prohibición al sentenciado de acercarse o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, de la víctima y las víctimas indirectas, o cualquier otro lugar que frecuente la víctima;
 - b. Apercibir al sentenciado a fin de que se abstenga de ejercer cualquier tipo de violencia en contra de la víctima o víctimas indirectas;
 - c. Ordenar vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en los lugares en que se encuentre la víctima o las víctimas indirectas, por el tiempo que determine el juez, y
 - d. Ordenar la custodia por parte de la Fiscalía General del Estado, a la víctima o víctimas indirectas, en los casos en que las circunstancias de riesgo lo ameriten, por el tiempo que determine el juez.

**SECCIÓN SEGUNDA
CONSECUENCIAS LEGALES ACCESORIAS**

ARTÍCULO 48.- Las consecuencias legales accesorias aplicables a las personas jurídicas, son:

- I. Suspensión;
- II. Disolución;
- III. Prohibición de realizar determinadas operaciones;
- IV. Remoción, y
- V. Intervención.

SECCIÓN TERCERA SANCIONES

ARTÍCULO 49.- Son sanciones las siguientes:

- I. Prisión;
- II. Libertad bajo tratamiento;
- III. Semilibertad;
- IV. Multa;
- V. Reparación del daño;
- VI. Suspensión, privación e inhabilitación de Derechos;
- VII. Decomiso o destrucción de los instrumentos del delito;
- VIII. Destitución y suspensión de funciones o empleos;
- IX. Publicación especial de sentencias;
- X. Disolución de personas jurídicas;
- XI. Internación;
- XII. Trabajo en beneficio de la víctima del delito o a favor de la comunidad;
- XIII. Reclusión domiciliaria, y
- XIV. Tratamiento de Deshabitación o de Desintoxicación.

ARTÍCULO 50.- Las sanciones se entienden impuestas con las modalidades y en los términos previstos por este Código.

La autoridad judicial aplicará las sanciones y éstas serán ejecutadas por las autoridades competentes, con la vigilancia de la primera, con los propósitos de asegurar la defensa social y obtener la reinserción social del sentenciado y procurar que no vuelva a delinquir.

CAPÍTULO II PRISIÓN

ARTÍCULO 51.- La prisión consiste en la privación de la libertad personal, la que podrá ser de tres meses a sesenta años y se extinguirá en los lugares o establecimientos que al efecto designe el órgano encargado de la ejecución de las sanciones.

ARTÍCULO 52.- Los sujetos a prisión preventiva serán reclusos en establecimientos o departamentos especiales.

CAPÍTULO III LIBERTAD BAJO TRATAMIENTO

ARTÍCULO 53.- La libertad bajo tratamiento apareja la realización de labores por parte del sentenciado y las demás medidas conducentes a su readaptación social, bajo la orientación y el cuidado de la autoridad ejecutora. En la sentencia se determinará, en su caso, la afectación del producto del trabajo del reo al resarcimiento del daño que causó el delito y al sustento de los dependientes económicos de aquél, sin perjuicio de las restantes obligaciones a cargo del sentenciado. El señalamiento de trabajo se hará tomando en cuenta las necesidades de la defensa social y la vocación, aptitudes y posibilidades del sentenciado.

CAPÍTULO IV SEMILIBERTAD

ARTÍCULO 54.- La semilibertad implica la alteración de períodos breves de reclusión y de libertad bajo tratamiento.

La excarcelación se aplicará, según las circunstancias del caso, durante la jornada de trabajo, con reclusión nocturna; por toda la semana laborable, con reclusión de fin de semana; o en el curso de ésta con reclusión durante la semana laborable.

CAPÍTULO V

TRABAJO EN BENEFICIO DE LA VÍCTIMA O A FAVOR DE LA COMUNIDAD

ARTÍCULO 55.- El trabajo en beneficio de la víctima del delito consiste en la prestación de servicios remunerados en instituciones públicas, educativas, empresas públicas o privadas, en los términos de la legislación correspondiente.

El trabajo en favor de la comunidad consiste en la prestación de servicios no remunerados, en instituciones públicas, educativas, de asistencia o servicio social, o en instituciones privadas de asistencia no lucrativas, que la ley respectiva regule.

En ambos casos se cumplirá bajo la orientación y vigilancia de la autoridad ejecutora.

El trabajo en beneficio de la víctima del delito o en favor de la comunidad, se llevará a cabo en jornadas dentro de períodos distintos al horario de las labores que represente la fuente de ingresos para la subsistencia del sentenciado y la de su familia, sin que pueda exceder de la jornada extraordinaria que determina la ley laboral.

En ninguno de los casos se prestará trabajo que resulte degradante o humillante para el sentenciado.

Podrá imponerse como pena autónoma o como sustitutiva de la pena de prisión o de multa, según el caso. Cada jornada de trabajo en beneficio de la víctima o en favor de la comunidad será sustituida por tres días de prisión o tres días de multa.

CAPÍTULO VI

SANCION PECUNIARIA

ARTÍCULO 56.- La sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño.

La multa consiste en el pago de una suma de dinero al Estado que se fijará por días multa, los cuales no podrán exceder de diez mil veces.

Para los efectos de este Código el día multa será el equivalente al salario mínimo diario vigente en el lugar donde se cometa el delito.

ARTÍCULO 57.- La multa mínima será igual al importe de tres días de salario; la multa máxima sea el equivalente a los días de salario que en cada caso fije la Ley.

ARTÍCULO 58.- Cuando la Ley señale como sanción una multa se impondrá al imputado, aunque éste no perciba ningún salario.

Cuando se acredite que el sentenciado no puede pagar la multa o solamente puede cubrir parte de ella, la autoridad judicial podrá sustituirla total o parcialmente por trabajo en beneficio de la víctima o trabajo a favor de la comunidad.

ARTÍCULO 59.- Cuando la Ley fije solamente el máximo de una multa el término mínimo de esta sanción es el importe de tres días de salario.

ARTÍCULO 60.- La multa que se impusiera como sanción es independiente de la responsabilidad civil.

ARTÍCULO 61.- La multa impuesta se hará efectiva por las oficinas rentísticas mediante la facultad económica coactiva, y podrá ser reducida atendiendo a la capacidad económica del responsable o condonarla en caso de insolvencia.

ARTÍCULO 62.- Cuando varias personas cometen el delito, el Juez fijará la multa para cada uno de ellos.

CAPÍTULO VII REPARACIÓN DEL DAÑO

ARTÍCULO 63.- La reparación del daño que debe ser hecha por el delincuente, tiene el carácter de sanción pública, pero cuando sea exigible a terceros tendrá el carácter de responsabilidad civil y se tramitará en los términos que fije el Código de la materia.

ARTÍCULO 64.- La reparación del daño deberá ser plena, efectiva y preferente a cualquier otra sanción pública, así como proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación del desarrollo integral de la víctima u ofendido, que comprenderá, según sea el caso:

- I. El restablecimiento de las cosas en el estado en que se encontraban antes de cometerse el delito;
- II. La restitución de la cosa obtenida por el delito, así como sus frutos existentes y si no fuere posible, el pago del precio correspondiente al valor comercial en curso;
- III. La indemnización del daño material y moral causado a la víctima o a la personas con derecho a la reparación del daño;
- IV. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados, o
- V. El pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad temporal para trabajar en oficio, arte o profesión, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo.

Si el ofendido no percibía utilidad o salario, o no pudiese determinarse éste, el monto de la reparación del daño se fijará teniendo en cuenta el salario mínimo vigente en la Entidad.

ARTÍCULO 65.- La reparación será fijada por los jueces, de acuerdo a las pruebas obtenidas en el proceso, atendiendo al daño causado y a la afectación del desarrollo integral de la víctima u ofendido.

ARTÍCULO 66.- Tienen derecho a la reparación del daño, en el orden siguiente:

- I. La víctima o el ofendido;
- II. Las personas que dependían económicamente de la víctima o el ofendido;
- III. Los herederos de la víctima o el ofendido aunque no dependieran económicamente de él;
- IV. Sus descendientes, cónyuge, concubina o concubinario;
- V. Sus ascendientes, y
- VI. El Estado a través de la institución encargada de la asistencia a las víctimas del delito.

En el caso de concurrencia serán preferidos en su orden, las personas que figuren en la enumeración de este artículo, quienes podrán comparecer ante el juez de control y promover lo necesario para la cuantificación del monto, asegurar su pago y en su caso obtenerlo.

ARTÍCULO 67.- Cuando se trate de exigir la reparación del daño a personas distintas a los procesados, deberá hacerse en los términos que señalan las leyes civiles, para las obligaciones que nacen de los actos ilícitos.

ARTÍCULO 68.- Salvo lo dispuesto en el artículo 65 de este código, la obligación de pagar el importe de la sanción pecuniaria es preferente y se cubrirá primero que cualquier otra de las obligaciones personales que se hubieren contraído con posterioridad al delito.

Son terceros obligados a la reparación del daño:

I. Los ascendientes por los delitos de sus descendientes que se hallaren bajo su patria potestad;

II. Los tutores, curadores o custodios, por los delitos de los incapacitados que se hallen bajo su autoridad;

III. Los directores de talleres que reciban en su establecimiento discípulos o aprendices, por los delitos que éstos ejecuten durante el tiempo que se hallen bajo el cuidado y dirección de aquéllos, siempre y cuando acaezcan con motivo y en el desempeño de sus servicios;

IV. Las personas físicas o jurídico-colectivas por los delitos que cometan sus obreros, jornaleros, empleados, domésticos o artesanos;

V. Las personas jurídico-colectivas, por los delitos de sus socios, agentes o directores en los mismos términos en que, conforme a las leyes, sean responsables de las demás obligaciones que aquéllas contraigan, y

VI. El Estado, los municipios y organismos descentralizados subsidiariamente por sus servidores públicos, cuando el delito se cometa con motivo o en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

ARTÍCULO 69.- En los casos en que proceda la reparación del daño se exigirá de oficio por el Ministerio Público, con el que podrán coadyuvar el ofendido, sus

derechohabientes o su representante en los términos que prevenga el Código Nacional de Procedimientos Penales.

ARTÍCULO 70.- Los responsables de un delito están obligados solidaria y mancomunadamente a cubrir el importe de la reparación del daño.

ARTÍCULO 71.- El cobro de las sanciones pecuniarias deberá hacerse en efectivo en la forma que determine la autoridad ejecutora de sanciones, debiendo cobrarse de preferencia la reparación del daño y en su caso, repartirse proporcionalmente entre las víctimas, si éstas renunciaren a la reparación, el importe se aplicará al Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito.

El juez podrá fijar plazos para el pago de la reparación del daño, que en conjunto no excederán de un año, valorando el monto de los daños o perjuicios y de la situación del sentenciado; pudiendo para ello exigir garantía sí lo considera necesario.

ARTÍCULO 72.- Una vez que quede firme la sentencia y se realice la consignación de la reparación de daños y perjuicios se le notificará personalmente al ofendido o en su caso a sus derechohabientes del pago exhibido. Si el ofendido o sus derechohabientes renuncian o no cobran la reparación del daño, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación, el importe de éste se entregará a la Hacienda Pública Estatal, para que ésta la transfiera al Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, en los términos de la legislación aplicable.

CAPÍTULO VIII

SUSPENSIÓN, PRIVACION E INHABILITACION DE DERECHOS

ARTÍCULO 73.- La suspensión consiste en la pérdida temporal de derechos, funciones, cargos, empleos o comisiones. La privación es la pérdida definitiva de los mismos. La inhabilitación implica una incapacidad legal temporal o hasta por diez años para obtener y ejercer aquéllos.

ARTÍCULO 74.- La suspensión que sea consecuencia de otra sanción comienza a partir del momento en que la sentencia quede firme y concluye con la sanción principal.

La que se imponga conjuntamente con una sanción privativa de libertad, comenzará a contarse al terminar ésta y cuando la suspensión se impone como única sanción su duración se empezará a contar desde que quede firme la sentencia.

ARTÍCULO 75.- La sanción de prisión suspende los derechos políticos y de tutor, curador, apoderado, defensor, albacea, perito, depositario, interventor judicial, síndico, árbitro y representante en cualquier asunto administrativo judicial.

CAPÍTULO IX

DECOMISO O DESTRUCCION DE LOS INSTRUMENTOS DEL DELITO

ARTÍCULO 76.- Los instrumentos del delito y los que sean objeto de él, se decomisarán si son de uso prohibido; si son de uso lícito se decomisarán al imputado solamente cuando fuere condenado; si pertenecen a tercera persona, sólo se decomisarán cuando hayan sido empleados con conocimiento de su dueño para fines delictuosos.

En los delitos culposos no se decretará el decomiso de los instrumentos cuando sean de uso lícito.

ARTÍCULO 77.- Si los objetos de uso prohibido de que habla el artículo anterior sólo sirvieren para delinquir, se destruirán al ejecutarse la sentencia irrevocable, asentándose en el proceso razón de haberse hecho así; fuera de este caso, se aplicarán a la Hacienda Pública.

ARTÍCULO 78.- La Hacienda Pública adquiere la propiedad, por ministerio de ley, de los objetos que se encuentren a disposición de las autoridades judiciales del orden penal, que no hayan sido o no puedan ser decomisados y que en un lapso no mayor de un año, a partir de la sentencia ejecutoriada o del auto de libertad respectivamente, no sean recogidos por quien tenga derecho para hacerlo, en los casos en que proceda su devolución.

CAPÍTULO X

DE LA SUSPENSIÓN O PRIVACIÓN DE EJERCICIO DE OFICIO, PROFESIÓN O DERECHO A CONDUCIR VEHÍCULOS

ARTÍCULO 79.- La suspensión y la privación de los derechos, oficio o profesión y las de manejar vehículos, motores o maquinaria, procederá en los casos expresamente señalados por este Código u otras Leyes.

Lo mismo se observará también para la suspensión o destitución de funciones y empleos.

ARTÍCULO 80.- La suspensión de derechos es de dos clases:

- I. La que por Ministerio de la Ley resulta de una sanción como consecuencia necesaria de ésta, y
- II. La que por sentencia formal se impone como sanción.

En el primer caso, la suspensión comienza y concluye con la sanción de que es consecuencia.

En el segundo caso: a) Cuando la suspensión se imponga sin ir acompañada de otra sanción se empezará a contar desde que cause ejecutoria el fallo comprendiendo todo lapso fijado; b) Si la suspensión se impone con sanción privativa de libertad, comenzará al terminar ésta y su duración será señalada en la sentencia.

CAPÍTULO XI PUBLICACIÓN ESPECIAL DE SENTENCIAS

ARTÍCULO 81.- La publicación especial de sentencia consiste en la inserción total o parcial de ella, en uno o más periódicos que circulen en la Entidad, los cuales serán escogidos por el Juez, quien resolverá la forma en que debe hacerse la publicación. Los gastos que se originen con tal motivo, se harán por cuenta del sentenciado, del ofendido si éste lo solicitare o del Estado si el Juez lo estima necesario.

La publicación especial de sentencia solo procederá en delitos que atenten contra el honor, la honra o dignidad de la víctima u ofendido, y no se trate de servidores o entes públicos.

El Juez podrá, a petición y a costa del ofendido ordenar la publicación de la sentencia en algún otro periódico de Entidad diferente.

CAPÍTULO XII PROHIBICIÓN DE IR A LUGAR DETERMINADO O DE RESIDIR EN EL

ARTÍCULO 82.- La prohibición de ir a un lugar determinado consiste en limitar la libertad deambulatoria de la persona sujeta a proceso penal o sentenciada, a efecto de que no se acerque a un área geográfica o resida en ella.

Cuando se establezca como medida de protección, se impondrá por el tiempo estrictamente necesario. Si se impone como sanción su duración será de entre tres meses y cinco años.

CAPÍTULO XIII APERCIBIMIENTO

ARTÍCULO 83.- El apercibimiento consiste en la conminación que el Juez hace a la persona, cuando se teme con fundamento que está en disposiciones de cometer un nuevo delito, ya sea por su actitud o por amenazas de que en caso de cometer el que se propone u otro semejante, será considerado como reincidente.

CAPÍTULO XIV AMONESTACIÓN

ARTÍCULO 84.- La amonestación consiste en la advertencia que el juez hace al sentenciado, en diligencia formal, explicándole los efectos jurídicos del delito que cometió, exhortándolo a la enmienda y previniéndolo de las consecuencias en caso de reincidir. La amonestación se hará en privado o públicamente a juicio del Juez.

CAPÍTULO XV VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD

ARTÍCULO 85- La vigilancia de la autoridad tendrá un doble carácter:

- I. La que se impone por disposición expresa de la Ley, y
- II. La que se podrá imponer, discrecionalmente, a los responsables de delitos de robo, lesiones y homicidios dolosos, y a los reincidentes o habituales.

En el primer caso, la duración de la vigilancia será señalada en la sentencia. En el segundo, la vigilancia comenzará a partir del momento en que el inculpado extinga la pena de prisión y no podrá exceder de un lapso de cinco años.

CAPÍTULO XVI TRATAMIENTO DE DESHABITUACIÓN O DE DESINTOXICACIÓN

ARTÍCULO 86.- Cuando el delito haya sido cometido por una persona adicta al consumo de bebidas embriagantes, estupefacientes, psicotrópicos o sustancias que produzcan efectos similares, se le aplicará, independientemente de la pena que corresponda, un tratamiento de deshabituación o desintoxicación, según el caso, que no podrá exceder del término de la pena impuesta por el delito cometido.

Cuando se trate de penas no privativas o restrictivas de la libertad, el tratamiento será hasta de un año.

CAPÍTULO XVII SUSPENSIÓN, DISOLUCIÓN, PROHIBICIÓN DE REALIZAR DETERMINADAS OPERACIONES, REMOCIÓN E INTERVENCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

ARTÍCULO 87.- Las consecuencias jurídicas accesorias para las personas jurídicas se aplicarán conforme a lo señalado a continuación:

- I. La suspensión consiste en cesar la operación de la persona jurídica durante un máximo de cinco años según lo determine el juzgador;

II. La disolución consiste en la conclusión definitiva de toda actividad de la persona jurídica, la cual no podrá volverse a constituir por las mismas personas en forma real o encubierta. La conclusión de toda actividad social se hará sin perjuicio de la realización de los actos necesarios para la disolución y liquidación total. El juzgador designará en el mismo acto un liquidador que procederá a cumplir todas las obligaciones contraídas hasta entonces por la persona jurídica incluyendo las responsabilidades derivadas del delito cometido, observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos, conforme a la naturaleza de éstos y de la entidad objeto de la liquidación;

III. La prohibición de realizar determinadas operaciones. Su duración podrá ser hasta por diez años y se referirá, exclusivamente, a las operaciones expresamente determinadas por el juez, mismas que deberán tener relación directa con el delito cometido. Los administradores y el comisario de la sociedad serán responsables ante el juez del cumplimiento de esta prohibición e incurrirán en las penas que establece este Código por desobediencia a un mandato de la autoridad;

IV. La remoción consiste en la sustitución de los administradores por uno designado por el juzgador durante un periodo máximo de cinco años. Para realizar la designación, el juzgador podrá atender la propuesta que formulen los socios o asociados que no hubiesen tenido participación en el delito, y

V. La intervención consiste en la supervisión de las funciones que realizan los órganos de representación de la persona jurídica y se ejercerá con las atribuciones que la ley confiere al interventor hasta por el término de cinco años.

ARTÍCULO 88.- Al imponer las consecuencias jurídicas accesorias previstas en este capítulo, el juzgador tomará las medidas pertinentes para dejar a salvo los derechos de los trabajadores y terceros frente a la persona jurídica colectiva, así como aquellos otros derechos que sean exigibles frente a otras personas, derivados de actos celebrados con la persona jurídica sancionada.

Estos derechos quedan a salvo aun cuando el juzgador no tome las medidas a que se refiere el párrafo anterior.

CAPÍTULO XVIII DE LA RECLUSIÓN DOMICILIARIA

ARTÍCULO 89.- La reclusión domiciliaria consiste en la obligación de residir en un determinado domicilio y no salir de éste, mismo que será designado por el Juez competente considerando las exigencias de la tranquilidad pública y la seguridad de la víctima u ofendido con las circunstancias del sentenciado.

CAPÍTULO XIX DEL INCUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

ARTÍCULO 90.- El que quebrante una medida de seguridad que se le ha impuesto, será responsable del delito de desobediencia a mandato judicial, sin perjuicio de ser compelido, por los medios de apremio que correspondan, a cumplir la medida de seguridad.

TÍTULO QUINTO APLICACIÓN DE SANCIONES CAPÍTULO I REGLAS GENERALES

ARTÍCULO 91.- Dentro de los límites fijados por la Ley, los Tribunales aplicarán las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución, las peculiares del delincuente y las demás señaladas en el artículo siguiente.

Cuando se trate de delito que merezca pena alternativa, el juez podrá imponer la sanción privativa de libertad sólo cuando ello sea ineludible para los fines de justicia restaurativa, así como cuando ello sea la única forma de garantizar la reparación del daño.

ARTÍCULO 92.- En la aplicación de las sanciones penales se tendrá en cuenta:

I. La naturaleza de la acción u omisión, los medios empleados para ejecutarla, la gravedad del daño causado y el peligro corrido;

II. La edad, la educación, la ilustración, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir y sus condiciones económicas, y

III. Las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la comisión del delito y los demás antecedentes o condiciones personales que estén comprobados, así como sus vínculos de parentesco, de amistad o nacidos de otras relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren la mayor o menor culpabilidad del delincuente.

La individualización de la sanción en juicio oral deberá realizarse dentro del parámetro que resulte de incrementar una cuarta parte de la pena mínima, a los mínimos y máximos previstos para cada delito tanto en su forma básica como en sus modalidades atenuantes o agravantes.

Tratándose de procedimiento abreviado para los efectos de reducción de pena se estará a las sanciones que para cada delito prevé el presente Código.

ARTÍCULO 93.- No es imputable al imputado el aumento de gravedad proveniente de circunstancias particulares del ofendido, si las ignoraba inculpablemente al cometer el delito.

ARTÍCULO 94.- Cuando un solo hecho pueda ser considerado en dos figuras delictivas distintas y bajo cada una de ellas merezca una sanción diversa, se impondrá la mayor.

ARTÍCULO 95.- Cuando el responsable de un delito doloso sea miembro de alguna corporación policial pública o de seguridad privada, la sanción impuesta se aumentará hasta en una mitad más; además de imponérsele la destitución e inhabilitación para ejercer empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza de manera permanente, cuando así proceda.

El supuesto previsto en el párrafo anterior será aplicable a quien habiendo sido miembro de una corporación policial o de seguridad privada, dentro de los cinco años posteriores a la separación del cargo, cometa alguno de los siguientes delitos: contra el orden constitucional del Estado y su integridad territorial previsto en el artículo 159;

conspiración relacionado con el artículo 160; rebelión contemplado en los artículos 161, 162, 163 y 165; sedición y otros desórdenes públicos con relación a los numerales 170 y 173; terrorismo de conformidad con el artículo 174; evasión de presos referido en los artículos 175, 177 y 181; armas prohibidas concerniente a lo dispuesto en el numeral 186; asociaciones delictuosas relativo a los numerales 187, 188, 189 y 190; el previsto en el artículo 216; corrupción y prostitución de menores e incapaces con relación a los artículos 230, 231, 232 y 233; lenocinio previsto en el artículo 234; revelación de secretos relativo a los numerales 239 y 240; ejercicio indebido de funciones tocante al artículo 242; cohecho contemplado en el artículo 247; falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad contemplado en el artículo 281; usurpación de funciones públicas o de profesión referido en el artículo 285; uso indebido de condecoraciones, insignias, distintivos o uniformes de conformidad con lo que establece el artículo 286; violación mencionado en el artículo 293; sustracción y tráfico de menores concerniente al artículo 301; amenazas relacionado con los artículos 316, 317 y 318; chantaje previsto en el artículo 319; allanamiento de morada, oficina o establecimiento mercantil contemplado en el artículo 320; asalto en referencia a los artículos 321 y 322; privación de la libertad personal de conformidad con el artículo 323; extorsión previsto en el artículo 328; desaparición forzada de personas mencionado en el artículo 329; homicidio de conformidad con el numeral 353, 357 y 361; homicidio contra la mujer por razón de misoginia previsto en el artículo 361, fracción IX.

CAPÍTULO II

APLICACIÓN DE SANCIONES A LOS DELITOS CULPOSOS

ARTÍCULO 96.- En los casos de delitos culposos se impondrá hasta la mitad de las penas y medidas de seguridad asignadas por la ley al delito doloso que corresponda, con excepción de lo previsto en el presente artículo. Además, inhabilitación de tres meses hasta por el tiempo de la sanción para manejar vehículos de motor, motores o maquinaria, cuando el delito se hubiere cometido al usar alguno de estos instrumentos.

Quando se causare homicidio, a consecuencia de culpa; la sanción será de dos a ocho años de prisión y multa de veinte a noventa días de salario mínimo. En el supuesto que sean dos o más víctimas la sanción será de cuatro a nueve años de prisión.

Cuando se causare lesiones a consecuencia de culpa que pongan en peligro la vida, se perseguirá oficiosamente.

Cuando se cometan lesiones previstas en los artículos 343, 344, 345 y 346 imputables a personas que conduzcan en estado de ebriedad o bajo los efectos de algún narcótico, la pena correspondiente a la lesión dolosa de que se trate podrá aumentarse hasta en una mitad más.

Cuando se causare homicidio o lesiones que pongan en peligro la vida, a consecuencia de actos u omisiones culposos que sean imputables a las personas que conduzcan en estado de ebriedad o bajo el influjo de algún narcótico o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares; o bien transportando personas en servicio público o al público; la sanción será de tres a doce años de prisión e inhabilitación hasta por el término de duración de la pena privativa de libertad.

No se impondrá pena alguna a quien por culpa y con motivo de la conducción ó tránsito de vehículos ocasione lesiones u homicidio a su cónyuge, concubino, ascendientes, descendientes o hermanos, siempre que no se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de algún narcótico o de cualquiera otra sustancia que produzca efectos similares, plenamente comprobado.

Cuando se cometan los delitos de lesiones o daño en las cosas en forma culposa, con motivo de la conducción de vehículos de motor, encontrándose su conductor en estado de ebriedad o bajos los efectos de algún narcótico o cualquier sustancia tóxica, se perseguirán oficiosamente.

ARTÍCULO 97.- Será responsable a título de culpa, el propietario o responsable de la conducción de semovientes por los delitos que resulten.

Para la imposición de la sanción se estará a lo dispuesto por el artículo 96 párrafo primero de este Código.

ARTÍCULO 98.- La calificación de la gravedad de la culpa queda al prudente arbitrio del Juez, quien deberá tomar en consideración las circunstancias generales que resulten aplicables previstas en el artículo 91 de este código, y las especiales siguientes:

I. La mayor o menor facilidad de prever y evitar el daño que resultó, si para evitar el daño bastaba una reflexión o atención ordinaria y conocimientos comunes en alguna ciencia, arte u oficio;

II. Si el inculpado ha delinuido anteriormente en circunstancias semejantes;

III. Si tuvo tiempo para obrar con reflexión y cuidado necesarios, y

IV. Tratándose de delitos cometidos con motivo del tránsito de vehículos y del manejo de motores o maquinaria, el estado de equipo, vías de comunicaciones, autorizaciones para su manejo y demás condiciones de funcionamiento mecánico.

ARTÍCULO 99.- La responsabilidad civil será la misma en el delito culposo que en el intencional.

CAPÍTULO III SANCIÓN PARA LA TENTATIVA

ARTÍCULO 100.- Al responsable de tentativa se le aplicará de tres meses hasta las tres cuartas partes del máximo de la sanción señalada en la ley al delito que el agente pretendió realizar.

Para imponer la sanción de la tentativa, los jueces valorarán la culpabilidad del autor y el grado a que se hubiere llegado en la ejecución del delito.

CAPÍTULO IV SANCIONES EN LOS CASOS DE CONCURSOS

ARTÍCULO 101.- En caso de concurso real se impondrá la sanción correspondiente al delito que merezca pena mayor, la que podrá aumentarse hasta la suma de las sanciones de los demás delitos, sin que pueda exceder de sesenta años.

ARTÍCULO 102.- En caso de concurso ideal, se aplicará la sanción correspondiente al delito que merezca pena mayor, la que podrá ser aumentada hasta una mitad más de los demás delitos cometidos, sin que pueda exceder de sesenta años.

CAPÍTULO V
PUNIBILIDAD PARA LA COMPLICIDAD, AUXILIO EN CUMPLIMIENTO DE
PROMESA ANTERIOR Y AUTORÍA INDETERMINADA

ARTÍCULO 103.- Para los casos señalados en las fracciones IV, V y VI del artículo 31 de este Código, se impondrán hasta las tres cuartas partes de la pena o medida de seguridad señalada para el delito cometido.

Igual sanción que los autores directos, se impondrá a los partícipes, que intervengan a título de instigador o inductor, tratándose de los delitos de homicidio, parricidio, filicidio y violación.

ARTÍCULO 104.- Para el caso previsto en el artículo 33 de este Código, se impondrán hasta las tres cuartas partes de la pena o medida de seguridad señaladas para el delito cometido.

CAPÍTULO VI
RECLUSIÓN PARA ENFERMOS MENTALES Y SORDOMUDOS

ARTÍCULO 105.- En los casos de procesados o condenados que enloquezcan, se procederá en los términos que determine el Código Nacional de Procedimientos Penales.

ARTÍCULO 106.- En los casos previstos en este Capítulo, las personas enfermas a quienes se aplique reclusión se procederá en los términos del artículo 44 de este Código.

CAPÍTULO VII
SANCIONES A LAS PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PRIVADO O QUE SE
OSTENTEN COMO TALES

ARTÍCULO 107.- La disolución traerá como consecuencia la publicación de la sentencia y la cancelación de la inscripción del acta constitutiva, en su caso, en el Registro Público respectivo.

CAPÍTULO VIII CONMUTACIÓN DE PENAS

ARTÍCULO 108.- Cuando ya esté cubierta la sanción económica que se hubiere impuesto, y siempre que la pena de prisión no exceda de cinco años, podrá obtener el sentenciado el beneficio de la conmutación de la sanción; salvo lo previsto en este Código.

ARTÍCULO 109.- En el caso del artículo anterior, la multa será el equivalente al diez por ciento del salario mínimo vigente, por cada día de prisión conmutado.

ARTÍCULO 110.- Una vez pagada la multa que sustituya la prisión, la autoridad que conmutó la sanción ordenará la libertad del sentenciado.

ARTÍCULO 111.- Los montos por concepto de conmutación de la pena, son créditos a favor de la hacienda estatal y se aplicarán a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.

ARTÍCULO 112.- La conmutación no exime de la responsabilidad civil.

ARTÍCULO 113.- No podrá gozar del beneficio de la conmutación quien:

- I. Sea declarado delincuente habitual o reincidente, y
- II. Por hechos diversos que ya haya conmutado.

Se exceptúan de las fracciones anteriores los sentenciados por la comisión de delitos culposos.

CAPÍTULO IX SUSTITUCIÓN CONDICIONADA DE PENAS SECCIÓN PRIMERA

REGLAS GENERALES

ARTÍCULO 114.- Previa petición del sentenciado, el defensor o del ministerio público, el Juez podrá sustituir condicionadamente la pena de prisión por la de semilibertad o por la de trabajo en beneficio de la víctima del delito o a favor de la comunidad, siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos:

- I. La sanción impuesta no exceda de cinco años;
- II. Se cubra la reparación del daño en caso de existir condena al pago de cantidad líquida, y
- III. Caucione el cumplimiento de la multa y la pena de prisión impuesta. Cada día de prisión se garantizará con importe equivalente a medio día de salario mínimo vigente en la región.

La garantía a que se refieren las fracciones II y III podrá consistir en depósito en efectivo, fianza personal o de compañía afianzadora legalmente autorizada, prenda, hipoteca o fideicomiso legalmente constituido.

ARTÍCULO 115.- Para establecer la modalidad de la semilibertad en términos del artículo 54, párrafo segundo, del presente Código, el juez deberá de atender a las particularidades de cada caso.

ARTÍCULO 116.- Cada día que el sentenciado esté recluso bajo cualquiera de las modalidades que prevé el artículo 54 de este Código, equivale a dos días de la pena de prisión impuesta. Igual equivalencia tendrá cada día trabajado en beneficio de la víctima o a favor de la comunidad.

ARTÍCULO 117.- En la hipótesis de que se haya decretado la sustitución de pena de prisión por trabajo en beneficio de la víctima o a favor de la comunidad, el Juez podrá dejar sin efecto la sustitución y ordenar se ejecute la pena de prisión impuesta, en los siguientes casos:

- I. Cuando el sentenciado no cumpla con las condiciones que le fueron impuestas, para tal efecto, salvo que el juzgador estime conveniente apercibirlo de que si incurre en una nueva falta, se hará efectiva la sanción sustituida. En estos casos, se fijará garantía

para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones con motivo del sustitutivo concedido,
o

II. Cuando al sentenciado se le condene por delito diverso.

En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida, se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el sentenciado hubiera cumplido la pena sustitutiva.

ARTÍCULO 118.- La obligación del fiador concluirá al extinguirse la pena impuesta, en caso de habersele nombrado para el cumplimiento de los deberes inherentes a la sustitución de penas.

Cuando el fiador tenga motivos para no continuar en su desempeño, los expondrá al Juez a fin de que éste, si los estima fundados, prevenga al sentenciado para que presente nuevo fiador dentro del plazo que se le fije, apercibido de que de no hacerlo, se le hará efectiva la pena. Las obligaciones del fiador continuarán hasta que sea sustituido o se haga efectiva la pena.

ARTÍCULO 119.- El sentenciado que considere que al dictarse la sentencia, en la que no hubo pronunciamiento sobre la sustitución de la pena reunía las condiciones fijadas para su obtención y que está en aptitud de cumplir con los requisitos para su otorgamiento, podrá solicitarlo ante el Juez de la causa.

ARTÍCULO 120.- A los sentenciados sujetos a semilibertad o trabajo en beneficio de la víctima del delito o a favor de la comunidad no les será aplicable el beneficio de la libertad condicional.

SECCIÓN SEGUNDA REGLAS ESPECIALES

ARTÍCULO 121.- Los sentenciados que se ubiquen en los supuestos del artículo 115 de este Código podrán solicitar la sustitución condicionada de la pena de prisión por la de semilibertad o trabajo en beneficio de la víctima o a favor de la comunidad, siempre que se reúnan los requisitos previstos en la sección anterior.

Previo a emitir la resolución correspondiente el juez deberá escuchar al ministerio público.

ARTÍCULO 122.- En la sanción de semilibertad si el sentenciado incumple su obligación de internarse en los días y horas determinados por el juzgador, se hará efectiva la fianza y se le revocará de plano la semilibertad, debiendo quedar recluido en el lugar que para tal efecto designe la autoridad correspondiente por el tiempo que restare de la pena de prisión impuesta.

ARTÍCULO 123.- El sentenciado que cometa un delito doloso durante la vigencia de la pena sustituida y resulte penalmente responsable, no podrá acceder a ninguna de las modalidades previstas en el presente capítulo.

CAPÍTULO X LIBERTAD CONDICIONAL

ARTÍCULO 124.- El condenado a sanción privativa de libertad por más de dos años, que hubiere cumplido los dos tercios de su condena observando con regularidad los reglamentos carceleros, podrá obtener su libertad condicional por resolución del Juez de Ejecución, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

I. Que alguna persona solvente, honrada y de arraigo, se obligue a vigilar la conducta del reo y a informar bimestralmente acerca de ella, presentándolo siempre que para ello fuere requerido; si no cumple, se hará efectiva la cantidad que se hubiere fijado al conceder la libertad, a favor del Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito;

II. Que el reo liberado adopte, en el plazo que la resolución determine, oficio, arte, industria, profesión o empleo, si no tuviere medios propios de subsistencia;

III. Que el agraciado con la libertad condicional resida en el lugar que se le autorice, del cual no podrá ausentarse sino con permiso del juez de ejecución, y

IV.- Que se garantice el pago de la responsabilidad civil, para el caso de que fuere condenado a ella, y no la hubiere cubierto.

ARTÍCULO 125.- La libertad condicional no se concederá a los declarados reincidentes o habituales, ni a los condenados por los delitos de homicidio, filicidio, parricidio, violación y asalto.

ARTÍCULO 126.- Siempre que el agraciado con la libertad condicional observe mala conducta, o deje de cumplir con alguna de las condiciones expresadas en el artículo 124, se le privará nuevamente de la libertad para que extinga toda la parte de la sanción de que se le había hecho gracia, sea cual fuere el tiempo que lleve de estar disfrutando del beneficio.

CAPÍTULO XI SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA CONDENA

Artículo 127.- El Juez, previa solicitud del sentenciado, su defensor o el ministerio público, podrá suspender la ejecución de las sanciones impuestas al tiempo de pronunciarse la sentencia definitiva, de acuerdo con las siguientes fracciones:

I. Que la sanción privativa de libertad no se exceda de dos años si concurren las siguientes condiciones:

- a) Que sea la primera vez que delinque el reo;
- b) Que haya observado buena conducta;
- c) Que tratándose de delitos de robo, fraude y abuso de confianza, el inculcado haya residido en el lugar en que delinquiró, cuando menos desde seis meses antes de la comisión del delito, y
- d) Que otorgue caución por la cantidad que fije el Juez, para garantizar que se presentará ante la autoridad siempre que fuere requerido y de que cubrirá la responsabilidad civil si fuere condenado a ella;

II. Si durante el término de tres años, contados desde la fecha de la sentencia que cause ejecutoria, el condenado no diere lugar a nuevo proceso que concluya con sentencia condenatoria, se considerará extinguida la sanción fijada en aquélla.

En caso contrario, se hará efectiva la primera sentencia, además, de la segunda, en la que el reo será considerado como reincidente;

III. La suspensión comprenderá no solamente la sanción privativa de la libertad, sino las demás que se hayan impuesto al delincuente; pero éste quedará obligado, en todo caso, a la responsabilidad civil;

IV. A quienes se conceda el beneficio de la suspensión condicional, se les hará saber lo dispuesto en las fracciones segunda y tercera de este artículo, lo que se asentará por diligencia formal;

V. La obligación contraída por el fiador conforme al inciso d) de la fracción I de este artículo concluirá seis meses después de transcurridos los tres años que expresa la fracción II, siempre que el condenado no diere lugar a nuevo proceso o cuando en éste se pronuncie sentencia absolutoria, y

VI. Cuando el fiador tenga motivos fundados para no continuar desempeñando el cargo, lo expondrá al juez a fin de que éste, si lo estima justo, prevenga al reo que presente nuevo fiador dentro del plazo que prudentemente fije, apercibido de que se hará efectiva la sanción si no lo efectúa.

En caso de muerte o insolvencia del fiador, estará obligado el reo a poner el hecho en conocimiento del Juez.

ARTÍCULO 128.- El órgano jurisdiccional, al pronunciar sentencia, podrá indicar al juez ejecutor de sentencias la remisión de la pena, si concurren las siguientes circunstancias:

I. Que de lo actuado se advierta que el sentenciado haya obrado por motivos excepcionales, en cuyo caso, el órgano jurisdiccional considere que no es necesaria la pena por las circunstancias particulares del activo;

II. Que haya sido reparado el daño causado a la víctima o al ofendido, y

III. Que la pena impuesta no rebase los cinco años de prisión.

TÍTULO SEXTO
EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL
CAPÍTULO I
CUMPLIMIENTO DE LA PENA O MEDIDA DE SEGURIDAD

ARTÍCULO 129.- La potestad para ejecutar la pena o medida de seguridad impuesta, se extingue por cumplimiento de las mismas o de las penas por las que se hubiesen sustituido o conmutado.

Así mismo, la sanción que se hubiese suspendido se extinguirá por el cumplimiento de los requisitos establecidos para el otorgamiento de la suspensión, en los términos y dentro de los plazos legalmente aplicables.

CAPÍTULO II MUERTE DEL DELINCUENTE

ARTÍCULO 130.- La muerte del delincuente extingue la sanción penal, así como las sanciones que se hubieren impuesto, a excepción de la responsabilidad civil, la de decomiso de los instrumentos con que se cometió el delito y de las cosas que sean efecto u objeto de él, salvo las excepciones que establezcan las leyes.

CAPÍTULO III PERDÓN DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO

ARTÍCULO 131.- El perdón del ofendido o de su representante legal otorgado ante el Ministerio Público, Juez de Control o Notario Público, extingue la acción penal cuando concurren los requisitos siguientes:

- I. Que el delito se persiga por querrela de parte;
- II. Que el perdón del ofendido se realice antes del auto de apertura a juicio;
- III. Que el perdón se otorgue por el ofendido mayor de edad, o por la persona que éste reconozca ante la autoridad ministerial o judicial como su legítimo representante, o por quien acredite serlo legalmente, o en su defecto, por el tutor especial que designe el juez que conozca el proceso, y
- IV. Tratándose de delitos cometidos por razones de género que admitan el perdón, éste estará condicionado a la reparación del daño y, en su caso, a que el indiciado se

someta al tratamiento necesario en alguna institución pública de salud de la entidad, para evitar conductas reiterativas. Para tal efecto, el Ministerio Público deberá vigilar que obre la constancia que acredite su estricto cumplimiento.

En todos los casos el imputado deberá brindar disculpa pública a la víctima del delito.

CAPÍTULO IV REINSERCIÓN SOCIAL

ARTÍCULO 132.- La reinserción social tiene por objeto reintegrar al condenado al ejercicio de los derechos civiles, políticos o de familia, que había perdido en virtud de sentencia ejecutoria dictada en un proceso, o en cuyo ejercicio estuviere suspendido.

CAPÍTULO V CONCLUSIÓN DE TRATAMIENTO DE PERSONAS INIMPUTABLES

ARTÍCULO 133.- La potestad para la ejecución de las medidas de tratamiento a personas inimputables se considerará extinguida si se acredita que la persona ya no necesita tratamiento. Si la persona inimputable se encontrara prófuga y posteriormente fuese detenida, la potestad para la ejecución de dicha medida se considerará extinguida, siempre que se acredite que las condiciones personales del sujeto que dieron origen a su imposición ya han cesado.

CAPÍTULO VI INDULTO

ARTÍCULO 134.- El indulto extingue la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad impuestas en sentencia ejecutoria, salvo el decomiso de instrumentos, objetos y productos relacionados con el delito, así como la reparación del daño.

El Ejecutivo podrá otorgar el indulto respecto al fallo ejecutoriado, tomando siempre en consideración el grado de reinserción social del sentenciado, el hecho de que su liberación no represente un peligro para la tranquilidad y la seguridad pública.

No podrá otorgarse el indulto a los sentenciados por los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa conforme al artículo 19 de la Constitución General de la República, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el presente código.

CAPÍTULO VII
PRESCRIPCIÓN
SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 135.- La prescripción extingue la acción penal y la facultad de ejecutar las sanciones impuestas.

ARTÍCULO 136.- La prescripción es personal y para ello bastará el simple transcurso del tiempo señalado por la Ley.

La prescripción será declarada de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del proceso.

SECCIÓN II
PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO DE QUERRELLA

ARTÍCULO 137.- El derecho para presentar querrela o acto equivalente por un delito, sea o no continuado que sólo pueda perseguirse por queja de parte, prescribirá en un año, contado desde el día en que la parte ofendida tenga conocimiento del delito, y en cinco, en cualquiera otra circunstancia. Presentada la querrela o el acto equivalente, la prescripción se sujetará a las reglas señaladas por este Código para los delitos que se persiguen de oficio.

SECCION III

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

ARTÍCULO 138.- Los términos para la prescripción de la acción penal serán continuos y se contarán desde el día en que se cometió el delito, si fuere consumado; desde que cesó si fuere continuado o permanente, o desde el día en que se hubiere realizado el último acto de ejecución.

ARTÍCULO 139.- La acción penal prescribe en seis meses si el delito sólo mereciere multa.

ARTÍCULO 140.- La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de libertad que corresponda al delito, tomando en cuenta sus modalidades, pero en ningún caso será menor de un año.

ARTÍCULO 141.- Si el delito sólo mereciere destitución, suspensión, privación de derechos o inhabilitación, la prescripción se consumará en el término de un año.

ARTÍCULO 142.- Cuando haya concurso de delitos, las acciones penales que de ellos resulten prescribirán en el término señalado al delito que mereciere pena mayor.

ARTÍCULO 143.- Cuando para deducir una acción penal sea necesario que termine un juicio diverso, civil o penal, no comenzará a correr la prescripción sino hasta que en el juicio previo se haya pronunciado sentencia irrevocable.

ARTÍCULO 144.- La prescripción de las acciones se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen por el Ministerio Público, o por el Juez, en la averiguación del delito y delincuentes, aunque por ignorarse quienes sean éstos no se encaminen las diligencias contra persona determinada.

Si se dejare de actuar, la prescripción comenzará de nuevo desde el día siguiente a la última diligencia.

ARTÍCULO 145.- Lo prevenido en el artículo anterior no comprende el caso que las actuaciones o diligencias comiencen a practicarse, o se reanuden, después de que

hubiere transcurrido ya la tercera parte del término de la prescripción, computado en la forma prevista en el artículo 138; entonces la prescripción continuará corriendo y ya no podrá interrumpirse, sino por la aprehensión del inculpado.

Lo dispuesto en la parte final del artículo anterior, tampoco comprende el caso en que las actuaciones quedaren interrumpidas por un tiempo igual a la tercera parte del término de la prescripción. Entonces ésta no podrá ser interrumpida sino por la aprehensión o reaprehensión del imputado.

ARTÍCULO 146.- Si para deducir una acción penal exigiere la ley previa declaración de alguna autoridad, las gestiones que a ese fin se practiquen antes del término señalado en el artículo precedente interrumpirán la prescripción.

SECCION IV

PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD DE EJECUTAR LAS SANCIONES

ARTÍCULO 147.- Los términos para la prescripción de las sanciones serán continuos y principiarán a correr desde el día siguiente a aquél en que el sentenciado se sustraiga a la acción de la justicia, si fueren privativas de libertad, y si no lo son, desde la fecha en que cause ejecutoria la sentencia.

ARTÍCULO 148.- La sanción privativa de libertad prescribirá por el transcurso de un término igual al que deberá durar, aumentado en una cuarta parte, pero nunca excederá de sesenta años.

ARTÍCULO 149.- Cuando el reo hubiere extinguido ya una parte de su sanción, se necesitará para la prescripción tanto tiempo como el que falte de la condena y una cuarta parte más de ese tiempo.

ARTÍCULO 150.- La prescripción de las sanciones privativas de libertad, sólo se interrumpe con la aprehensión del sentenciado, aunque solo se ejecute por delito diverso.

ARTÍCULO 151.- La sanción consistente en multa y prescribirá en un año.

ARTÍCULO 152.- La prescripción de la sanción consistente en multa, se interrumpirá por cualquier acto tendiente a hacerla efectiva y comenzará a correr nuevamente el día siguiente del último acto realizado.

ARTÍCULO 153.- La sanción consistente en privación de derechos civiles o políticos prescribirá en cinco años, si se ha impuesto como sanción principal, pero la prescripción comenzará a correr al día siguiente de haber prescrito la sanción de prisión, cuando ésta se imponga con la privación de derechos. La inhabilitación temporal y la suspensión de cualquier otro derecho, prescribirá en un término igual al que deberían durar.

ARTÍCULO 154.- Los antecedentes penales prescribirán en un término de cinco años, contando a partir de que se cumpla la sentencia ejecutoriada, siempre y cuando en el transcurso de ese tiempo el sentenciado no cometa nuevo delito en forma dolosa y se resolverá de plano por el Juez de Ejecución; en consecuencia se girarán los oficios respectivos a las autoridades donde registren dichos antecedentes para que se dejen insubsistentes.

La regla anterior no será aplicable cuando el sentenciado cometa otro delito de la misma especie.

CAPÍTULO VIII RESPONSABILIDAD CIVIL

ARTÍCULO 155.- La responsabilidad civil será siempre igual en el delito culposos que en el intencional.

ARTÍCULO 156.- La responsabilidad civil a cargo del delincuente, así como la que deba exigirse a terceros, se tramitará en los términos que fijen el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su caso los Códigos Civiles, o de Procedimientos Civiles.

CAPÍTULO IX EXISTENCIA DE UNA SENTENCIA ANTERIOR DICTADA EN PROCESO SEGUIDO POR LOS MISMOS HECHOS

ARTÍCULO 157.- Nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene.

Lo anterior, siempre que existan en contra de la misma persona y por la misma conducta:

I. Dos procedimientos distintos, se archivará o sobreseerá de oficio el que se haya iniciado en segundo término;

II. Una sentencia y un procedimiento distinto, se archivará o sobreseerá de oficio el procedimiento distinto, o

III. Dos sentencias, dictadas en procesos distintos, se hará la declaratoria de nulidad de la sentencia que corresponda al proceso que se inició en segundo término y se extinguirán sus efectos.

CAPÍTULO X

CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO DE OPORTUNIDAD, ACUERDO REPARATORIO EN JUSTICIA RESTAURATIVA O DE LAS CONDICIONES DECRETADAS EN LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO

ARTÍCULO 158- La potestad para ejercer la acción penal, se extingue en los casos de cumplimiento de criterio de oportunidad, acuerdos reparatorios o de las condiciones decretadas en la suspensión condicional del proceso, en los términos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

LIBRO SEGUNDO

DE LOS DELITOS EN PARTICULAR

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO I

DELITOS CONTRA EL ORDEN CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y SU INTEGRIDAD TERRITORIAL

ARTÍCULO 159.- Se impondrá de dos a nueve años de prisión y multa hasta el equivalente de sesenta días de salario a quien o quienes ejecuten los actos siguientes:

- I. Reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, sin tener facultades legales para ello o abolirla o suspenderla;
- II. Disolver el Congreso del Estado, impedir que se reúnan o celebren sus sesiones, o coartar la libertad de sus deliberaciones;
- III. Impedir a un diputado que se presente al Congreso del Estado a desempeñar su cargo, o perseguirlo o atentar contra su persona o bienes, por las opiniones emitidas en su desempeño;
- IV. Impedir que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, tomen posesión de sus cargos, obligarlos a renunciar o a separarse, intentar por medios violentos que dicten sus fallos en determinado sentido, o impedir que los pronuncien, y
- V.- Impedir que las autoridades municipales tomen posesión de sus cargos u obligarlos a renunciar, o estorbar el ejercicio de sus funciones.

Cuando los hechos delictuosos de que trata este artículo sean cometidos por funcionarios públicos o empleados del Estado, además de las sanciones mencionadas, se impondrá la destitución del cargo o empleo y la inhabilitación para obtener otro hasta por un término de cinco años y la privación de derechos políticos por igual tiempo.

CAPÍTULO II CONSPIRACIÓN

ARTÍCULO 160.- Hay conspiración cuando dos o más personas resuelven de común acuerdo cometer alguno de los delitos de que se ocupan los capítulos III y IV de este Título, acordando los medios de llevar a efecto su determinación. La sanción aplicable será de seis meses a dos años de prisión y multa hasta el equivalente de quince días de salario.

De consumarse los ilícitos pretendidos, únicamente se aplicarán las sanciones que correspondan a los mismos.

CAPÍTULO III

REBELIÓN

ARTÍCULO 161.- Se comete el delito de rebelión, cuando tres o más personas no militares en ejercicio, se alzan en armas contra el Gobierno del Estado con el fin de:

- I. Abolir o reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit o las Instituciones que de ella emanen;
- II. Impedir la elección o integración de alguno de los Supremos Poderes del mismo, o la reunión del Congreso del Estado o del Tribunal Superior de Justicia o coartar sus deliberaciones;
- III. Separar de su cargo al Gobernador o a los demás altos funcionarios de los Poderes del Estado;
- IV. Substraer de la obediencia del Gobierno a algún Municipio o parte integrante de él, o
- V. Despojar de sus atribuciones a alguno de los Poderes del Estado, impedirles el libre ejercicio de ellas o usurpárselas.

ARTÍCULO 162.- Se impondrá prisión de dos a diez años y multa equivalente hasta de sesenta días de salario, por cualquiera de los delitos previstos en el artículo precedente y además en los casos siguientes:

I. Al que residiendo en territorio ocupado por el Gobierno bajo la protección y garantía de éste, proporcione voluntariamente a los rebeldes, hombres para el servicio de las armas, municiones, dinero, víveres, medios de transporte o de radiocomunicación o impida que las tropas del Gobierno reciban estos auxilios.

Si residiera en territorio ocupado por los rebeldes, la prisión será de seis meses a un año, y

II. Al funcionario público que teniendo, por razón de su empleo o cargo, el plano de una fortificación o sabiendo el secreto de una expedición armada, revele éste o entregue aquél a los rebeldes.

ARTÍCULO 163.- Se aplicarán de uno a seis años de prisión:

I. Al que invite formal y directamente para una rebelión;

II. A los que, estando bajo la protección y garantía del Gobierno, oculten o auxilien a los espías o exploradores de los rebeldes, sabiendo que lo son;

III. Al que, rotas las hostilidades y estando en las mismas condiciones, mantenga relaciones con el enemigo, para proporcionarle noticias concernientes a las operaciones u otras que le sean útiles, y

IV. Al que voluntariamente desempeñe un empleo, cargo subalterno o comisión en lugar ocupado por los rebeldes.

ARTÍCULO 164.- A los jefes o agentes del Gobierno y a los rebeldes que después del combate dieran muerte a los prisioneros, se les aplicará prisión de veinte a cincuenta años.

ARTÍCULO 165.- A los extranjeros que cometan el delito de rebelión, se les aplicará de seis a diez años de prisión, sin perjuicio de gestionar su expulsión de la República, después de cumplir la sanción que se les hubiere impuesto.

ARTÍCULO 166.- Se aplicará prisión de tres meses a dos años al que viole la inmunidad de un parlamentario o la que da un salvo conducto.

ARTÍCULO 167.- Los rebeldes no serán responsables de las muertes ni de las lesiones inferidas en el acto de un combate; pero de todo homicidio que se cometa y de toda lesión que se cause fuera de la lucha, serán responsables, tanto el que manda ejecutar el delito, como el que lo permita, y los que inmediatamente lo ejecuten.

ARTÍCULO 168.- No se aplicará sanción a los que depongan las armas antes de ser tomados prisioneros, si no se hubiere cometido alguno de los delitos mencionados en los artículos 164, 167 parte final y 169.

ARTÍCULO 169.- Cuando en las rebeliones se pusiere en ejercicio, para hacerlas triunfar, el homicidio, el robo, el despojo, el incendio, el saqueo, o cualquier otro delito, se aplicarán las sanciones que por éstos delitos y por el de rebelión corresponda, según las reglas del concurso.

CAPÍTULO IV

SEDICIÓN Y OTROS DESORDENES PÚBLICOS

ARTÍCULO 170.- Son responsables de sedición los que reunidos tumultuariamente, pero sin armas, resistan a la autoridad o la ataquen para impedirle el libre ejercicio de sus funciones con alguno de los fines a que se refiere el artículo 161.

ARTÍCULO 171.- La sedición se sancionará de uno a cinco años de prisión y multa equivalente hasta de cincuenta días de salario.

ARTÍCULO 172.- En lo que es aplicable a la sedición se observarán los artículos 164, 165, 167 parte final y 169.

CAPÍTULO V DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD TERRITORIAL DEL ESTADO

ARTÍCULO 173.- Se impondrá de uno a tres años de prisión y multa equivalente hasta quince días de salario, al que destruya o quite las señales que marcan los límites del Estado, o que de cualquier otro modo haga que se confundan, si por ello se origina un conflicto al propio Estado. Faltando esta circunstancia la sanción será de tres meses a un año de prisión y multa equivalente hasta de diez días de salario.

CAPÍTULO VI TERRORISMO

ARTÍCULO 174.- A los que individualmente o en forma colectiva ejecuten actos sucesivos de violencia en las personas o en las cosas, tendientes a producir en la sociedad el terror o con el objeto de alterar el orden público, utilizando artefactos explosivos o medios similares o por incendio o inundación, se les aplicará prisión de tres a doce años y multa equivalente hasta de cien días de salario.

TITULO SEGUNDO DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA CAPÍTULO I

EVASIÓN DE PRESOS

ARTÍCULO 175.- Se aplicará de tres a siete años de prisión y multa equivalente hasta de cien días de salario, al que ponga en libertad o favoreciere la evasión de algún detenido por falta o delito, procesado o condenado. Si el delincuente fuere el encargado de conducir o custodiar al prófugo, será además destituido de su empleo e inhabilitado de uno a diez años para obtener otro similar.

Para la determinación de las sanciones aplicables se tendrán en cuenta, además de las circunstancias que expresan los artículos 91 y 92 de este Código, la calidad del prófugo, la gravedad del delito que se le impute y el monto de la sanción que le hubiere impuesto.

ARTÍCULO 176.- El artículo anterior no comprende a los ascendientes, descendientes, cónyuge, concubina, concubinario o hermano del prófugo, ni a sus parientes por afinidad hasta el segundo grado, ni a los adoptivos, pues están exentos de toda sanción, excepto el caso de que hayan proporcionado la fuga por medio de la violencia en las personas o en las cosas.

ARTÍCULO 177.- Se aplicará prisión de cuatro a doce años al que proporcione al mismo tiempo o en un solo acto la evasión de dos o más personas privadas de libertad por la autoridad competente. Si el responsable prestare sus servicios en el establecimiento en el que se efectuó la fuga, quedará además destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro similar durante un período de ocho a doce años.

ARTÍCULO 178.- Si la reaprehensión del prófugo se lograra por gestiones del responsable de la evasión, sólo se aplicará a éste de tres meses a un año de prisión, según la gravedad del delito o falta imputados al preso o detenido.

ARTÍCULO 179.- No se aplicará sanción al preso que se fugue, sino cuando obre de acuerdo con otro u otros presos y se fugue alguno de ellos o cuando ejerza violencia en las personas, en cuyo caso será de seis meses a tres años de prisión la sanción aplicable.

ARTÍCULO 180.- Si la evasión se efectuare exclusivamente por descuido o negligencia del custodio o conductor, éste será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años. Esta sanción cesará al momento en que se logre la reaprehensión del prófugo, si ésta se consiguiera por las gestiones del custodio o conductor responsable y antes de que pasen cuatro meses contados desde la evasión.

ARTÍCULO 181.- A los servidores públicos o agentes de la fuerza pública, que ilegalmente permitan la salida de detenidos, procesados o condenados, para que por cualquier tiempo permanezcan fuera de las prisiones, se les impondrán de tres meses a seis años de prisión y multa equivalente hasta de diez días de salario.

Para la aplicación de éstas sanciones, se tomará en cuenta la gravedad del delito o falta imputada al detenido.

CAPÍTULO II QUEBRANTAMIENTO DE SANCIÓN

ARTÍCULO 182.- Al reo suspendido en su profesión u oficio o inhabilitado para ejercerlos, o al que lo esté en el manejo de vehículos, motores, o maquinaria que quebrante su condena, se le aplicará de uno a cinco años de prisión.

CAPÍTULO III ARMAS PROHIBIDAS

ARTÍCULO 183.- Son armas prohibidas:

- I. Los puñales, verdugillos, cuchillos y otros similares, excepto cuando se usen como instrumentos de trabajo; y las demás armas ocultas o disimuladas en cualquier objeto;
- II. Las manoplas, macanas, boxes, hondas, correas con balas o con pesos ocultos y los demás similares;
- III. Las bombas, aparatos explosivos o gases y los demás similares;
- IV. Las ganzúas, llaves falsas y demás similares, y
- V. Las que otras leyes o reglamentos señalen como tales.

ARTÍCULO 184.- Los funcionarios y agentes de la autoridad pueden portar armas necesarias para el ejercicio de su cargo.

ARTÍCULO 185.- Se aplicará de uno a tres años de prisión y multa de cinco a veinte días de salario, al que porte alguna de las armas a que se refiere el artículo 183.

ARTÍCULO 186.- Se aplicará la pena señalada en el artículo anterior al que:

I. Introduzca al Estado, fabrique, posea o venda las armas enumeradas en el artículo 183 o las regale o trafique con ellas, y

II. Al que sin un fin lícito o sin permiso haga acopio de armas prohibidas.

En todos los casos incluidos en este capítulo además de las sanciones señaladas se decomisarán las armas.

CAPÍTULO IV ASOCIACIONES DELICTUOSAS

ARTÍCULO 187.- Se impondrá de tres a ocho años de prisión y multa hasta el equivalente de diez días de salario, al miembro de una asociación o banda de tres o más personas, organizada, en la que se reconozca jerarquía entre sus miembros y con el propósito permanente de delinquir, independientemente de la sanción que le corresponda por el delito que cometa.

ARTÍCULO 188.- Se entiende por pandilla la reunión habitual, ocasional o transitoria de tres o más personas que sin estar organizadas cometan en común algún delito.

ARTÍCULO 189.- Cuando se ejecuten uno o más delitos por pandilla, se aplicarán a los que intervengan en su comisión, además de las penas que les correspondan por el o los delitos cometidos, la sanción de seis meses a tres años de prisión.

ARTÍCULO 190.- Comete el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad y se le aplicará sanción de uno a seis años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario, a quien sin causa justificada posea o porte cualquiera de los siguientes objetos:

I. Uno o más equipos de comunicación que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos con respecto a canales de comunicación oficiales, cuando tenga relación con el artículo 216 y siempre que dichos aparatos estén en funcionamiento;

II. Una o más identificaciones oficiales alteradas o falsas, independientemente de la sanción que pudiera corresponderle como autor del delito de falsificación de documentos;

III. Uno o más uniformes, insignias, distintivos, equipos o condecoraciones correspondientes a instituciones policiales o militares de cualquier índole o que simulen la apariencia de los utilizados por éstas, sin estar facultado para ello, y

IV. Uno o más accesorios u objetos que se utilizan en los vehículos oficiales de instituciones policiales, de tránsito, militares de cualquier índole o a quien utilice en aquéllos las particularidades que de cualquier forma iguallen la apariencia de los vehículos oficiales.

Las penas a las que se refiere el presente artículo, se aumentarán hasta en una mitad más de la que corresponda por el delito cometido, cuando para su perpetración se utilicen uno o más menores de edad.

CAPÍTULO V

DELITOS DE TRÁNSITO EJECUTADOS POR CONDUCTORES DE VEHÍCULOS O AUTORIDADES DE TRÁNSITO

ARTÍCULO 191.- Se impondrá prisión de uno a tres años y multa de veinte a cien días de salario y suspensión de la licencia para manejar por igual término, al que conduzca un vehículo de motor en estado de ebriedad plenamente comprobado, o bajo la influencia de narcóticos o sustancias tóxicas.

ARTÍCULO 192.- Al conductor de vehículo que por el hecho de estacionarse en carretera o camino en la noche sin las luces de protección perfectamente visibles, o por estacionarlo sin el abanderamiento adecuado en curva o columpio, cualquiera que sea la hora del día, en tal forma que no pueda verse a distancia suficiente para evitar una colisión, se le impondrá por este solo hecho, sanción de tres meses a dos años de prisión y multa de uno a cinco días de salario y suspensión para manejar vehículos por igual lapso.

La sanción señalada se aplicará independientemente de las que correspondan por otros delitos que resulten.

ARTÍCULO 193.- Incurrir en responsabilidad penal el propietario o conductor de un vehículo automotor que transite con placas sobrepuestas. Al infractor de este tipo penal se le sancionará con prisión de dos a cinco años y multa de cien a quinientas veces el importe del salario mínimo.

Para efectos punibles se entiende por placas sobrepuestas el que vehículos automotores porten láminas de identificación para circular, emitidas por autoridad competente que no les correspondan legalmente o que no sean vigentes tratándose de placas de procedencia extranjera.

ARTÍCULO 194.- Se impondrá de tres meses a dos años de prisión y multa de uno a cinco días de salario mínimo, al servidor público, empleado o perito de tránsito que en el examen para la comprobación de las condiciones requeridas por la Ley o Reglamentos para el otorgamiento de las licencias de conductores de vehículos, produzcan dictámenes o certificaciones sin que concurren en el examinado todos o alguno de los requisitos correspondientes y al que expida la licencia a sabiendas de que falta alguno o algunos de éstos requisitos.

ARTÍCULO 195.- Se sancionarán como encubridores a los inspectores, cobradores y ayudantes en los vehículos de transporte de pasajeros que no tomen las medidas que estén a su alcance para impedir los delitos a que se refieren los artículos 191 y 194.

TÍTULO TERCERO

ATAQUES A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Y VIOLACIÓN O RETENCIÓN DE CORRESPONDENCIA

CAPÍTULO I

ATAQUE A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN

ARTÍCULO 196.- Las disposiciones de este Capítulo sólo tendrán aplicación en los casos de actos u omisiones que no sean de competencia Federal por estar comprendidas en la Ley de Vías Generales de Comunicación. También se aplicarán

cuando se trate de vías de comunicación de propiedad del Estado o de concesión Estatal.

ARTÍCULO 197.- Se llaman caminos públicos las vías de tránsito habitualmente destinadas al uso público, sea quien fuere el propietario y cualquiera que sea el medio de locomoción que se permita en ellas, excluyendo los tramos que se hallen dentro de los límites de las poblaciones.

ARTÍCULO 198.- Se impondrán de cinco días a dos años de prisión y multa hasta el equivalente de cinco días, al que por cualquier medio destruya, deteriore u obstruya las vías de comunicación y medios de transporte de uso público que no sean de jurisdicción federal.

Cuando resultaren además otros delitos, se aplicarán las reglas del concurso.

ARTÍCULO 199.- Se impondrá de diez a veinte años de prisión al que incendiare una embarcación u otro vehículo, si se encontraren ocupados por una o más personas.

ARTÍCULO 200.- Al que para la ejecución de los hechos de que hablan los artículos anteriores, se valga de explosivos, se le aplicará prisión de quince a veinticinco años.

ARTÍCULO 201.- Al que ponga en movimiento un carro, camión o vehículo similar y lo abandone, o de cualquier otro modo haga imposible el control de su velocidad y pueda causar daño, se le impondrá de uno a seis años de prisión, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a los daños que se causen a las personas o a las cosas.

CAPÍTULO II

VIOLACIÓN O RETENCIÓN DE CORRESPONDENCIA

ARTÍCULO 202.- Se aplicarán de tres meses a seis meses de prisión y multa equivalente de tres meses de salario mínimo:

- I. Al que abra indebidamente una comunicación escrita que no esté dirigida a él;
- II. Al que indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él aunque la conserve cerrada y no se imponga de su contenido; y

III. Al empleado de una oficina de comunicaciones, estatal, municipal o particular, que conscientemente dejare de transmitir un mensaje que se le entregue con ese objeto, o de comunicar al destinatario el que recibiere de otra oficina o persona.

ARTÍCULO 203.- No se considerará que obren delictuosamente los padres o tutores que abran o intercepten las comunicaciones escritas dirigidas a quienes estén bajo su patria potestad o bajo su tutela, ni los cónyuges o concubenarios entre sí; tampoco se considerará delictuoso cuando la correspondencia se abra o intercepte por orden de autoridad competente, ni cuando hubiere autorización del interesado a otra persona para hacerlo.

ARTÍCULO 204.- Las disposiciones del artículo 202 no comprenden la correspondencia que circule por la estafeta, los telegramas y radiogramas de servicio federal.

TÍTULO CUARTO
DELITOS CONTRA LA AUTORIDAD
CAPÍTULO I
DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA DE PARTICULARES

ARTÍCULO 205.- Se aplicarán de uno a tres años de prisión y multa de uno a diez días de salario mínimo, al que empleando la fuerza, el amago o la amenaza, se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones, o resista al cumplimiento de un mandato legítimo ejecutado en forma legal.

ARTÍCULO 206.- Se equiparará a la resistencia y se impondrá la misma sanción que a ésta, la coacción hecha a la autoridad pública por medio de la violencia física o moral, para obligarla a que ejecute un acto oficial, sin los requisitos legales u otro que no esté en sus atribuciones.

ARTÍCULO 207.- Al que sin causa legítima rehusare prestar un servicio de interés público a que la Ley lo obligue, o desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad, se le aplicarán de uno a cinco años de prisión y multa de uno a cinco días de salario mínimo.

ARTÍCULO 208.- Al que sin excusa legal se negare a comparecer ante la autoridad a rendir su declaración, cuando legalmente se le exija, no será considerado como responsable del delito previsto en el artículo anterior, sino después de haber sido apremiado por la autoridad judicial o apercibido por la administrativa, en su caso, para que comparezca a declarar o a rendir los informes que se le pidan.

ARTÍCULO 209.- El que debiendo ser examinado en una averiguación, en un proceso penal o como testigo en un juicio civil sin que le aprovechen las excepciones establecidas por las leyes de la materia según el caso, se niegue a otorgar la protesta de ley o a declarar, se le aplicará de inmediato, como medio de apremio y previo apercibimiento, una multa de uno a cinco días de salario, si persistiere en su actitud, se le sancionará con prisión de uno a cinco años de prisión.

ARTÍCULO 210.- Cuando la ley autorice el empleo del apremio para hacer efectiva las determinaciones de la autoridad, sólo se consumará el delito de desobediencia cuando se hubieren agotado los medios de apremio, sin haberse logrado aquél objeto.

CAPÍTULO II

OPOSICIÓN A QUE SE EJECUTE ALGUNA OBRA O TRABAJO PÚBLICO

ARTÍCULO 211.- El que procure con actos materiales impedir la ejecución de una obra o trabajos públicos, mandados hacer con los requisitos legales por la autoridad competente, o con su autorización, será sancionado con prisión de tres meses a un año y multa de uno a cinco días de salario.

ARTÍCULO 212.- Cuando el delito se cometa por dos o más personas, de común acuerdo, la sanción será de tres meses a tres años de prisión y multa de dos a diez días de salario, si sólo se hiciere una simple oposición material, sin violencia a las personas; existiendo violencia, la sanción será de uno a cuatro años de prisión y multa de dos a diez días de salario, sin perjuicio de observar las reglas del concurso.

CAPÍTULO III

VIOLACIÓN DE SELLOS

ARTÍCULO 213.- Al que viole los sellos puestos por orden de la autoridad pública, se aplicará de tres meses a tres años de prisión.

ARTÍCULO 214.- Cuando de común acuerdo violaren las partes interesadas en un negocio civil los sellos puestos por la autoridad pública, se les aplicará la sanción señalada en el artículo anterior.

CAPÍTULO IV DELITOS COMETIDOS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS

ARTÍCULO 215.- Al que cometa un delito en contra de un servidor público en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicará de tres a siete años de prisión, además de las sanciones que le corresponda por el delito o los delitos cometidos.

ARTÍCULO 216.- Se impondrá una pena de dos a diez años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario, a quien aceche, vigile o realice actos tendientes a obtener información sobre la ubicación, actividades, operativos o en general las labores de seguridad pública y de persecución del delito, con la finalidad de proporcionarla a terceras personas para facilitarles la comisión de delitos o posibilitarle la huida a un delincuente o grupo delincuencia.

Además de las sanciones previstas en el párrafo anterior, se impondrá hasta una mitad más de la pena de prisión que le corresponda, al que realice la conducta descrita en este artículo utilizando para ello cualquier vehículo de servicio público de transporte de pasajeros u otro que preste un servicio similar o que por sus características exteriores sea similar a la apariencia de los vehículos destinados al servicio de transporte público de pasajeros.

Sin perjuicio de lo anterior, las penas señaladas en este artículo, se aumentarán hasta en una mitad más de la que corresponda por el delito cometido, cuando para su perpetración se utilicen uno o más menores de edad.

ARTÍCULO 217.- Los ultrajes hechos al Ejecutivo, al Congreso del Estado, al Tribunal Superior de Justicia o a cualquiera otra Institución Pública, se sancionará con prisión de tres meses a un año y multa equivalente hasta de tres meses de salario.

**CAPÍTULO V
ULTRAJES A INSIGNIAS PÚBLICAS**

ARTÍCULO 218.- Al que ultraje las insignias del Estado o de un Municipio o de cualquiera de sus Instituciones, se le aplicarán de tres meses a dos años de prisión.

**TÍTULO QUINTO
DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA
CAPÍTULO ÚNICO**

**DEL DELITO DE CONTAGIO SEXUAL O NUTRICIÓN, DE LA PROPAGACIÓN DE
ENFERMEDADES Y DE LA FALSIFICACIÓN O ADULTERACIÓN DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS O MEDICINALES**

ARTÍCULO 219.- El que sabiendo que está enfermo de un mal venéreo en periodo de infectante o de una enfermedad grave y fácilmente transmisible, tenga relaciones sexuales y así ponga en simple peligro de contagio la salud de otro, será sancionado con prisión de tres meses a dos años y multa de uno a diez días de salario, sin perjuicio de su reclusión en un hospital hasta que cese el periodo infectante.

Las mismas sanciones e igual reclusión se impondrán a la mujer que padeciendo una de las enfermedades citadas en el párrafo anterior, amamante a un hijo extraño, salvo el caso de que el menor amamantado padeciere desde antes la misma enfermedad y a los padres o tutores que a sabiendas que su hijo o pupilo padece alguna de las citadas enfermedades en período infectante, lo entreguen a una nodriza para que los amamante.

La madre que estando enferma de sífilis por contagio posterior al parto, amamante a su propio hijo, si pudiere darle alimentación artificial o de nodriza, se le aplicarán las mismas sanciones de que habla el primer párrafo de este artículo.

ARTÍCULO 220.- A la mujer no sifilítica que sabiendo que un menor se encuentra enfermo de sífilis congénita lo amamante, si además está amamantando a otro u otros menores, se le aplicarán las mismas sanciones que señala el artículo anterior.

ARTÍCULO 221.- Si se efectuare el contagio en cualquiera de los casos de los dos artículos anteriores, se impondrá además, la sanción correspondiente al delito que resulte.

Se presumirá el conocimiento de la enfermedad, cuando el agente o el menor amamantado presenten lesiones o manifestaciones externas de aquélla, fácilmente apreciables.

Cuando se trate de cónyuges o de personas en concubinato, sólo se procederá por querrela del ofendido.

ARTÍCULO 222.- El que a sabiendas de que padece enfermedad venérea incurable, a través de relaciones sexuales o de cualquier otro medio contagie a otro, será sancionado con prisión de diez a veinte años y multa de cien a cuatrocientos días de salario mínimo, sin perjuicio de las medidas de seguridad que se puedan decretar, a efecto de evitar posteriores contagios.

La misma sanción se impondrá a quien sin padecerla, por cualquier medio y de manera dolosa contagie a otro.

ARTÍCULO 223.- Se impondrá de seis meses a cinco años de prisión y multa de diez a cuarenta días de salario:

I. Al que elabore, comercie, falsifique o adultere sustancias, productos químicos, comestibles, bebidas o medicamentos que puedan causar estragos a la salud o disminuyan su poder alimenticio o curativo;

II. A los que al despachar una fórmula médica la alteren o substituyan una medicina por otra que afecte la identidad, grado de pureza o buen estado de las sustancias que se expendan, o varíen la dosis prescrita;

III. Al que oculte, sustraiga, venda o compre alimentos, bebidas o sustancias mandadas destruir como nocivas, por la autoridad competente, y

IV. Al que envenene o infeccione comestibles, bebidas, cosas para venderlas al público o usare sustancias venenosas o nocivas para teñir, colorear, pintar, envolver o envasar los citados artículos, así como al que envenene o infeccione las aguas de un manantial, de un estanque, fuente o cualquier otro depósito de agua, destinada a ingerirla, sean públicos o privados.

ARTÍCULO 224.- Se impondrá prisión de uno a seis años y multa de uno a diez días de salario, al que utilice medios directos y eficaces de propagación de una enfermedad.

Si el infractor fuere médico, biólogo o farmacéutico, o se dedicare a la venta de medicamentos, la sanción será de dos a doce años de prisión y multa de cinco a treinta días de salario, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por la responsabilidad médica o técnica si se realiza el daño.

ARTÍCULO 225.- Los productos falsificados o adulterados con sustancias nocivas y los aparatos y demás objetos que se emplearen en la comisión de los delitos a que se refiere este título, serán decomisados en todo caso y se pondrán a disposición de las autoridades sanitarias del Estado, quienes procederán a su destrucción o aprovechamiento lícito.

ARTÍCULO 226.- Al que con un fin de lucro cause molestias a las personas por la intensidad del volumen de cualquier aparato de sonido, se le impondrá de tres meses a dos años de prisión y multa de uno a cinco días de salario, sin perjuicio del decomiso del aparato de sonido a juicio de la autoridad judicial.

ARTÍCULO 227.- Las sanciones a que se refieren los cuatro artículos anteriores, se aplicarán cuando no se cause algún daño a la salud de las personas. Si se causare, se agregarán las sanciones correspondientes.

Estas disposiciones sólo serán aplicables cuando no contravengan otras de carácter federal.

TÍTULO SEXTO

DELITOS CONTRA LA MORAL PÚBLICA

CAPÍTULO I
ULTRAJES A LA MORAL PÚBLICA O A LAS BUENAS COSTUMBRES E
INCITACIÓN A LA PROSTITUCIÓN

ARTÍCULO 228.- Se aplicará de uno a tres años de prisión y multa de uno a cinco días de salario:

I. Al que fabrique, reproduzca o publique libros, escritos, imágenes u objetos obscenos, y al que los exponga, distribuya o haga circular;

II. Al que públicamente y por cualquier medio ejecute o haga ejecutar por otros, exhibiciones obscenas, y

III. Al que de modo escandaloso invite a otro al comercio carnal.

ARTÍCULO 229.- Si los delitos de que habla el artículo anterior fueren cometidos al amparo de una sociedad o con medios que ésta proporcione para tal fin a los delincuentes, a juicio del Juez se disolverá la empresa o se suspenderán sus actividades hasta por un año.

CAPÍTULO II
CORRUPCIÓN Y PROSTITUCIÓN DE MENORES O INCAPACES

ARTÍCULO 230.- La corrupción de menores de dieciocho años de edad o incapaces consiste en la inducción, incitación o provocación que conduzca a:

I. La práctica de la mendicidad, ebriedad, toxicomanía o prostitución;

II. La realización de actos sexuales perversos o prematuros que alteren su normal desarrollo psicosexual;

III. La celebración de actos de exhibicionismo corporal de carácter sexual, con el fin o no de reproducirlos en fotografía, audio o video, y

IV. La comisión de hechos delictuosos, y de asociación delictuosa.

Al responsable de la corrupción de menores de dieciocho años de edad o Incapaces se le aplicará de cuatro a ocho años de prisión y multa de ochenta a doscientos días de salario mínimo, así como el pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

También incurre en corrupción, y se hará acreedor a las sanciones que establece el párrafo anterior, aquella persona que venda o suministre a menores de dieciocho años de edad o incapaces, material pornográfico o sustancias tóxicas, como solventes, alcoholes, medicamentos y cualquier otra sustancia que produzca efectos similares.

No se entenderá por corrupción, los programas preventivos, educativos o de cualquier índole que diseñen e impartan las instituciones públicas, privadas o sociales que tengan por objeto la educación sexual, educación sobre función reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo de adolescentes, siempre que estén aprobados por la autoridad competentes.

ARTÍCULO 231.- Al que emplee a menores de dieciocho años de edad o incapaces en cantinas, tabernas o centros de vicio, se le sancionará con prisión de cuatro a ocho años, y multa de ochenta a doscientos días de salario y cierre del establecimiento hasta por treinta días.

Asimismo se sancionará con prisión de dos a cinco años, multa de sesenta a ciento veinte días de salario y cierre del establecimiento hasta por treinta días al que permita el acceso a menores de dieciocho años de edad o incapaces a los lugares antes citados.

En ambos supuestos se procederá a la cancelación del permiso en caso de reincidencia.

ARTÍCULO 232.- La punibilidad establecida para los dos artículos anteriores, se duplicará a juicio del juez cuando el que corrompa o emplee al menor de dieciocho años de edad o incapaz, sea ascendiente, padrastro, madrastra, tutor o habite en el mismo domicilio con la víctima aunque no exista parentesco alguno.

ARTÍCULO 233.- Comete el delito de prostitución de menores de 18 años de edad o Incapaces:

I. El que comprometa u ofrezca los servicios de un menor de 18 años de edad o incapaz para realizar actos sexuales a cambio de retribución económica, en especie o de cualquier otra índole, y

II. El que a cambio de retribución económica, en especie o de cualquier índole, tenga relaciones sexuales con persona menor de dieciocho años de edad o incapaz.

Al que cometa este delito, se le impondrá de siete a doce años de prisión y multa de mil a dos mil días de salario.

CAPÍTULO III LENOCINIO

ARTÍCULO 234.- Comete el delito de Lenocinio:

I. Toda persona, que sin autorización legal, habitual u ocasionalmente explote el cuerpo de una persona por medio del comercio carnal, se mantenga de este comercio u obtenga de él un lucro cualquiera;

II. El que induzca o solicite a una persona para que con otra comercie sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios para que se entregue a la prostitución, y

III. El que encubra, concierte o permita el comercio carnal de un menor de edad.

ARTÍCULO 235.- El lenocinio se sancionará en el caso de la fracción I del artículo anterior, con prisión de uno a cinco años; en el caso de la fracción II, de uno a seis años y multa de uno a diez días de salario, y en el caso de la fracción III, con prisión de dos a siete años y multa de tres a quince días de salario.

ARTÍCULO 236.- Al que dé en arrendamiento una finca, teniendo conocimiento de que será destinada al lenocinio, se le aplicará prisión de seis meses a tres años y multa de diez a treinta días de salario.

ARTÍCULO 237.- Si el delincuente fuere ascendiente, tutor o curador, o tuviere cualquiera otra autoridad sobre la persona explotada, se le impondrá prisión de uno a ocho años y multa de quince a cuarenta y cinco días de salario y será privado de todo derecho sobre los bienes de aquélla.

CAPÍTULO IV PROVOCACIÓN DE UN DELITO Y APOLOGÍA DE ESTE O DE ALGÚN VICIO

ARTÍCULO 238.- Al que provoque públicamente a cometer algún delito o haga la apología de éste o de algún vicio, se le aplicará prisión de uno a cinco años y multa de diez a cincuenta días de salario. Si el delito no se ejecutare en caso contrario, se aplicará al provocador la sanción anterior, sin perjuicio de la que corresponda por su participación en el delito cometido.

TÍTULO SÉPTIMO
CAPÍTULO ÚNICO
REVELACIÓN DE SECRETOS

ARTÍCULO 239.- Se aplicará prisión de tres meses a un año y multa de uno a cinco días de salario, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o de la confianza en él depositada o por alguna otra causa.

ARTÍCULO 240.- La sanción será de uno a cinco años de prisión y multa de uno a diez días de salario y suspensión de profesión, cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial.

TÍTULO OCTAVO
DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS
CAPÍTULO I
SERVIDORES PÚBLICOS

ARTÍCULO 241.- Para los efectos de este título y el subsecuente, es servidor público, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública, estatal o municipal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a esta, fideicomisos públicos, en el Congreso Local o en el Poder Judicial.

CAPÍTULO II
EJERCICIO INDEBIDO DE FUNCIONES

ARTÍCULO 242.- Comete el delito de ejercicio indebido o abandono de funciones, el Servidor Público que:

I. Ejerza las funciones de su empleo, cargo o comisión sin haber tomado posesión legítima o sin satisfacer todos los requisitos legales;

II. Continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión después de saber que se ha revocado su nombramiento o que se le ha suspendido o destituido legalmente;

III. Nombrado por tiempo limitado continúe ejerciendo sus funciones, después de cumplido el término por el cual se le nombró.

Lo previsto en las fracciones II y III, no comprende el caso en que el servidor público que debe cesar en sus funciones se le ordene que continúe en ellas entre tanto se presenta la persona que haya de sustituirlo, cuando la Ley no lo prohíba;

IV. Se auto atribuya alguna otra comisión, empleo o cargo del que realmente tuviere;

V. Sin habersele admitido la renuncia de una comisión, empleo o cargo, o antes de que se presente la persona que haya de reemplazarlo, lo abandone sin causa justificada;

VI. Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública centralizada, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, del Congreso del Estado o del Poder Judicial Estatal, por cualquier acto u omisión no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades;

VII. Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo custodia, o a la que tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión;

VIII. El que sin estar facultado para ello o estándolo, indebidamente otorgue:

a). Concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado y municipios;

b). Permisos, Licencias o autorizaciones de contenido económico sin tener facultades para ello;

c). Franquicias, exenciones, deducciones, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales y sobre precios y

tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados en la administración pública estatal y municipal;

d). Realice o contrate obra pública, deudas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos, y

IX. Teniendo en su cargo fondos públicos, les dé a sabiendas sin la autorización correspondiente de quien tenga facultades para ello, una aplicación pública distinta de aquélla a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal.

Al que infrinja lo establecido en las fracciones I a la IV se le impondrá de tres meses a tres años de prisión y multa de treinta a ciento cincuenta días de salario mínimo, sin perjuicio de aplicarse otras sanciones derivadas del ejercicio indebido a su cargo.

Al que infrinja lo establecido en las fracciones V a la IX se le impondrá de tres meses a tres años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo, si el monto de las operaciones no excede el equivalente de setecientas veces el salario mínimo; y se impondrá de dos a doce años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo, cuando el monto de las operaciones exceda al equivalente de setecientas veces el salario mínimo.

Las penalidades anteriores podrán ser reducidas hasta la mitad si el servidor público resarce a quien causó el daño, el importe total de las operaciones realizadas en un término no mayor de treinta días.

Las sanciones señaladas con antelación, serán aplicadas sin perjuicio de imponer las que se señalan en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit.

CAPÍTULO III

ABUSO DE AUTORIDAD, INTIMIDACIÓN Y TORTURA

ARTÍCULO 243.- Comete el delito de abuso de autoridad, todo servidor público sea cual fuere su categoría:

- I. Cuando para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida auxilio a la fuerza pública o la emplee con ese objeto;
- II. Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o la insultare;
- III. Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud;
- IV. Cuando estando encargado de administrar justicia, bajo cualquier pretexto, aunque sea el de obscuridad o silencio de la ley, se niegue injustificadamente a despachar un negocio pendiente ante él, dentro de los términos establecidos por la ley;
- V. Cuando el encargado de una fuerza pública, requerida legalmente por una autoridad competente para que le preste auxilio se niegue indebidamente a dárselo;
- VI. Cuando estando encargado de cualquier establecimiento destinado a la ejecución de las sanciones privativas de libertad de instituciones de readaptación social o de custodia y rehabilitación de menores y de reclusorios preventivos o administrativos que sin los requisitos legales, reciba como presa, detenida, arrestada o interna a una persona o la mantenga privada de su libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad correspondiente niegue que está detenida, si lo estuviese; o no cumpla la orden de libertad girada por la autoridad competente;
- VII. Cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad no la denunciase inmediatamente a la autoridad competente o no la haga cesar, también inmediatamente, si esto estuviere en sus atribuciones;
- VIII. Cuando haga que se le entreguen fondos, valores u otras cosas que no se le hayan confiado a él y se los apropie o disponga de ellos indebidamente;
- IX. Cuando con cualquier pretexto, obtenga de un subalterno parte de los sueldos de éste, dádivas u otro servicio;
- X. Cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue empleo, cargo o comisión pública, o contratos de prestación de servicios profesionales o mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sea remunerados, a sabiendas de que no se les prestará el servicio para el que se les nombró, o no se cumplirá el contrato otorgado, y
- XI. Cuando autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de autoridad competente para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, siempre que lo haga con conocimiento de tal situación.

Al que cometa el delito de abuso de autoridad se le impondrá prisión de seis meses a seis años y multa de treinta a doscientos días de salario mínimo y destitución e inhabilitación por el mismo lapso para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública.

ARTÍCULO 244.- Comete el delito de intimidación:

I. El Servidor Público que por sí o por interpósita persona utilizando la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querrela o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la legislación penal o por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, y

II. El Servidor Público que con motivo de la querrela, denuncia o la información a que hace referencia la fracción anterior, realice una conducta ilícita u omita una lícita debida que lesione los intereses de las personas que la presenten o aporten, o de algún tercero con quien dichas personas guarden algún vínculo familiar, de negocios o afectivo.

Al que comete el delito de intimidación se le impondrá de uno a nueve años de prisión, multa por un monto de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo cargo o comisión pública.

Las sanciones señaladas con antelación serán aplicadas sin perjuicio de las que se establezcan en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit.

ARTÍCULO 245.- Comete el delito de tortura cualquier servidor público de los gobiernos estatal y municipal, que por sí o valiéndose de terceros subordinados y siempre en el ejercicio de sus funciones, cause intencionalmente a una persona dolor o sufrimiento. Asimismo, cuando la coaccione física o moralmente para obtener de ella o de un tercero, información o confesión alguna, o para inducirla a asumir un comportamiento determinado o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que se ha cometido.

No se comete el delito de tortura cuando, como consecuencia de la ejecución de la aprehensión o aseguramiento de la persona o cosas, se causen dolor o sufrimiento circunstanciales.

Tampoco lo serán las penalidades que sean consecuencias únicamente de sanciones legítimas o inherentes o incidentales a éstas.

Son reglas aplicables al delito de tortura, las siguientes:

- I. Al que cometa el delito de tortura se le sancionará con pena privativa de libertad de dos a diez años, y de doscientos a quinientos días de salario mínimo diario vigente en el momento de aplicar la multa, privación de su cargo e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión;
- II. Si además de tortura resulta delito diverso, se estará a las reglas de concurso de delito;
- III. No justificará la tortura que se invoque o existan circunstancias excepcionales, como inestabilidad política externa, urgencia en las investigaciones o cualquier otra emergencia pública;
- IV. En el momento en que lo solicite cualquier detenido o reo, o que lo pida su defensor, deberá ser reconocido por perito médico legista o por un médico de su elección. El que haga el reconocimiento queda obligado a expedir de inmediato el certificado correspondiente, y
- V. Cualquier autoridad que conozca un hecho de tortura, está obligado a denunciarla de inmediato.

CAPÍTULO IV

COALICION DE SERVIDORES PUBLICOS

ARTÍCULO 246.- Comete el delito de coalición de Servidores Públicos, los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas. No cometen este delito los trabajadores que se coaliguen en ejercicio de sus derechos constitucionales o que hagan uso del derecho de huelga.

A los que cometan el delito de coalición, se les impondrá prisión de tres meses a dos años y multa de diez a sesenta días de salario.

CAPÍTULO V COHECHO

ARTÍCULO 247.- Comete el delito de cohecho:

I. El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente dinero o cualquier otra dádiva o acepte una promesa de hacer algo ilícito o dejar de hacer algo lícito relacionado con sus funciones; y

II. El que dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a la persona encargada de un servicio público del estado, municipal o descentralizado o de participación estatal, o algún servidor público que preste sus servicios en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que haga un acto ilícito u omita uno lícito relacionado con sus funciones.

Al que cometa el delito de cohecho se le sancionará con tres meses a cinco años de prisión y multa de quince a sesenta días de salario; al cohechado se le impondrá además la destitución de su empleo, cargo o comisión, pero el cohechador quedará libre de toda responsabilidad penal siempre que haya obrado por coacción moral y que dentro de los cinco días siguientes a la comisión del delito ponga los hechos en conocimiento del Ministerio Público y pruebe aquella circunstancia.

CAPÍTULO VI PECULADO

ARTÍCULO 248.- Comete el delito de peculado toda persona encargada de un servicio público del estado, municipal o descentralizado, aun cuando sea en comisión por tiempo limitado y no tenga el carácter de funcionario, quien, para usos propios o ajenos, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o al Municipio, al organismo descentralizado a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa.

ARTÍCULO 249.- Al que cometa el delito de peculado se le aplicarán de uno a nueve años de prisión y multa de treinta a cincuenta días de salario y destitución de empleo o cargo e inhabilitación para desempeñar otros similares.

ARTÍCULO 250.- La sanción será de uno a seis meses de prisión y multa de cinco a quince días de salario, si dentro de los treinta días siguientes a aquél en que se descubrió el delito devolviera el responsable lo sustraído.

Esta disposición se entiende sin perjuicio de la destitución, de la inhabilitación y de la multa correspondiente.

CAPÍTULO VII CONCUSIÓN

ARTÍCULO 251.- Comete el delito de concusión, el encargado de un servicio público que con tal carácter y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios, o cualquiera otra cosa indebida o en mayor cantidad que la señalada por la ley.

ARTÍCULO 252.- A los servidores públicos que cometan el delito de concusión, se les aplicará destitución de empleo o inhabilitación para obtener otro por un término de dos a seis años, y pagarán una multa igual al duplo de la cantidad que hubieren exigido indebidamente. Si esta pasare del importe de diez días de salario, se les impondrá además de tres meses a dos años de prisión.

ARTÍCULO 253.- Las sanciones del artículo anterior, se aplicarán también a los encargados o comisionados por un funcionario público, que con aquella investidura cometan el delito de concusión.

CAPÍTULO VIII DELITOS COMETIDOS EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS

ARTÍCULO 254.- Comete el delito de custodia de documentos, el servidor público que:

- I. Sustraiga, destruya u oculte documentos o papeles que le estuvieren confiados por razón de su cargo;
- II. Teniendo a su cargo la custodia de documentos o efectos sellados por la autoridad, quebrante los sellos o consienta su quebrantamiento, y
- III. Abra o consienta abrir sin la autorización correspondiente, papeles o documentos cerrados cuya custodia le estuviere confiada.

Al responsable de este delito se le impondrá prisión de tres meses a cinco años y multa de diez a treinta días de salario mínimo.

CAPÍTULO IX ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

ARTÍCULO 255.- Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit.

Asimismo, incurre en responsabilidad penal, quien haga figurar como suyos bienes que el Servidor Público adquiriera o haya adquirido en contravención a lo dispuesto en la misma Ley, a sabiendas de esta circunstancia.

Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las siguientes sanciones:

- I. Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit;
- II. Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente de cinco mil veces el salario, se impondrá de tres meses a seis años

de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario al momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública, y

- III. Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de cinco mil veces el salario, se impondrá de dos a catorce años de prisión, multa de trescientos a quinientas veces el salario y destitución e inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública.

CAPÍTULO X TRÁFICO DE INFLUENCIAS

ARTÍCULO 256.- Al servidor público que por sí o por interpósita persona, influyere en otro servidor público o servidores públicos, valiéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal, jerárquica o de cualquier otra índole con éste, o con otros u otros servidor público, para tramitar un negocio o conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, o bien para afectar los servicios o funcionalidad del Estado, se le impondrá pena de prisión de tres a siete años y multa de ciento cincuenta a setecientos días de salario mínimo. Si la conducta anterior produce un beneficio económico, la sanción se aumentará en una mitad más.

ARTÍCULO 257.- El particular que influyere en un servidor público o en un grupo de servidores públicos valiéndose de cualquier situación derivada de su relación personal o de cualquier otra índole con éste, estos o con otro u otros servidores públicos, para tramitar un negocio o conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente, un beneficio económico para sí o para un tercero, o bien para afectar los servicios o funcionalidad del Estado, será sancionado con pena de prisión de un mes a seis años y multa de cien a quinientos días de salario mínimo. Si la conducta anterior produce un beneficio económico, la sanción se aumentará en una mitad más.

ARTÍCULO 258. El servidor público que, a cambio de dádivas, presentes o cualquier beneficio económico, ofrezca a un particular influir sobre otro servidor público, para que este último realice las conductas descritas en los artículos anteriores, será sancionado con pena de prisión de seis meses a un año.

ARTÍCULO 259. En todos los casos previstos en este Capítulo, las dádivas, presentes o regalos serán materia de decomiso.

TÍTULO NOVENO
DELITOS COMETIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EN OTROS
RAMOS DEL PODER PÚBLICO

CAPÍTULO I
DELITOS COMETIDOS POR LOS SERVIDORES PUBLICOS

ARTÍCULO 260.- Se impondrá suspensión de tres meses a tres años o destitución del cargo y en ambos casos multa de diez a treinta días de salario a los funcionarios, empleados o auxiliares de la administración de justicia que cometan algunos de los delitos siguientes:

- I. Conocer de negocios contra los cuales tengan impedimento legal o abstenerse de conocer de los que les correspondan sin tener impedimento para ello;
- II. Desempeñar algún otro empleo oficial o un puesto o cargo particular que la Ley les prohíba;
- III. Litigar por sí o por interpósita persona cuando la Ley les prohíba el ejercicio de su profesión;
- IV. Dirigir o aconsejar a las personas que ante ellos litiguen;
- V. No cumplir, sin causa fundada para ello, una disposición que legalmente se les comunique por su superior competente;
- VI. Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan una ventaja indebida a los interesados en un negocio, o a cualquiera otra persona;
- VII. Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia, y
- VIII. Alterar, destruir, perder o perturbar ilícitamente el lugar de los hechos, los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso o los instrumentos, objetos o productos del delito.

ARTÍCULO 261.- Se impondrá suspensión de tres meses a tres años y multa de diez a treinta días de salario, al defensor de oficio de un inculpado, que sólo se concrete a

aceptar el cargo o a solicitar la libertad caucional, sin promover injustificadamente las pruebas conducentes o que no interponga los recursos procedentes contra las resoluciones en que se adviertan violaciones notorias a la Ley.

ARTÍCULO 262.- Las disposiciones de los artículos anteriores se aplicarán, en lo conducente, a todos los funcionarios o empleados de la administración pública cuando, en el ejercicio de su cargo o comisión, ejecuten los hechos o incurran en las omisiones que expresan los propios artículos.

CAPÍTULO II

DELITOS DE ABOGADOS, PATRONOS Y LITIGANTES

ARTÍCULO 263.- Se impondrá prisión de uno a cinco años, multa de diez a treinta días de salario y suspensión en el ejercicio profesional de tres meses a dos años, a los abogados, patronos o litigantes, cuando éstos últimos no sean ostensiblemente patrocinados por abogados, si cometen algunos de los delitos siguientes:

- I. Alegar, a sabiendas, hechos falsos o leyes inexistentes o derogadas;
- II. Pedir términos para probar lo que notoriamente no puede probarse o no ha de aprovechar a su parte; o promover artículos o incidentes con el fin de crear dilaciones o trámites innecesarios para el normal desarrollo del juicio, o recursos claramente improcedentes, o de cualquier otra manera, procurar dilaciones notoriamente indebidas.

Para proceder a la iniciación de la averiguación penal será necesaria la previa calificación de los hechos a que se refiere esta fracción, realizada por el Juez o Tribunal que conozca del negocio, y

- III. Presentar por sí mismo o aconsejar a su patrocinado, a que presente testigos o documentos falsos.

En el caso de esta fracción, las sanciones expresadas se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por la participación del infractor en la comisión del delito de falsedad en declaraciones ante la Autoridad, falsificación de documentos o uso de los mismos.

ARTÍCULO 264.- Además de las sanciones mencionadas en el artículo anterior, se impondrá prisión de uno a cinco años:

- I. Por patrocinar o ayudar a diversos contendientes o partes con intereses opuestos en un mismo negocio o en negocios conexos, o cuando se acepte el patrocinio de alguno y se admita después el de la parte contraria;
- II. Por abandonar la defensa de un cliente o negocio sin motivo justificado y causando daño;
- III. Por aceptar defender a un procesado sin tener los conocimientos técnicos para ello, y
- IV. Al defensor particular en los casos del artículo 261 de éste Código.

TÍTULO DÉCIMO
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
CAPÍTULO ÚNICO
RESPONSABILIDAD MÉDICA Y TÉCNICA

ARTÍCULO 265.- Los médicos, cirujanos, parteros, dentistas, veterinarios, practicantes o pasantes de medicina y demás profesionales similares y auxiliares, serán responsables por los daños que causen en la práctica de su profesión, en los términos siguientes:

- I. Además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados, según sean intencionales o culposos, se les aplicará de dos a seis años de prisión y multa de doscientos a mil días de salario mínimos, así como suspensión de uno a cinco años en el ejercicio de la profesión o inhabilitación definitiva en caso de reincidencia, y
- II. Estarán obligados a la responsabilidad civil, no solamente por sus actos propios, sino también solidariamente por los de sus ayudantes, enfermeros o practicantes, cuando éstos obren de acuerdo con las instrucciones de aquéllos.

ARTÍCULO 266.- El artículo anterior, se aplicará a los médicos que habiendo otorgado responsiva para hacerse cargo de la atención de un lesionado o enfermo, lo abandonen en su tratamiento sin causa justificada, y no den aviso inmediato a la autoridad competente.

ARTÍCULO 267.- A quienes ejerzan la medicina y sin causa justificada, se nieguen a prestar sus servicios a un enfermo que lo solicite por notoria urgencia, poniendo en

peligro la vida de dicho enfermo, serán sancionados con multa hasta de quinientos días de salario.

Si se produce daño por la falta de intervención se les impondrán, además, prisión de uno a ocho años e inhabilitación para el ejercicio profesional por el término de tres meses a dos años.

ARTÍCULO 268.- Las mismas sanciones señaladas en el artículo anterior, se impondrán a los Directores, Encargados o Administradores de cualquier Centro de Salud, cuando incurran en alguno de los casos siguientes:

- I. Impedir la salida de un paciente, cuando éste o sus familiares lo soliciten, aduciendo adeudos de cualquier índole;
- II. Retener a un recién nacido, por los motivos a que se refiere la parte final de la fracción anterior, y
- III. Retardar o negar por cualquier motivo la entrega de un cadáver, excepto cuando se requiera orden de autoridad competente.

La misma sanción se impondrá a los encargados o administradores de agencias funerarias que retarden o nieguen indebidamente la entrega de un cadáver, e igualmente a los encargados, empleados o dependientes de una farmacia, que al surtir una receta sustituya la medicina, específicamente recetada por otra que cause daño o sea evidentemente inapropiada al padecimiento para el cual se prescribió.

ARTÍCULO 269.- Cuando una persona efectúe una exploración ginecológica por motivos deshonestos, se le sancionará con prisión de uno a cinco años y multa de diez a cuarenta días de un salario. Si con la exploración se causa el desfloramiento de la mujer, las sanciones serán de dos a nueve años de prisión y multa de veinte a cien días de salario.

ARTÍCULO 270.- Los ingenieros, arquitectos, agrónomos y en general, todos los que se dediquen al ejercicio de una profesión, arte, oficio o actividad técnica, serán igualmente responsables y sancionados en la forma y términos que previene la fracción primera del artículo 265 de este Código, cuando causen daños indebidos en el ejercicio de su profesión, arte, oficio o actividad técnica.

Estarán asimismo obligados a la responsabilidad civil en los términos de la fracción II de este artículo.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
FALSEDAD
CAPÍTULO I
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE CRÉDITO

ARTÍCULO 271.- Al que cometa el delito de falsificación de un documento de crédito, se le impondrá de uno a diez años de prisión y multa de cinco a treinta días de salario.

ARTÍCULO 272.- Comete el delito de que habla el artículo anterior, el que falsificare obligaciones u otros documentos de crédito, cupones de interés o de dividendos de los mismos, legalmente emitidos por particulares, por sociedades o empresas, o por las administraciones públicas del Estado o de cualquiera de los municipios.

ARTÍCULO 273.- Al que introduzca al Estado o ponga en circulación los documentos falsos de que habla el artículo anterior, se sancionará con prisión de dos a diez años y multa de veinte a cien días de salario mínimo.

CAPÍTULO II
FALSIFICACIÓN DE SELLOS, MARCAS, LLAVES Y TROQUELES

ARTÍCULO 274.- Se impondrá prisión de dos a diez años y multa de diez a cincuenta días de salario:

I. Al que falsifique los sellos de los Poderes del Estado, de sus dependencias, oficinas o Instituciones Públicas del Estado o de Notarios Públicos;

II. Al que falsifique el sello, marca o contraseña que alguna autoridad use para identificar cualquier objeto o para asegurar el pago de algún impuesto;

III. Al que falsifique los punzones, matrices, planchas o cualquier otro objeto que sirva para la fabricación de acciones, obligaciones y demás títulos o documentos a que se refiere el capítulo anterior;

IV. Al que, a sabiendas de su falsedad hiciera uso indebido de los sellos, marcas, punzones y demás matrices, planchas o cualquier otro objeto que sirva para la fabricación de acciones, obligaciones y demás títulos o documentos a que se refiere el capítulo anterior, y

V. Al que, a sabiendas de su falsedad hiciera uso indebido de los sellos, marcas, punzones y demás objetos de que se habla en las fracciones anteriores.

ARTÍCULO 275.- Se impondrá prisión de uno a cinco años y multa de diez a cincuenta días de salario:

I. Al que falsifique sellos, marcas, contraseñas o estampillas de un particular, de una casa comercial, de un banco, de un establecimiento industrial, o un boleto o ficha de un espectáculo público;

II. Al que falsifique llaves para adaptarlas a cualquier cerradura sin el consentimiento del dueño o poseedor de ésta;

III. Al que altere, borre o haga desaparecer alguno de los sellos o marcas que se mencionen en este artículo y en el anterior;

IV. Al que, a sabiendas, hiciera uso indebido de las llaves, sellos, marcas y demás objetos expresados en las fracciones I y II de este artículo, y

V. Al que falsifique, altere, modifique o desprenda parcial o totalmente por cualquier medio el número de identificación vehicular que imprime el fabricante en la estructura de los vehículos automotores.

CAPÍTULO III

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL

ARTÍCULO 276.- El delito de falsificación de documentos públicos o privados se comete por alguno de los medios siguientes:

I. Poniendo una firma o rúbrica falsas, aunque sean imaginarias o alterando la verdadera;

II. Aprovechando indebidamente una firma o rúbrica ajena en blanco, extendiendo una obligación, liberación o cualquier otro documento que pueda comprometer los bienes, la honra, la persona o la reputación de otro, o causar un perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero;

- III. Alterando el contexto de un documento verdadero después de concluido y firmado, si esto cambiare su sentido sobre alguna circunstancia o punto sustancial, ya se haga añadiendo, enmendando o borrando, en todo o en parte, una o más palabras o cláusulas o variando la puntuación;
- IV. Modificando la fecha o cualquiera otra circunstancia relativa al tiempo de ejecución del acto que se exprese en el documento;
- V. Atribuyéndose el que extiende el documento, o atribuyendo a la persona en cuyo nombre lo hace, un nombre o una investidura, calidad o circunstancia que no tenga y sea necesaria para la validez del acto;
- VI. Redactando un documento en términos que cambien la convención celebrada, en otra diversa en que varíen la declaración o disposición del otorgante, las obligaciones que se propuso contraer o los derechos que debió adquirir;
- VII. Añadiendo o alterando cláusulas o declaraciones, o asentando como ciertos hechos falsos, o como confesados los que no lo están, si el documento en que se asientan se extendiere para hacerlo constar como prueba de ellos;
- VIII. Expidiendo un testimonio supuesto de documentos que no existen; dándolo de otro existente que carece de los requisitos legales, suponiendo falsamente que los tiene; o de otro que no carece de ellos, pero agregando o suprimiendo en la copia algo que importe una variación sustancial;
- IX. Alterando un perito traductor o paleógrafo el contenido de un documento, al traducirlo o descifrarlo;
- X. Falsificando, alterando, tramitando u obteniendo de cualquier forma la documentación con la que se pretenda acreditar la propiedad de uno o más vehículos robados, y
- XI. Elaborando sin permiso de la autoridad competente, una placa o placas, el engomado, la tarjeta de circulación o cualquier documento oficial que se expide para identificar vehículos automotores o remolques.

ARTÍCULO 277.- Para que el delito de falsificación de documentos sea sancionable como tal, se necesita que concurren los requisitos siguientes:

- I. Que el falsario saque o se proponga sacar algún provecho para sí o para otro, o causar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero;
- II. Que resulte o pueda resultar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un particular, ya sea en sus bienes, en su persona, en su honra o en su reputación, y

III. Que el falsario haga la falsificación sin consentimiento de la persona a quien resulte o pueda resultar perjuicio o sin el de aquélla en cuyo nombre hizo el documento.

ARTÍCULO 278.- La falsificación de documentos públicos o privados de que habla el artículo 276, se sancionará con prisión de dos a diez años y multa de veinte a cien días de salario.

Iguales sanciones se impondrán al que a sabiendas hiciere uso indebido de un documento falso, sea público o privado.

Se impondrán de cuatro a diez años de prisión y multa de trescientos a mil días de salario al responsable de la falsificación de documentos prevista en las fracciones X y XI del artículo 276.

CAPÍTULO IV FALSIFICACIÓN DE CERTIFICACIONES

ARTÍCULO 279.- Se sancionará con uno a cinco años de prisión y multa de veinte a cien días de salario:

I. Al Servidor Público que, por engaño o sorpresa, hiciere que alguien firme un documento público, que no habría firmado sabiendo su contenido;

II. Al Notario y a cualquier otro servidor público que en el ejercicio de sus funciones, expida una certificación de hechos que no sean ciertos o de fe de lo que no conste en autos, registros, protocolos o documentos;

III. El que, para eximirse de una obligación o de un servicio impuesto por la Ley, suponga una certificación de impedimento que no tenga, sea que la haga aparecer como expedida por un médico o un cirujano real o supuesto, sea que se tome el nombre de una persona real atribuyéndole falsamente la calidad legal para expedir la certificación;

IV. Al médico o cirujano que certifique falsamente que una persona tiene una enfermedad u otro impedimento para dispensarla de prestar un servicio que exige la Ley o cumplir una obligación que ésta impone, o para adquirir algún derecho;

V. Al que haga uso de una certificación verdadera expedida para otro como si hubiere sido en su favor, o alterare la que a él se expidió, y

VI. A los encargados de un servicio de comunicaciones que supongan o falsifiquen un despacho.

CAPÍTULO V DE LA CERTIFICACIÓN, FORMALIZACIÓN, REGISTRO E INSCRIPCIÓN DE INMUEBLES

ARTÍCULO 280.- A quien certifique o participe dando forma a actos, convenios, o contratos con el propósito de transmitir la propiedad o posesión de inmuebles en contravención a lo dispuesto en las normas, planes o programas de desarrollo urbano, o sin comprobar la existencia de las autorizaciones, permisos o licencias de las autoridades competentes, se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión y multa de trescientos a quinientos días de salario mínimo general vigente en la entidad.

Cuando la certificación y formalización de actos, convenios o contratos a que se refiere el párrafo anterior, se inscriban o registren por parte de los servidores públicos de Catastro y del Registro Público de la Propiedad y del Comercio sin ajustarse a las disposiciones legales y administrativas aplicables, se impondrá a los responsables una pena de uno a cinco años de prisión y multa de cien a trescientos días de salario mínimo general vigente. Se le impondrá además de dichas sanciones, la destitución e inhabilitación de uno a cinco años, para desempeñar otro empleo, cargo, o comisión públicos.

Serán nulos de pleno derecho las certificaciones, formalizaciones, registro e inscripciones que se otorguen en contravención a lo dispuesto en este artículo.

CAPÍTULO VI FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES Y EN INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD

ARTÍCULO 281.- Se impondrá de tres a siete años de prisión y multa de cincuenta a doscientos días de salario al que:

I. En entrevista, interrogatorio, declaración o cualquier manifestación ante alguna autoridad pública distinta de la judicial, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad;

II. Interrogado ante la autoridad judicial como testigo, faltare a la verdad sobre el hecho que se trata de averiguar, ya sea afirmando, negando u ocultando maliciosamente su existencia o la de alguna circunstancia que pueda servir de prueba de la verdad o falsedad del hecho principal, o que aumente o disminuya su gravedad.

El máximo de la sanción que señala éste artículo podrá aumentarse hasta diez años de prisión para el testigo falso que fuere examinado en un juicio criminal, cuando al reo se le imponga una sanción privativa de libertad y el testimonio falso haya tenido fuerza probatoria;

III. Soborne a un testigo, a un perito o a un intérprete para que se produzca con falsedad en un juicio, o los obligue o comprometa de otro modo a ello;

IV. Siendo intérprete, traduzca falsamente lo dicho por un inculpado, testigo, perito o cualquiera otro que declare ante la autoridad judicial;

V. Con arreglo a derecho, con cualquier carácter, excepto el de testigo, sea examinado por la autoridad y faltare a la verdad en perjuicio de otro, negando ser suya la firma con que hubiere suscrito determinado documento, afirmando un hecho falso, o negando o alterando uno verdadero o sus circunstancias sustanciales, ya sea que lo haga en nombre propio o en nombre de otro. Lo previsto en esta fracción no comprende los casos en que la parte sea examinada sobre la cantidad en que estime una cosa, o cuando tenga el carácter de indiciado en una averiguación o proceso penal;

VI. Siendo autoridad, rinda a otra informes en los que afirme una falsedad o niegue u oculte la verdad, en todo o en parte, y

VII. Se conduzca con falsedad ante fedatario público.

ARTÍCULO 282.- El testigo, el perito, el intérprete o el declarante a que se refieren las fracciones II, IV y V del artículo anterior, que retracte espontáneamente sus falsas declaraciones u opiniones rendidas en juicio antes de que pronuncien sentencia, solo pagará una multa de uno a cinco días de salario.

Pero si faltaren también a la verdad al retractar sus declaraciones, se les aplicará la sanción que corresponda con arreglo a lo previsto por éste capítulo, considerándolo como reincidentes.

II. Al que, para eludir la práctica de una diligencia decretada por autoridad judicial o por los tribunales de trabajo; o una notificación de cualquier clase o citación de una autoridad, oculte su domicilio o designe otro que no sea el suyo, o niegue de cualquier modo el verdadero, y

III. Al servidor público que en los actos propios de su cargo, atribuya a una persona título o nombre, a sabiendas de que no le pertenece y con perjuicio de alguien.

CAPÍTULO VIII USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS O DE PROFESIÓN

ARTÍCULO 285.- Se sancionará con prisión de tres meses a tres años y multa de uno a diez días de salario:

I. Al que, sin ser servidor público, se atribuya ese carácter y ejerza algunas de las funciones correspondientes, y

II. Al que, sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidos por autoridad u organismos legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5o. de la Constitución Federal:

a) Se atribuya el carácter de profesionista;

b) Realice actos propios de una actividad profesional;

c) Ofrezca públicamente sus servicios como profesionista;

d) Use un título o autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho a ello, o

e) Con objeto de lucrar, se asocie a profesionistas legalmente autorizados con fines de ejercicio profesional o administrare alguna asociación profesional.

CAPÍTULO IX USO INDEBIDO DE CONDECORACIONES, INSIGNIAS, DISTINTIVOS O UNIFORMES

ARTÍCULO 286.- Se sancionará con prisión de uno a cinco años y multa de diez a cincuenta días de salario, al que usare uniforme, insignia, distintivo o condecoración a que no tenga derecho, que sean exclusivos de funcionarios o de personas que tengan carácter de autoridad en el Estado.

CAPÍTULO X
DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPÍTULOS PRECEDENTES

ARTÍCULO 287.- Si el falsario hiciere uso de los documentos u objetos que se mencionan en este Título, la falsificación y el delito que por medio de ella comete el delincuente, se sujetarán a las reglas del concurso.

Las disposiciones contenidas en este Título, no se aplicarán sino en lo que no esté previsto en las Leyes especiales o no se oponga en lo establecido en ellas.

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
EXPLOTACIÓN DE MENORES O PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 288.- Se impondrá prisión de uno a cinco años y multa de diez a cincuenta días de salario, a quien explote a menores de edad o personas con discapacidad, induciéndolos a la mendicidad.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO
DELITOS SEXUALES
CAPÍTULO I
ATENTADOS AL PUDOR

ARTÍCULO 289.- Al que sin consentimiento de una persona púber, ejecute en ella un acto erótico, sin el propósito directo e inmediato de llegar a la cópula, se le impondrá sanción de seis meses a dos años de prisión y multa de tres a diez días de salario.

Si se cometiera en impúber o en persona que por cualquier causa no pudiese resistir, la sanción será de uno a cinco años y multa de diez a treinta días de salario.

Cuando se cometa el delito valiéndose de su posición jerárquica o de cualquier circunstancia que implique subordinación, se le impondrá de dos a siete años de prisión y multa de veinte a cien salarios mínimos.

ARTÍCULO 290.- El ilícito de atentados al pudor, solo se perseguirá a petición del ofendido o de su representante legítimo, a excepción del último párrafo del artículo anterior.

CAPÍTULO II ESTUPRO

ARTÍCULO 291.- Al que tenga cópula con una persona mayor de doce y menor de dieciocho años, obteniendo su consentimiento por medio de la seducción o del engaño, se le impondrá de uno a seis años de prisión, y multa de cien a trescientos días de salario mínimo.

La seducción o el engaño se presumen salvo prueba en contrario.

Se entiende por cópula la introducción total o parcial del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía anal, vaginal u oral.

Al que en el ejercicio de sus funciones, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación, cometa el delito de estupro, se le impondrá de tres a nueve años de prisión y una multa de doscientos a quinientos días de salario.

ARTÍCULO 292.- No se procederá contra el estuprador, sino por queja de persona ofendida o de sus padres, o a falta de éstos de sus representantes legales.

CAPÍTULO III VIOLACIÓN

ARTÍCULO 293.- Se sancionará con prisión de seis a veinte años y multa de cien a trescientos días de salario mínimo, a quien por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona cualquiera que sea su sexo.

Se entiende por cópula la introducción total o parcial del miembro viril en el cuerpo de la víctima, ya sea por vía anal, oral o vaginal.

Cuando en la violación exista vínculo matrimonial o de concubinato, se impondrá la pena prevista en el primer párrafo de este artículo, y en este caso el delito será perseguido a petición de parte ofendida.

Tratándose del supuesto previsto en el párrafo anterior, procederá el perdón de parte ofendida por única vez, si el agresor se somete voluntariamente a tratamiento psicológico especializado en institución pública con sede en el Estado, por el tiempo que la autoridad que conozca del asunto determine, el cual no podrá ser menor de seis meses.

El tratamiento psicológico al que se refiere el párrafo anterior, deberá proporcionarse a la familia en los términos que disponga la Ley de la materia.

En caso de que el sujeto activo abandone el tratamiento, quedará sin efecto el perdón y por tanto continuará el proceso en sus etapas correspondientes.

ARTÍCULO 294.- Se sancionará con prisión de diez a treinta años y multa de cien a trescientos días de salario mínimo, cuando la violación se cometa en los siguientes casos:

I. La violación de un ascendiente a su descendiente, o de éste a aquél, sin importar el grado u origen del parentesco;

II. La violación del padrastro a la hijastra o hijastro y la ejecutada por éste a su madrastra o padrastro, así como la cometida por el hermanastro a su hermanastra o hermanastro o entre parientes colaterales hasta el cuarto grado.

Igualmente la realizada por la concubina o concubinario en contra de los descendientes de su pareja, entre los propios descendientes y la ejecutada por éstos a la concubina o al concubinario siempre y cuando exista cohabitación entre el sujeto activo y el pasivo;

III. La violación cometida por el sujeto activo en ejercicio de sus funciones, valiéndose de su posición jerárquica, derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación;

IV. Cuando en una violación intervengan tres o más personas, aun cuando sólo una de ellas efectúe la cópula, se aplicarán a todas ellas la pena anteriormente señalada, y

V. Cuando la violación se cometa sobre persona impúber o púber menor de doce años.

ARTÍCULO 295.- Se equipara a la violación y se sancionará con las mismas penas que anteceden:

I. Al que tenga cópula con persona impúber o privada de razón o de sentido, o cuando por enfermedad o por cualquiera otra causa no pueda resistir;

II. La introducción por vía anal o vaginal de cualquier objeto o parte del cuerpo humano distinto al miembro viril, mediando violencia física o moral, cualquiera que sea el sexo de la víctima;

III. La introducción por vía anal o vaginal de cualquier objeto o parte del cuerpo humano distinto al miembro viril, cometida sobre persona impúber o privada de razón o de sentido, o cuando por enfermedad o por cualquiera otra causa no pueda resistir, cualquiera que sea el sexo de la víctima, y

IV. Cuando el sujeto activo por medio de la violencia física o moral obligue al sujeto pasivo menor de edad a que le realice cópula.

CAPÍTULO IV HOSTIGAMIENTO O ACOSO SEXUAL

ARTÍCULO 296.- Al que con fines sexuales acose reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica o de cualquier circunstancia que genere condiciones de preeminencia entre el ofensor y el ofendido, trátese del ámbito familiar, doméstico, docente, laboral, vecinal o cualquier otro que implique subordinación, respeto o ventaja, se le impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientos días de salario.

Si el sujeto pasivo fuere menor de edad o incapaz, la pena será de tres a ocho años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario mínimo.

Las penas previstas en este artículo son independientes de cualquier otro delito que resulte cometido con motivo del acoso.

ARTÍCULO 297.- Al que con fines lascivos, sexuales o de lujuria, asedie reiteradamente a una persona de cualquier sexo, aprovechándose de cualquier circunstancia que produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente para la víctima, se le impondrán de uno a tres años de prisión y multa de cien a trescientos días de salario.

TÍTULO DÉCIMO CUARTO
DELITOS CONTRA EL ORDEN DE LA FAMILIA
CAPÍTULO I
DE LA SUPOSICIÓN Y SUPRESIÓN DEL ESTADO CIVIL

ARTÍCULO 298.- Se impondrá de uno a seis años de prisión y multa de diez a treinta días de salario al que con el fin de alterar el estado civil, ejecute alguno de los hechos siguientes:

- I. Atribuir un recién nacido a mujer que no sea realmente su madre;
- II. Hacer registrar en las Oficinas del Registro Civil un nacimiento o un fallecimiento no ocurrido;
- III. A los padres que no presenten a un hijo suyo al Registro Civil, con el propósito de hacerle perder su estado civil, o que declaren falsamente su fallecimiento, o lo presenten ocultando sus nombres o suponiendo que los padres son otras personas;
- IV. A los que sustituyan a un menor por otro, o cometan ocultación de un menor, y
- V. Al que usurpe el estado civil de otro con el fin de adquirir derechos que no le corresponden.

La anterior sanción será aumentada hasta una mitad más cuando se trate servidores públicos adscritos a las oficialías del registro civil.

CAPÍTULO II
EXPOSICIÓN DE MENORES

ARTÍCULO 299.- Al que abandone en una casa de expósitos a un menor de siete años que se le hubiere confiado, o lo entregue a otro establecimiento de beneficencia o a cualquier otra persona, sin anuencia de la que se lo confió o de la autoridad en su defecto, se le aplicará de uno a tres años de prisión y multa de tres a quince días de salario.

ARTÍCULO 300.- Los ascendientes o tutores que entreguen a un menor de siete años que esté bajo su potestad a una casa de expósitos, a un establecimiento de beneficencia, o a cualquiera otra persona; además de aplicárseles las sanciones a que se refiere el artículo anterior, perderán los derechos que tengan sobre la persona y bienes del menor.

CAPÍTULO III SUSTRACCIÓN Y TRÁFICO DE MENORES

ARTÍCULO 301.- Al familiar de un menor de dieciocho años o incapaz que lo sustraiga o retenga, sin causa justificada o sin orden de la autoridad competente, de la custodia o guarda de quien legítimamente la tenga, se le impondrá de uno a ocho años de prisión y multa de diez a cuarenta días de salario.

Cuando el responsable de la sustracción o retención sea uno de los progenitores se perseguirá por querrela.

No se aplicarán las sanciones anteriores a los progenitores que incurran en los actos señalados, cuando medie causa justificada, entendiéndose por estas, toda conducta realizada por el desposeído que perjudique evidentemente la salud física o moral del menor.

Cuando la sustracción o retención de un menor de dieciocho años se realice por una persona distinta a las indicadas en el primer párrafo, se impondrá de cinco a diez años de prisión y multa de diez a sesenta días de salario. Si se pone en libertad al menor, espontáneamente, antes de quince días y sin causarle algún perjuicio, se aplicará como sanción de dos a ocho años de prisión.

ARTÍCULO 302.- Se impondrá de diez a cincuenta años de prisión y multa de doscientos a quinientos días de salario mínimo, a quien cometa el delito de tráfico de menores en alguna de las modalidades siguientes:

I. Al que por medio de la violencia física o moral, o mediante engaños o furtivamente, sustraiga a un menor de dieciocho años de la custodia de sus progenitores, o de aquellos que ejerzan la patria potestad o la tutela, con fines comerciales o para apropiárselo;

II. Al progenitor de un menor de dieciocho años que ilegítimamente entregue en forma gratuita o en venta a un tercero para fines matrimoniales, prostitución, tráfico de estupefacientes, mendicidad o concubinato, y

III. A quien venda, compre o de cualquier otra forma disponga de un menor de dieciocho años para traficar con cualquiera de sus órganos o parte de su cuerpo.

Igual pena se aplicará al que teniendo conocimiento de las actividades de tráfico de menores o a la venta clandestina de órganos o parte de su cuerpo, no lo denuncie a las autoridades.

A quienes dirijan, organicen o aporten recursos económicos, técnicos o materiales que permitan el ejercicio de tráfico de menores o la venta clandestina de órganos o parte de su cuerpo, se les aplicará de veinte a cincuenta años de prisión y multa de quinientos días de salario mínimo.

CAPÍTULO IV BIGAMIA

ARTÍCULO 303.- Se impondrá de seis meses a cinco años y multa de tres a quince días de salario al que estando unido a una persona en matrimonio, contraiga otro con las formalidades legales. Las mismas sanciones se aplicarán al otro contrayente, si conocía el impedimento al tiempo de celebrarse el matrimonio ilegítimo.

A quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, que a sabiendas dieran su consentimiento para la celebración del nuevo matrimonio, así como a los testigos que con igual conocimiento intervengan en el acto, se les impondrá de tres meses a tres años de prisión y multa de uno a diez días de salario.

ARTÍCULO 304.- El término para la prescripción de la acción penal por bigamia, empezará a correr desde que uno de los dos matrimonios haya quedado disuelto por la muerte de alguno de los cónyuges, o desde que el segundo haya sido declarado nulo por la causal de bigamia.

CAPÍTULO V INCESTO

ARTÍCULO 305.- Se impondrá de uno a seis años de prisión y multa de tres a quince días de salario, a los ascendientes que tengan cópula con sus descendientes, cuando exista consentimiento de ambos. La sanción aplicable a los descendientes será de seis meses a tres años de prisión y multa de uno a diez días de salario.

Se aplicará esta última sanción en caso de incesto entre hermanos.

CAPÍTULO VI ABANDONO DE FAMILIARES

ARTÍCULO 306.- Al que sin causa justificada, falte en forma total o parcial, ésta última sólo cuando ya se haya decretado la pensión provisional o definitiva por el juez de familia; o por convenio firmado ante cualquier autoridad distinta a la judicial, por más de treinta días naturales a la obligación de suministrar alimentos a sus hijos, cónyuge, concubina o cualquier otra persona con quien tenga el deber de asistencia conforme al Código Civil para el Estado de Nayarit, aun cuando el o los acreedores alimentarios se dejen al cuidado o reciban ayuda de un tercero, se le impondrá de dos a cinco años de prisión y multa de treinta a doscientos días de salario mínimo vigente en la entidad.

La penalidad antes referida podrá aumentarse hasta en una mitad más, cuando el deudor alimentario abandone o incumpla sus obligaciones de asistencia alimentaria para con una mujer en estado de gravidez con quien se presume la paternidad en razón de la relación de matrimonio o concubinato que los una.

Además de las sanciones señaladas y de la reparación del daño a que se tenga derecho, en caso de reincidencia el juez podrá decretar la suspensión o pérdida de los

derechos de patria potestad, tutela, hereditarios o de alimentos que pudiere tener el sujeto activo a su favor respecto de la víctima.

ARTÍCULO 307.- A quien con el propósito de eludir, evitar o suspender el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias decretadas previamente por autoridad judicial, se coloque en estado de insolvencia, ya sea renunciando o abandonando su trabajo, solicitando licencia sin goce de sueldo, dilapidando sus bienes o simulando actos jurídicos para tal efecto, se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario mínimo vigente en la entidad.

ARTÍCULO 308.- El delito de abandono de familiares se perseguirá a petición de parte ofendida o del legítimo representante de los menores; a falta de representante de éstos, la investigación se iniciará de oficio por el Ministerio Público, a reserva de que el Juez de la causa designe un tutor especial para los efectos de este precepto.

Cuando las víctimas sean personas incapaces, privadas de razón o de sentido, el delito siempre se perseguirá de oficio.

ARTÍCULO 309.- Para que el perdón concedido por el ofendido o su representante pueda producir efectos, el responsable deberá pagar todas las cantidades que hubiere dejado de ministrar por concepto de alimentos y garantizar el pago futuro de los mismos conforme al prudente arbitrio del Juez.

ARTÍCULO 310.- Si del abandono resultare algún daño ya sea muerte, lesiones o cualquier otro, se aplicarán las sanciones que correspondan atendiendo las reglas del concurso.

CAPÍTULO VII VIOLENCIA FAMILIAR

ARTÍCULO 311.- Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como la omisión grave, que se ejerce en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma contra su integridad física, psíquica o emocional, dentro o fuera del domicilio familiar, independientemente de que pueda producir o no lesiones.

Se considera miembro de la familia:

- I. Aquella persona con la que el sujeto activo se encuentre unida en relación de matrimonio o concubinato;
- II. Aquella persona con la que el sujeto activo hubiere procreado hijos en común, o
- III. Los parientes del sujeto activo en línea recta ascendente o descendente sin límite de grado, el pariente colateral hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado.

Al responsable del delito de violencia familiar se le impondrá de uno a ocho años de prisión y multa de cien a trescientos días de salario mínimo vigente en la entidad, pudiendo el juez decretar la suspensión o pérdida de los derechos de patria potestad, tutela, hereditarios o de alimentos que tenga respecto de la víctima.

Además de las penas señaladas en el párrafo anterior, la autoridad judicial podrá someter al agresor a tratamiento psicológico especializado en institución pública con sede en el Estado, por el tiempo que la autoridad competente determine, el cual no podrá ser mayor al tiempo impuesto en la pena de prisión.

Tratándose del delito de violencia familiar, procederá el perdón de parte ofendida por única ocasión, si el agresor se somete voluntariamente a tratamiento psicológico especializado en institución pública o privada con sede en el Estado, por el tiempo que la autoridad determine, el cual no podrá ser menor de seis meses. El tratamiento psicológico deberá proporcionarse también al sujeto pasivo en los términos que disponga la Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Nayarit.

En caso de que el sujeto activo abandone el tratamiento, quedará sin efecto el perdón y continuará el proceso en sus etapas respectivas.

En caso de reincidencia por parte del agresor o que la víctima se encuentre en estado de gravidez o padezca algún trastorno mental, se aumentará hasta en una mitad más la pena que corresponda.

Si de la comisión de la violencia familiar resultaren otras conductas constitutivas de delitos como lesiones, homicidio o contra la libertad sexual, se aplicarán las reglas del concurso.

ARTÍCULO 312.- Se equipara a la violencia familiar y se sancionará como tal, a quien ejerza cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior, en contra de quien esté sujeto a su tutela, curatela, custodia, protección o educación, siempre que el agresor y la víctima cohabiten en el mismo domicilio o ésta se encuentre adscrita al centro educativo donde aquél prestare sus servicios, o con quien el sujeto activo tenga una relación de hecho.

Para los efectos de este artículo se entenderá por relación de hecho, la que subsista por más de seis meses, entre quienes:

I. En forma constante cohabiten manteniendo una relación de pareja, incluyéndose a los descendientes o ascendientes de cualquiera de ellos, siempre y cuando vivan en el mismo domicilio;

II. Mantengan una relación de pareja en forma constante e ininterrumpida, aun cuando no vivan en el mismo domicilio, o

III. Se incorporen a un núcleo familiar cohabitando en el mismo domicilio del activo, aun cuando no tengan vínculo de parentesco con ninguno de sus integrantes.

Los supuestos que regula este artículo se perseguirán conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.

ARTÍCULO 313.- El delito de violencia familiar se perseguirá por querrela, excepto cuando se actualicen los siguientes supuestos:

I. La víctima se encuentre en estado de gravidez o durante los tres meses posteriores al parto;

II. La víctima sea menor de edad, mayor de sesenta años de edad o presente alguna discapacidad física o mental total o parcial, temporal o permanente, que le impida comprender el significado del hecho;

III. Se cometa con el uso de armas de fuego o punzocortantes;

IV. Se cometa con la participación de dos o más personas;

V. Se deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo;

VI. Existan antecedentes legalmente documentados de violencia familiar cometidos por el mismo agresor contra la víctima, o

VII. Exista imposibilidad material de la víctima de denunciar la violencia familiar ejercida en su contra.

TÍTULO DÉCIMO QUINTO
CAPÍTULO ÚNICO
DELITOS EN MATERIA DE INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN Y PROFANACIÓN DE
CADÁVERES

ARTÍCULO 314.- Se impondrá prisión de tres meses a tres años y multa de uno a diez días de salario:

I. Al que ilegalmente retenga, destruya, mutile, oculte o sepulte un cadáver o un feto humano, o parte de éstos, o mande hacerlo;

II. Al que oculte, o sin los requisitos legales sepulte, o mande ocultar o sepultar el cadáver de una persona a la que se haya privado de la vida en forma violenta, si el inculpado conocía ésta circunstancia, y

III. Al que exhume un cadáver sin los requisitos legales o con violación de derechos.

ARTÍCULO 315.- Se impondrá prisión de tres meses a tres años y multa de uno a diez días de salario:

I. Al que sin causa legal viole un túmulo, un sepulcro o un féretro, y

II. Al que profane un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio, obscenidad o brutalidad.

TÍTULO DÉCIMO SEXTO
DELITOS CONTRA LA PAZ, LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS
CAPÍTULO I
AMENAZAS

ARTÍCULO 316.- Comete el delito de amenazas, el que valiéndose de cualquier medio intimide a otro con causarle un mal en su persona, en su honor, en su prestigio, en sus bienes o en la persona, honor, prestigio o bienes de alguien con quien esté ligado con cualquier vínculo.

El delito de amenazas se sancionará con prisión de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a cincuenta días de salario.

ARTÍCULO 317.- Al que por medio de amenazas de cualquier género trate de impedir que otro ejecute lo que tiene derecho a hacer, se le aplicarán las mismas sanciones a que se refiere el artículo anterior.

Se exigirá solamente caución de no ofender, si los daños con que se amenaza son leves o evitables.

ARTÍCULO 318.- Si el amenazador consigue lo que se propone, se observarán las reglas siguientes:

I. Si lo que exigió y recibió fue dinero o algún documento o cosa estimable en dinero, se le aplicará la sanción del robo con violencia;

II. Si exigió que el amenazado cometiera un delito, la sanción de la amenaza y la que le corresponda por su participación en el que resulte, se sujetarán a las reglas del concurso, y

III. Si lo que exigió fue que dejara de ejecutar un acto lícito, se le impondrá sanción de tres meses a dos años de prisión y multa de uno a diez días de salario.

CAPÍTULO II CHANTAJE

ARTÍCULO 319.- Comete el delito de chantaje quien exija de otro la entrega de una cantidad de dinero u otro bien, bajo la amenaza de dar a conocer a otra u otras personas, algún hecho cierto o falso que afecte al honor, tranquilidad familiar, prestigio o fortuna del amenazado o de su cónyuge, ascendientes, concubina o concubinario, descendientes o hermanos o de alguna entidad en cuya gestión intervengan éstos o el amenazado.

El delito de chantaje se comete también cuando el amenazador pretenda que el amenazado u otra persona contraigan sin o contra su voluntad, alguna obligación o que realice determinado acto o deje de realizarlos.

A quien cometa el delito de chantaje, se le impondrán de uno a tres años de prisión y multa de cinco a treinta días de salario.

Si lo que se exigió fue la entrega de cantidades o efectos y ésta se realiza, además de las sanciones que señala el párrafo anterior se aplicarán las de robo con violencia.

CAPÍTULO III

ALLANAMIENTO DE MORADA, OFICINA O ESTABLECIMIENTO MERCANTIL

ARTÍCULO 320.- Al que se introduzca a un departamento, vivienda, aposento o dependencia de una casa habitación sin motivo justificado, sin orden de autoridad competente, furtivamente, con engaño, violencia o sin permiso de la persona autorizada para darlo, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a cien días de salario.

Si el hecho se realiza por dos o más personas o por servidor público en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, la pena será de uno a cuatro años de prisión.

Se impondrán las penas previstas en el párrafo anterior, al que se introduzca sin orden de autoridad competente o sin permiso de la persona autorizada para ello, en el domicilio de una persona moral pública o privada, oficina, establecimiento mercantil o local abierto al público fuera del horario laboral que corresponda.

CAPÍTULO IV

ASALTO

ARTÍCULO 321.- Comete el delito de asalto el que en despoblado o paraje solitario haga uso de la violencia física o moral sobre una persona con el propósito de causarle un mal, obtener un lucro o beneficio, o de conseguir su consentimiento para cualquier fin y cualesquiera que sean los medios y el grado de violencia empleado, independientemente del hecho delictuoso que resulte cometido, se aplicará prisión de cinco a quince años y multa de treinta a ochenta días de salario.

Para los efectos del párrafo anterior se considera paraje solitario, como el lugar situado en poblado o despoblado, que por la hora en que los hechos acontecen, el sujeto pasivo se encuentra imposibilitado para pedir auxilio y obtenerlo.

La misma sanción se aplicará cuando se haga uso de la violencia física o moral estando la víctima en un vehículo particular o de transporte público, independientemente del lugar en que se encuentre o cuando se cometa en contra de una oficina bancaria, recaudadora u otra en que existan caudales, respecto de personas que las custodien o transporten aquellos.

Si el asalto se efectuare de noche o si fueren varios los asaltantes se aplicará prisión de siete a veinte años y multa de cincuenta a doscientos días de salario.

ARTÍCULO 322.- A quienes asalten un poblado o ranchería se les sancionará con prisión de veinte a cuarenta años y multa de cincuenta a doscientos días de salario, si fueren los cabecillas o jefes y de veinte a treinta años de prisión y multa de veinte a cien días de salario a los demás, sin perjuicio de aplicar las reglas de concurso por cualesquiera otros delitos que se cometan.

CAPÍTULO V PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL

ARTÍCULO 323.- Se impondrán de seis meses a tres años de prisión y de veinticinco a cien días de multa, al particular que prive a otro de su libertad, sin el propósito de obtener un lucro, causar un daño o perjuicio a la persona privada de su libertad o a cualquier otra.

Si la privación de la libertad excede de veinticuatro horas, la pena de prisión se incrementará un mes por cada día.

Si el agente espontáneamente libera a la víctima dentro de las veinticuatro horas siguientes al de la privación de la libertad, la pena de prisión será de la mitad de la prevista.

La pena de prisión se aumentará en una mitad más, cuando la privación de la libertad se realice con violencia, la víctima sea menor de edad o mayor de sesenta años o por

cualquier circunstancia, la víctima esté en situación de inferioridad física o mental respecto del agente.

ARTÍCULO 324.- Se impondrán de tres a ocho años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa, y al pago de los salarios y prestaciones legales de la víctima, a quien obligue a otro a prestarle trabajos o servicios personales sin la retribución debida, ya sea empleando violencia física o moral o valiéndose del engaño, de la intimidación o de cualquier otro medio.

ARTÍCULO 325.- Al que prive a otro de su libertad, con el propósito de realizar un acto sexual, se le impondrá de uno a cinco años de prisión.

Si dentro de las veinticuatro horas siguientes, el autor del delito restituye la libertad a la víctima, sin haber practicado el acto sexual, la sanción será de tres meses a tres años de prisión.

CAPÍTULO VI USURPACIÓN DE IDENTIDAD

ARTÍCULO 326.- Se le impondrán de tres a siete años de prisión y de cien a quinientos días multa, a quien ejerza con fines ilícitos, un derecho o use cualquier tipo de datos, informaciones o documentos que legítimamente pertenezcan a otro, que lo individualiza ante la sociedad y que le permite a una persona física o jurídica colectiva ser identificada o identificable, para hacerse pasar por él.

Se equiparan a la usurpación de identidad y se impondrán las penas previstas en el párrafo que precede a quienes:

- I. Cometan un hecho ilícito previsto en las disposiciones legales con motivo de la usurpación de la identidad;
- II. Utilicen datos personales, sin consentimiento de quien deba otorgarlo;
- III. Otorguen el consentimiento para llevar a cabo la usurpación de su identidad, y
- IV. Se valgan de la homonimia, parecido físico o similitud de la voz para cometer algún ilícito.

Las sanciones previstas en este artículo se impondrán con independencia de las que correspondan por la comisión de otro u otros delitos.

ARTÍCULO 327.- Las penas señaladas en el artículo anterior se incrementarán hasta en una mitad más, cuando el ilícito sea cometido por un servidor público aprovechándose de sus funciones, o por quien sin serlo, se valga de su profesión o empleo para ello.

CAPÍTULO VII EXTORSIÓN

ARTÍCULO 328.- Al que sin derecho obligue a otro a hacer, tolerar o dejar de hacer algo, con la finalidad de obtener un lucro o beneficio para sí o para otro o causar un daño, se le impondrán de tres a nueve años de prisión y de cien a quinientos días multa.

Cuando este delito se cometa utilizando cualquier medio de comunicación mediante los cuales se puedan realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúe a través de hilos, medios de transmisión inalámbrica de ondas o señales electromagnéticas, medios ópticos, o cualquier medio físico, se le impondrán de cinco a diez años de prisión y de cien a quinientos días multa.

Si en la comisión de este delito participa algún miembro de una corporación policíaca o servidor público, se impondrá además, la destitución e inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión pública.

Se impondrá además, una pena de dos a cinco años de prisión, cuando el sujeto activo del delito se haya ostentado como miembro de una asociación o grupo delictuoso.

CAPÍTULO VIII DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

ARTÍCULO 329.- Se aplicarán de cinco a veinte años de prisión y multa de cien a cuatrocientos días de salario, al responsable de la desaparición forzada de personas.

Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que en ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas y derivado de la privación de la libertad, mantenga oculta o desaparecida a una o más personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan, cualesquiera que sea el método y motivación utilizados, sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre el paradero de la o de las víctimas. -

Serán igualmente responsables del delito de desaparición forzada de personas, todo aquel que aun cuando no sea servidor público, actúe aprovechando la autorización, el apoyo o la aquiescencia de funcionarios públicos.

TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO DELITOS CONTRA EL HONOR CAPÍTULO I GOLPES SIMPLES

ARTÍCULO 330.- Se aplicará de tres meses a un año de prisión o multa de uno a diez días de salario al que diere a otro, fuera de riña, una bofetada, latigazo o cualquiera otro golpe simple que no cause lesión alguna, si los infiere con intención de ofender, y no se hace en ejercicio del derecho de corrección. Dichas sanciones serán de tres meses a tres años de prisión y multa de uno a diez días de salario, cuando los golpes simples se infieran a un ascendiente.

ARTÍCULO 331.- No se procederá contra el autor de golpes, sino por queja del ofendido, a no ser que el delito se cometa en una reunión o lugar público, o a un ascendiente.

CAPÍTULO II

INJURIAS

ARTÍCULO 332.- Se entiende por injuria, toda expresión proferida o toda acción para manifestar desprecio a otro, o con el fin de hacerle alguna ofensa.

El delito de injurias se sancionará con prisión de tres meses a un año o multa de tres a diez días de salario, a juicio del Juez.

Cuando las injurias fueren recíprocas, el Juez podrá según las circunstancias, declarar exentas de sanción a las dos partes o exigirles caución de no ofender.

CAPÍTULO III DIFAMACION

ARTÍCULO 333.- Se aplicará prisión de tres meses a dos años y multa de tres a quince días de salario al que comunicare a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado, que cause o puede causarle deshonra, descrédito o perjuicio, o exponerla al desprecio de alguien.

Artículo 334.- El acusado de difamación sólo podrá probar la verdad de la imputación en los casos siguientes:

- I. Si la imputación hubiere tenido por objeto defender o garantizar un interés público actual, y
- II. Si el hecho imputado está declarado cierto, por sentencia irrevocable y el inculpado obre por interés legítimo y sin ánimo de dañar.

CAPÍTULO IV CALUMNIA

ARTÍCULO 335.- Se aplicará de seis meses a dos años o multa de tres a quince días de salario al que impute falsamente un delito, ya sea porque el hecho es falso o inocente la persona a quien se le imputa.

ARTÍCULO 336.- Cuando haya pendiente un proceso o averiguación de un delito imputado a alguien calumniosamente, se suspenderá el ejercicio de la acción de calumnia hasta que en dicho proceso se dicte sentencia ejecutoria. En este caso, la prescripción comenzará a correr cuando termine el proceso.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES COMUNES A LAS INJURIAS, DIFAMACIÓN Y CALUMNIAS

ARTÍCULO 337.- No se procederá contra los autores de injurias, difamación o calumnia, sino por querrela de los ofendidos o de sus legítimos representantes.

Si la injuria, difamación o calumnia son posteriores al fallecimiento del ofendido, sólo se procederá en virtud de querrela de sus familiares o representantes legítimos.

Si esos mismos delitos se cometen con anterioridad al fallecimiento del ofendido y éste hubiere perdonado la ofensa, o sabiendo que se había inferido, no hubiere presentado su querrela pudiendo hacerlo, ni manifestado que lo hicieran sus herederos, se extinguirá la sanción penal de esos delitos.

ARTÍCULO 338.- Cualquier objeto que hubiere servido de medio para cometer los delitos de injurias, difamación o calumnia se inutilizará, a menos que se trate de algún documento público o privado que importe obligación, liberación o transmisión de derechos. En éste caso se anotará en el documento un resumen de la sentencia pronunciada contra el acusado o en hoja anexa si no cupiere.

ARTÍCULO 339.- Siempre que la injuria o la difamación se hagan de un modo encubierto o en términos equívocos y el inculpado se niegue a dar una explicación satisfactoria a juicio del Juez, se aplicará la sanción que corresponda a la injuria o a la difamación, como si el delito se hubiere cometido en las formas señaladas.

ARTÍCULO 340.- No se aplicará sanción alguna como responsable de difamación, ni de injurias:

I. Al que manifieste técnicamente su parecer sobre alguna producción literaria, artística, científica o industrial;

II. Al que manifieste su juicio sobre la capacidad, instrucción, aptitud o conducta de otro, si probare que obró en cumplimiento de un deber, o por interés público, o que con la debida reserva lo hizo por humanidad, por prestar un servicio a persona con quien tenga parentesco o amistad o dando informes que se le hubieren pedido si no lo hiciera a sabiendas calumniosamente, y

III. Al autor de un escrito presentado o de un discurso pronunciado en los Tribunales, pues si hiciera uso de alguna expresión difamatoria o injuriosa, los jueces, según la gravedad del caso, le aplicarán alguna de las correcciones disciplinarias de las que permita la Ley.

Lo prevenido en esta fracción, no comprende el caso en que la imputación sea calumniosa o se extienda a personas extrañas al litigio, o envuelva hechos que no se relacionen con el negocio de que se trata.

ARTÍCULO 341.- No servirá de excusa de la difamación, ni de la calumnia, que el hecho imputado sea notorio, o que el responsable no haya hecho más que reproducir lo ya publicado en la República o en otro país.

TÍTULO DÉCIMO OCTAVO
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL
CAPÍTULO I
LESIONES

ARTÍCULO 342.- La lesión consiste en todo daño en el cuerpo de alguien, o cualquier alteración de la salud, producida por una causa externa imputable a una persona.

ARTÍCULO 343.- Al que infiera una lesión que no ponga el peligro la vida del ofendido y tarde en sanar menos de quince días, se le impondrá de tres meses a un año de prisión y multa de uno a cinco días de salario. Si tardare en sanar más de quince días se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de tres a diez días de salario.

ARTÍCULO 344.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de tres a quince días de salario al que infiera una lesión que deje a la ofendida cicatriz en la cara, perpetuamente notable.

ARTÍCULO 345.- Se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de cincuenta a cien días de salario al que infiera una lesión que perturbe para siempre la vista, o disminuya la facultad de oír, entorpezca o debilite permanentemente una mano, un brazo, una pierna, o cualquiera otro órgano, el uso de la palabra o alguna de las facultades mentales.

ARTÍCULO 346.- Se impondrán de cuatro a doce años de prisión y multa de cien a doscientos días de salario al que infiera una lesión de la que resulte una enfermedad segura o probablemente incurable, la inutilización completa o la pérdida de un ojo, de un brazo, de una mano, de una pierna o de un pié, o de cualquier otro órgano; cuando quede perjudicada para siempre cualquier función orgánica o cuando el ofendido quede sordo o con una deformidad incorregible.

Se impondrán de cinco a quince años de prisión y multa de doscientos a trescientos días de salario al que infiera una lesión a consecuencia de la cual resulte incapacidad permanente para trabajar, enajenación mental, la pérdida de la vista o del habla o de las funciones sexuales.

ARTÍCULO 347.- Al que infiera lesiones que pongan en peligro la vida, se le impondrán de tres a ocho años de prisión y multa de diez a treinta días de salario, sin perjuicio de las sanciones que le correspondan conforme a los artículos anteriores.

ARTÍCULO 348.- Al que ejerciendo la patria potestad o la tutela, infiera lesiones a los menores o pupilos bajo su guarda, el juez podrá imponerle además de las penas correspondientes a las lesiones, suspensión o privación en el ejercicio de aquellos derechos.

ARTÍCULO 349.- Si las lesiones fueren inferidas en riña, las sanciones señaladas en los artículos que anteceden, podrán disminuirse hasta la mitad o hasta los cinco sextos según se trate del provocador o del provocado y teniendo en cuenta la mayor o menor importancia de la provocación y lo dispuesto en los artículos 91 y 92 de este Código.

Cuando en la Riña intervengan tres o más personas, se observarán las reglas siguientes:

I. Si la víctima recibiere una sola lesión y constare quien la infirió, sólo a éste se le aplicará la sanción que proceda, y a los demás las correspondientes a las que hubieren inferido en su coparticipación;

II. Si se infieren varias lesiones y constare quiénes efectuaron cada una de ellas, se les sancionará conforme a las disposiciones anteriores, y

III. Cuando las lesiones sean de naturaleza y consecuencias diversas y se ignore quiénes infirieron una y otras, pero constare quiénes lesionaron, a todos éstos se aplicará de un año a cinco años de prisión. Si se ignora quiénes lesionaron a todos los que intervinieron en la riña se les aplicará la misma sanción que señala esta fracción.

ARTÍCULO 350.- Si las lesiones fueren calificadas, además de las sanciones señaladas en los artículos que anteceden, la pena correspondiente se aumentará de una tercera parte del mínimo a dos terceras partes del máximo, de la sanción que correspondiere a la lesión inferida.

ARTÍCULO 351.- Si el ofendido fuere ascendiente del autor de una lesión, se aumentarán dos años de prisión al mínimo y al máximo de la sanción que corresponda conforme los artículos que preceden.

ARTÍCULO 352.- De las lesiones que a una persona cause algún animal bravío, será responsable el que con esa intención lo azuce o lo suelte. Si lo suelta por descuido, la sanción será la correspondiente al delito culposos.

CAPÍTULO II HOMICIDIO

ARTÍCULO 353.- Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro.

ARTÍCULO 354.- Para la aplicación de las sanciones que correspondan al que infrinja el artículo anterior, no se tendrá como mortal una lesión, sino cuando se verifique que la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada por la misma lesión y que no pudo combatirse, ya sea por ser incurable, o por no tenerse al alcance los recursos necesarios;

ARTÍCULO 355.- Siempre que se verifique la circunstancia del artículo anterior, se tendrá como mortal una lesión, aunque se pruebe:

- I. Que se habría evitado la muerte con auxilios oportunos;
- II. Que la lesión no había sido mortal en otra persona, y
- III. Que fue a causa de la constitución física de la víctima, o de las circunstancias en que recibió la lesión.

ARTÍCULO 356.- No se tendrá como mortal una lesión aunque muera el que la recibió, cuando la muerte sea resultado de una causa anterior a la lesión y sobre la cual ésta no haya influido, o cuando la lesión se hubiere agravado por causas posteriores, como la aplicación de medicamentos positivamente nocivos, operaciones quirúrgicas infortunadas, excesos o imprudencias del paciente o de los que lo rodearon.

ARTÍCULO 357.- Al responsable de cualquier homicidio simple intencional que no tenga señalada una sanción especial en este Código, se le impondrán de diez a veinte años de prisión y multa de quince a cien días de salario.

ARTÍCULO 358.- Cuando el homicidio se cometa en riña, se impondrá al responsable la sanción de cuatro a diez años de prisión si es el provocado y de seis a doce años si es provocador, y en ambos casos multa de diez a cincuenta días de salario.

Quando en la riña intervengan tres o más personas, se observarán las reglas siguientes:

- I. Si la víctima recibiere una sola lesión mortal y constare quien la infirió solo a éste se le aplicará la sanción que proceda, y a los demás, las correspondientes a las que hubiere inferido o a su coparticipación;
- II. Cuando se infieran varias lesiones, todas mortales, y constare quiénes fueron los responsables se considerará a todos estos como homicidas;
- III. Cuando sean varias las lesiones, unas mortales y otras no y se ignore quiénes infirieron las primeras, pero constare quienes lesionaron, a todos se aplicará de cuatro a ocho años de prisión. Si se ignora quiénes lesionaron, a todos los que intervinieron en la riña se les aplicará la misma sanción que señala esta fracción, y

IV. Cuando las lesiones no fueren mortales sino por su número y no se pueda averiguar quiénes las infirieron, se aplicará de cuatro a siete años de prisión, a todos los que hubieren atacado al occiso.

ARTÍCULO 359.- Salvo el caso de la fracción IX del artículo 361 de este código, al responsable de homicidio calificado se impondrá una pena de veinte a cincuenta años de prisión y multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario mínimo.

CAPÍTULO III

REGLAS COMUNES PARA LESIONES Y HOMICIDIOS

ARTÍCULO 360.- La riña es la contienda de obra con el ánimo de dañarse recíprocamente.

ARTÍCULO 361.- Se entiende que el homicidio y las lesiones son calificados:

I. Cuando se cometan con premeditación, alevosía, ventaja o traición.

Hay premeditación cuando el agente ha reflexionado sobre el delito de homicidio o de lesiones que iba a cometer.

Hay ventaja cuando el delincuente no corra riesgo de ser muerto o lesionado por el ofendido, en el momento de la comisión del delito.

Hay alevosía cuando se sorprende intencionalmente a alguien de improviso o empleando asechanzas.

Hay traición cuando se viole la fe o la seguridad que expresamente se había prometido a la víctima o la tácita que ésta debía esperar en razón de parentesco, gratitud, amistad o cualquiera otra que inspire confianza;

II. Cuando se ejecuten por retribución dada o prometida;

III. Cuando se causen por motivos depravados;

IV. Cuando se cometan con brutal ferocidad;

V. Cuando se causen por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos;

VI. Cuando se dé tormento al ofendido, o se obre con ensañamiento o crueldad;

VII. Cuando se cometan por motivos de odio por la condición de género, preferencia sexual o religiosa u origen racial;

VIII. Cuando dolosamente se prive de la vida o se cause un menoscabo a la salud o la integridad física de los miembros de corporaciones policiales, fuerzas armadas o de cualquier otro tipo de instituciones de seguridad pública, así como de los servidores

públicos encargados de las labores de administración, impartición o procuración de justicia, siempre que se ejecuten a consecuencia del desempeño legítimo de sus funciones, y

IX. Cuando el homicidio contra la mujer se cometa por razones de misoginia.

Para los efectos de esta fracción, hay razones de misoginia cuando la conducta del activo sea motivada por odio, aversión obsesiva, discriminación o dominio hacia la mujer por la condición de su género, siempre que concurra una o más de las circunstancias siguientes:

- a) La víctima presente signos recientes de violencia sexual de cualquier tipo;
- b) A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, inmediatas o posteriores a la privación de la vida;
- c) Existan antecedentes o indicios legalmente preconstituidos de amenazas, acoso, hostigamiento, violencia intrafamiliar o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
- d) El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público;
- e) Cuando el sujeto activo haya cometido sobre la víctima otro delito de tipo sexual;
- f) El homicidio se cometa para ocultar una violación o evitar que se denuncie o sancione dicho ilícito, o
- g) La víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad, de cualquier forma.

A quien prive de la vida a una mujer por razones de misoginia se le impondrá una pena de veintidós a cincuenta años de prisión y multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario mínimo.

Si entre el activo y la víctima existió una relación de parentesco por consanguinidad, matrimonio, concubinato, noviazgo, amistad o cualquier otra relación sentimental de hecho, laboral, docente, vecinal o cualquier otra que implique confianza, subordinación, superioridad o ventaja, y se acredita cualquiera de los supuestos anteriores, se impondrán de veinticinco a cincuenta años de prisión.

Tratándose de una relación de parentesco, se impondrá además de la prisión, la pérdida de derechos con respecto a la víctima u ofendidos, incluidos los de carácter sucesorio.

ARTÍCULO 362.- Se impondrá sanción de cinco a doce años de prisión y multa de uno a diez días de salario al ascendiente que prive de la vida al corruptor de su hija que esté bajo su potestad, si lo hiciere en el momento de sorprenderlos en el acto carnal o en un momento próximo a su consumación, siempre que no hubiere procurado la corrupción de su hija, pues en caso contrario quedará sujeto a las disposiciones sobre homicidio.

CAPÍTULO IV DISPARO DE ARMA DE FUEGO

ARTÍCULO 363.- Se impondrá prisión de tres meses a dos años y multa hasta de tres a diez días de salario al que dispare un arma de fuego, que ponga en peligro la integridad de las personas.

CAPÍTULO V INSTIGACIÓN O AYUDA AL SUICIDIO

ARTÍCULO 364.- Al que instigue o ayude a otro al suicidio se le impondrá sanción de tres a diez años de prisión y multa de cinco a cincuenta días de salario. Si la ayuda se prestare hasta el punto de ejecutar el responsable la muerte, la prisión será de cuatro a doce años y multa de diez a setenta y cinco días de salario. Si el suicidio no se lleva a efecto, pero su intento produce lesiones, la sanción será de tres meses a tres años de prisión.

ARTÍCULO 365.- El que pudiendo impedir un suicidio no lo haga o impidiere que otro lo evite, será sancionado con prisión de tres meses a dos años de prisión y multa hasta de diez días de salario.

CAPÍTULO VI PARRICIDIO

ARTÍCULO 366.- Al que prive de la vida a cualquier ascendiente consanguíneo, en línea recta o a su padre o madre adoptiva, conociendo el delincuente ese parentesco, se le aplicará de veinte a cincuenta años de prisión y multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario.

CAPÍTULO VII FILICIDIO

ARTÍCULO 367.- Al que prive de la vida a un descendiente consanguíneo en línea recta o a su hijo adoptivo, sabiendo el delincuente ese parentesco, se le aplicarán de veinte a cincuenta años de prisión y multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario.

CAPÍTULO VIII ABORTO

ARTÍCULO 368.- Aborto es la interrupción del embarazo en cualquier momento de la preñez.

ARTÍCULO 369.- Se impondrá de cuatro meses a un año de prisión y multa hasta de veinte días de salario, a la madre que voluntariamente procure un aborto o consienta en que otro la haga abortar dentro de los primeros tres meses de embarazo.

Cuando el aborto se practique después de los tres meses de embarazo, se aplicará de uno a tres años de prisión y multa de veinte a cincuenta días de salario.

La sanción prevista en el párrafo anterior se aplicará al que haga abortar a una mujer a solicitud de ésta en las mismas condiciones, con tal que no se trate de un abortador de oficio o de persona ya condenada por ese delito, pues en tal caso la sanción será de uno a cuatro años de prisión y multa hasta de cincuenta días de salario.

Cuando faltare el consentimiento de la mujer, la prisión será en todo caso de cinco a diez años y multa hasta de cincuenta días de salario, y si mediare violencia física o moral, de seis a doce años de prisión y multa hasta de sesenta días de salario.

ARTÍCULO 370.- Si el aborto lo causare un médico cirujano o partera, además de las sanciones que le corresponden conforme al artículo anterior, se le suspenderá de cuatro a diez años en el ejercicio de su profesión u oficio.

ARTÍCULO 371.- No es punible el aborto culposo causado por la mujer embarazada, ni cuando el embarazo sea resultado de una violación.

ARTÍCULO 372.- No se aplicará sanción cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, o de un grave daño a su salud, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora.

CAPÍTULO IX ABANDONO DE PERSONAS

ARTÍCULO 373.- El que abandone a un menor incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, poniendo en peligro la integridad corporal de éstos, teniendo la obligación de cuidarlos, se le aplicará de tres meses a cuatro años de prisión y suspensión hasta por cinco años de los derechos de patria potestad o tutela, según el caso, e incapacidad para heredar en los términos de la ley civil.

En caso de resultar además algún daño, se aplicarán las reglas del concurso.

ARTÍCULO 374.- Al que encuentre abandonado o abandone en cualquier sitio a un menor incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona lesionada, inválida o amenazada de un peligro cualquiera, se aplicará de tres meses a dos años de prisión y multa hasta de diez días de salario si no diere aviso a la autoridad u omitiere prestarles el auxilio necesario, cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal.

ARTÍCULO 375.- El automovilista, motorista, conductor de vehículo cualquiera, ciclista o jinete que deje en estado de abandono, sin prestarle o facilitarle asistencia a persona a quien dañó por atropellamiento, choque o de cualquier otra forma, será sancionado con la pena de uno a cinco años de prisión, por esta sola circunstancia e independientemente del lugar en que esto ocurra. Si del abandono resultare la muerte, la sanción será de tres a ocho años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario.

TÍTULO DÉCIMO NOVENO DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

CAPÍTULO I ROBO

ARTÍCULO 376.- Comete el delito de robo, el que se apodera de una cosa ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento de las personas que pueden disponer de ella con arreglo a la Ley.

Se equipara al robo y se sancionará como tal el apoderamiento de una cosa ajena que sea desincorporada de un bien inmueble sin derecho y sin consentimiento de quien pueda disponer de ella con arreglo a la Ley.

ARTÍCULO 377.- Se equiparan al robo y se sancionarán como tal la disposición o destrucción de una cosa mueble, ejecutada intencionalmente por el dueño de la cosa si se halla en poder de otro a título de prenda o depósito, decretado por una autoridad o hecho con su intervención, o mediante contrato público o privado.

ARTÍCULO 378.- Para la aplicación de la sanción, se dará por consumado el robo desde el momento en que el ladrón tiene en su poder la cosa robada; aun cuando la abandone o lo desapoderen de ella.

ARTÍCULO 379.- Tanto para la aplicación de las sanciones, como para establecer el monto o la cuantía que correspondan a los delitos de este Título, se tomará en consideración para su fijación el salario mínimo general diario vigente en el Estado en el momento de la ejecución. En los artículos correspondientes, cuando se hable de salarios se entenderá que se refiere al mínimo general vigente en el Estado.

ARTÍCULO 380.- El delito de Robo se sancionará conforme a las reglas siguientes:

- I. Cuando el valor de lo robado no exceda de cien veces el salario, se impondrá de tres meses a dos años de prisión y multa de diez a treinta días de salario;
- II. Cuando exceda de cien veces el salario, pero no de quinientas, la sanción será de dos a cuatro años de prisión y multa de quince a sesenta días de salario;
- III. Cuando exceda de quinientas veces el salario, pero no de dos mil, la sanción será de cuatro a diez años de prisión y multa de veinte a cien días de salario, y
- IV. Cuando exceda de dos mil veces el salario, la sanción será de cinco a trece años de prisión y multa de cuarenta a doscientos días de salario.

Para estimar la cuantía del robo se atenderá únicamente al valor intrínseco del objeto del apoderamiento, pero si por alguna circunstancia no fuere valorado o no sea estimable en dinero o si por su naturaleza no fuere posible fijar su valor, se aplicará prisión de tres meses a seis años y multa de diez a treinta días de salario mínimo.

En los casos de tentativa de robo, cuando no fuere posible determinar su monto, se aplicarán de tres meses a tres años de prisión.

ARTÍCULO 381.- Se considerará calificado el delito de robo, cuando:

- I. Se ejecute con violencia física o moral en las personas o sobre las cosas o utilizando armas u otros objetos que tengan las características o configuración de armas de fuego, pistolas de municiones, de utilería, réplicas, no aptas para el disparo o aquéllas que arrojen proyectiles a través de aire o gas comprimido, aun cuando la violencia se haga a persona distinta de la robada, que se halle en compañía de ésta, o cuando el ladrón la ejecute después de consumado el robo, para proporcionarse la fuga o defender lo robado;

- II. El objeto del robo sea un expediente o algún documento de protocolo, oficina o archivo público, o documento que contenga obligación, liberación o transmisión de derechos que obren en un expediente judicial;
- III. Se cometa aprovechando alguna relación de servidumbre, de trabajo, hospedaje u hospitalidad;
- IV. Se cometa en paraje solitario, en lugar cerrado o en edificio, vivienda, aposento o cuarto que estén habitados o destinados para habitación, comprendiéndose en esta denominación no sólo los que estén fijos en la tierra, sino también los movibles, sea cual fuere la materia de que estén contruidos;
- V. Se cometa aprovechando la falta de vigilancia, el desorden o confusión que se produzca por un incendio, naufragio, inundación, accidentes o delitos en el tránsito de vehículos o aeronaves u otros siniestros;
- VI. Se roben tubos, conexiones, tapas de registro o cualesquier otros implementos de un servicio público u otros objetos que estén bajo la salvaguarda pública, sin perjuicio de lo que proceda por el daño a la propiedad;
- VII. Se cometa de noche, llevando armas, con fractura o empleo de llaves falsas, horadación, excavación o escalamiento, o sean los ladrones dos o más o fingiéndose funcionarios públicos o suponiendo una orden de alguna autoridad, y
- VIII. Reaiga sobre vehículo automotriz, parte de él u objetos guardados en su interior.

Para los efectos de esta fracción, se equipara al robo calificado, cuando:

- a). Se desmantele uno o más vehículos automotores robados, o
- b). Se detente, posea o custodie documentos falsos o alterados de propiedad de uno o más vehículos robados, salvo cuando se pruebe la buena fe de su tenencia o propiedad del vehículo de que se trate.

La buena fe se demostrará cuando en la documentación probatoria de propiedad, se establezca la fecha de adquisición y el precio de su transmisión, el nombre, domicilio y número de identificación del vendedor con los datos de su credencial de elector o pasaporte, siempre que aquélla fuere de fecha cierta, y

- IX. El objeto del robo recaiga sobre cultivos de camarón o cualquier otra especie similar en las granjas acuícolas de particulares.

Además de las sanciones señaladas en el artículo 380 de éste Código, se aplicará de uno a cinco años de prisión al responsable del robo calificado.

ARTÍCULO 382.- En todo caso de robo, si el Juez creyera conveniente, podrá suspender al delincuente de tres meses a seis años, en los derechos de patria potestad, tutela, curatela, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en concurso o quiebra, asesor o representante de ausentes, y en el ejercicio de cualquier profesión de las que exijan título.

ARTÍCULO 383.- A quien se imputare el hecho de haber tomado una cosa ajena sin consentimiento del dueño o legítimo poseedor y acredite haberla tomado con carácter temporal y no para apropiársela o venderla, se le aplicará de uno a seis meses de prisión, siempre que justifique no haberse negado a devolverla, si se le requirió a ello. Además pagará al ofendido como responsabilidad civil el doble del alquiler, arrendamiento o interés de la cosa usada.

ARTÍCULO 384.- Se impondrá de uno a nueve años de prisión y multa hasta el equivalente de diez días de salario, al que robe postes, alambres u otros materiales de las cercas de los sembradíos o potreros, dejando éstos al descubierto en todo o en parte, o robe bombas, motores o partes de estos implementos, o cualquier objeto o aparato de uso en la agricultura o en la ganadería, o en un servicio público, o que esté bajo la salvaguarda pública, sin perjuicio de lo que proceda por el daño a la propiedad.

Artículo 385.- El robo cometido por un ascendiente contra su descendiente o por éste contra aquél o por un cónyuge contra el otro, entre concubinos, por un suegro contra su yerno o nuera, por éstos contra aquél, por un padrastro contra su hijastra o viceversa, por un hermano contra su hermano, produce responsabilidad penal; pero no se podrá proceder contra el responsable sino a petición del agraviado.

Si además de las personas a que se refiere el párrafo anterior, tuviere intervención en el robo alguna otra, para sancionar a ésta se necesita querrela del ofendido, pero en este caso se procederá contra todos los responsables, incluyendo a los que se mencionan en la primera parte de este artículo.

Artículo 386.- El infractor quedará exonerado de toda sanción en los casos siguientes:

I. Cuando sin emplear engaño, ni medios violentos, se apodera del alimento estrictamente indispensable para satisfacer sus necesidades personales o familiares de alimentación del momento, y

II. Cuando el valor de lo robado no exceda del equivalente a treinta días de salario, sea restituido por el responsable espontáneamente y pague los daños y perjuicios antes de que la autoridad lo aprehenda por el delito cometido, y siempre que no se haya ejecutado el robo por medio de la violencia.

Artículo 387.- Si precediere, acompañare o siguiere al robo algún otro hecho que por sí solo constituya un delito, se aplicarán las reglas del concurso.

CAPÍTULO II ABIGEATO

Artículo 388.- Comete el delito de abigeato, el que se apodera de una o más cabezas de ganado ajeno cualquiera que sea su especie, sin consentimiento de quien legalmente puede disponer de ellas.

Artículo 389.- Al responsable del delito de abigeato consumado en ganado bovino, equino, mular o asnal se le sancionará conforme a las reglas siguientes:

I. Si el apoderamiento fuere de una cabeza de ganado, se sancionará con prisión de dos a cinco años y multa de diez a cincuenta días de salario;

II. Si el apoderamiento fuere de dos a diez cabezas de ganado, se sancionará con prisión de cuatro a ocho años de prisión y multa de quince a sesenta días de salario, y

III. Si el apoderamiento excediere de diez cabezas de ganado, se sancionará con prisión de seis a diez años y multa de veinte a setenta días de salario.

Artículo 390.- Cuando el abigeato recaiga sobre ganado caprino, ovino o porcino, el delito se sancionará conforme a las reglas siguientes:

I. Si el apoderamiento fuere de una cabeza de ganado, se sancionará con prisión de uno a tres años y multa de uno a diez días de salario;

II. Si el apoderamiento fuere de dos a diez cabezas de ganado, se sancionará con prisión de dos a cuatro años de prisión y multa de siete a treinta días de salario, y

III. Si excediere de diez cabezas de ganado, se sancionará con prisión de tres a cinco años y multa de diez a cuarenta días de salario.

Artículo 391.- Además de las sanciones señaladas en los artículos anteriores, se aumentará la sanción de seis meses a tres años de prisión, cuando se realice en cualquiera de las circunstancias siguientes:

I. Quebrantando la confianza o seguridad de una relación de servicio, trabajo o contractual entre el sujeto activo y el ofendido;

II. Aprovechándose de las condiciones de confusión que se produzcan por desorden público o invasión de los terrenos donde pasten los semovientes, y

III. Si el apoderamiento a que se refiere este artículo, se verifica con violencia física o moral, o de noche, o por dos o más personas.

Artículo 392.- Al responsable del delito de robo consumado en un apiario, se le sancionará de uno a cuatro años de prisión y multa de cinco a veinte días de salario.

Artículo 393.- Las mismas sanciones que señalan los dos artículos anteriores se aplicarán a los que adquieran animales robados, según su especie, así como a las autoridades que intervengan en la legalización de documentos que acrediten la propiedad de los animales, si no tomaron aquéllos o éstas, las medidas ordinarias para cerciorarse de la procedencia legítima de los propios animales.

ARTÍCULO 394.- Se equipara al abigeato y se le aplicarán las mismas sanciones que respectivamente señalan los artículos 389 y 390 de este Código, al que ampare una o más cabezas de ganado robado con documentación alterada o expedida a nombre de otro.

ARTÍCULO 395.- Al que transporte ganado de procedencia ilegal, sin haber tomado las medidas necesarias para cerciorarse de su procedencia legítima, se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y multa de tres a quince días de salario.

ARTÍCULO 396.- Al que comercie con pieles, carnes u otros derivados obtenidos del Abigeato, se le impondrá prisión de tres a ocho años y multa de diez a treinta días de salario.

CAPÍTULO III ABUSO DE CONFIANZA

ARTÍCULO 397.- Al que, con perjuicio de alguien, disponga para sí o para otro, de cualquier cosa ajena mueble, de la que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio, se le sancionará con prisión de tres meses a dos años y multa de diez a treinta días de salario, cuando el monto del abuso no exceda cien veces del salario.

Si excede de esta cantidad, pero no de quinientas veces el salario, la prisión será de dos a cuatro años y multa de quince hasta sesenta días de salario.

Si el monto es mayor de quinientas pero no dos mil veces el salario, la prisión será de cuatro a diez años y la multa de veinte a cien días de salario.

Si el monto es mayor de dos mil salarios, la prisión será de seis a doce años y multa de cuarenta a doscientos días de salario.

ARTÍCULO 398.- Se considera como abuso de confianza para los efectos de la pena:

I. El hecho de disponer o sustraer una cosa su dueño, si le ha sido embargada y la tiene en su poder con el carácter de depositario judicial, o bien si la hubiere dado en prenda y la conserva en su poder como depositario a virtud de un contrato celebrado con alguna institución de crédito, en perjuicio de ésta;

II. El hecho de disponer de la cosa depositada, o sustraerla el depositario judicial o el designado por o ante las autoridades administrativas o del trabajo, y

III. El hecho de que una persona haga aparecer como suyo un depósito que garantice la libertad caucional de un procesado y del cual no le corresponda la propiedad.

ARTÍCULO 399.- Se aplicarán las mismas sanciones del abuso de confianza, a quien requerido formalmente, retenga la cosa que estuviere obligado a entregar si la hubiere recibido por un título gratuito o precario que produzca la obligación de entregar o devolver, o cuando la cosa deba entregarse a resultas de una resolución firme de autoridad competente.

CAPÍTULO IV FRAUDE

ARTÍCULO 400.- Comete el delito de fraude, el que engañando a alguno o aprovechándose del error en que éste se halla, se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido para sí o para otro.

El delito de fraude se sancionará con las penas siguientes:

- I. Con prisión de tres meses a dos años y multa de diez a treinta días de salario, cuando el valor de lo defraudado no exceda de cien veces del salario mínimo vigente;
- II. Con prisión de dos a cuatro años y multa de quince a sesenta días de salario, cuando el valor de lo defraudado excediera de cien pero no de quinientas veces el salario;
- III. Con prisión de cuatro a diez años y multa hasta de veinte a cien días de salario, si el valor de lo defraudado excediera de quinientas pero no de dos mil veces el salario, o
- IV. Con prisión de cinco a trece años y multa hasta de cuarenta a doscientos días de salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor de dos mil veces el salario.

Cuando el sujeto pasivo entregue la cosa de que se trata a virtud no solo de engaños, sino de maquinaciones o artificios que para obtener esa entrega se hayan empleado, la pena señalada en las fracciones anteriores, se aumentará con prisión de tres meses a dos años.

ARTÍCULO 401.- Se sancionarán conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, los siguientes casos:

- I. Al que obtenga, dinero, valores o cualquier otra cosa, ofreciendo encargarse de la defensa de un procesado o de un reo, si no realiza ésta o la abandona sin causa justificada;
- II. Al que por título oneroso enajene alguna cosa con conocimiento de que no tiene derecho para disponer de ella, o la arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier otro modo, si ha recibido el precio, el alquiler, la cantidad en que la grave, parte de ellos o un lucro equivalente;
- III. Al que obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquier otro lucro, otorgándole o endosándole a nombre propio o de otro, un documento nominativo, a la orden o al portador, contra una persona supuesta o que el otorgante sabe que no ha de pagarle;
- IV. Al que se haga servir alguna cosa o admita un servicio en cualquier establecimiento comercial y no pague el importe;

V. Al que compre una cosa mueble ofreciendo pagar su precio al contado y rehúse, después de recibirla, a hacer el pago o devolver la cosa si el vendedor le exige lo primero dentro de quince días de haber recibido la cosa el comprador;

VI. Al que hubiere vendido una cosa mueble y recibido su precio, si no la entrega dentro de los quince días del plazo convenido o no devuelve su importe en el mismo término, en caso de que se le exija esto último;

VII. Al que venda a dos o más personas una misma cosa, sea mueble o raíz y reciba el precio de la primera, de la segunda o siguientes enajenaciones, de dos o más de ellas o parte del precio, o cualquier otro lucro con perjuicio del primero o de los siguientes compradores;

VIII. Al que simulare un contrato, un acto o escrito judicial, con perjuicio de otro;

IX. Al que por sorteos, rifas, loterías, promesas de venta o por cualquier otro medio, se quede con todo o parte de las cantidades respectivas, sin entregar la mercancía u objeto ofrecido;

X. Al fabricante, empresario contratista o constructor de una obra cualquiera, que emplee en la construcción de la misma, materiales en cantidad o calidad inferiores a las convenidas, o mano de obra inferior a la estipulada, siempre que haya recibido el precio o parte de él;

XI. Al vendedor de material de construcción de cualquiera especie, que habiendo recibido el precio de los mismos, no los entregue en su totalidad o calidad convenidas;

XII. Al que explote la superstición o la ignorancia de una persona por medio de supuesta evocación de espíritus, adivinaciones o curaciones;

XIII. Al que habiendo recibido mercancías con subsidio o franquicia para darles un destino determinado, la distrajere de este destino o en cualquier forma desvirtúe los fines perseguidos por el subsidio o la franquicia;

XIV. Al que para eludir todo o parcialmente el pago de un impuesto, contribución, multa o cualquier otra prestación fiscal, legalmente decretada, emplee simulaciones, engaños o cualquier otro procedimiento que tienda a ocultar, variar o desnaturalizar la causa o sujeto del impuesto, multa o prestación o a inducir a error en alguna forma a las autoridades fiscales;

XV. Al que obtenga de cualquier persona o institución una suma de dinero o cosas determinadas en concepto de refacción, habilitación o avío y no los aplique al objeto u obras convenidos. Cuando el dinero o cosas hayan sido recibidos por una persona moral, los responsables del delito serán las personas físicas que suscriban los

documentos relativos, sin perjuicio de decretar la suspensión de la persona jurídica en sus actividades, hasta por un año, o

XVI. El que habiéndose obligado con otro de manera verbal o escrita, a la comercialización primaria de productos agropecuarios, pesqueros o forestales, y utilizando engaños, artificios, maquinaciones, después de recibida la cosa pactada, incumpla con la obligación del pago en los términos fijados.

ARTÍCULO 402.- Se considerará como autor del delito de fraude y será sancionado con prisión de tres a diez años y multa de diez a cincuenta días de salario el que engañado a uno, haciéndose pasar como servidor público o como agente de compañía nacional o extranjera de enganche de trabajadores, lo contrate para prestar sus servicios en el extranjero, a sueldo fijo o a destajo, o lo induzca sin contrato, a trasladarse al extranjero, para ahí contraer la obligación respectiva del trabajo.

Iguals sanciones se impondrán a servidores públicos, de las categorías indicadas, cuando obtuvieren del trabajador dádivas u otros beneficios ilegales, a través de la celebración de los contratos, aún en el supuesto de que estuvieren facultados a intervenir en ellos.

Los agentes o funcionarios de compañías de contratación de trabajadores, que sin autorización de las autoridades o al margen de la Ley, contraten o pretendan contratar trabajadores, incurrirán en las sanciones privativas de libertad y pecuniarias a que se refiere el párrafo anterior, las compañías de que se trata incurrirán, en el mismo caso en las sanciones pecuniarias y suspensivas de operaciones.

CAPÍTULO V ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA

ARTÍCULO 403.- Comete el delito de administración fraudulenta el que teniendo a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes ajenos, con engaño o aprovechamiento del error del ofendido, perjudique a su titular o a un tercero con legítimo interés, o altere en sus cuentas los precios o condiciones de los contratos, suponiendo operaciones o prestaciones o exagerando las que hubiere hecho ocultando

o reteniendo bienes, o empleare abusivamente los bienes o la firma que se le hubiere confiado.

Las sanciones para este delito serán las mismas que para el fraude establece el artículo 400 de este Código.

CAPÍTULO VI USURA

ARTÍCULO 404.- Se impondrá prisión de dos a ocho años y multa de cien a trescientos días de salario:

I. Al que aprovechando la ignorancia o notoria necesidad de una persona, realizare cualquier préstamo, aún encubierto con otra forma contractual, con intereses que excedan el costo porcentual promedio que fija el Banco de México o el indicador que legalmente lo sustituya, vigente en el mes inmediato anterior al día en que se pacte la obligación, u otras ventajas evidentemente desproporcionadas, para sí o para otro;

II. Al que aprovechando la notoria necesidad ajena, ignorancia o miseria, procurase un préstamo cualquiera, cobrando o haciéndose dar una comisión o compensación superior al tres por ciento respecto del capital original, para sí o para otro, y

III. Al que haya adquirido un crédito o comisión usuraria con conocimiento de causa para enajenarlo o hacerlo valer.

Para los efectos de esta fracción, se entenderá que los créditos, comisiones o préstamos son usurarios, cuando sean superiores al límite señalado en la fracción I del presente artículo.

Cuando una persona moral facilite los medios para la comisión del presente ilícito en cualquiera de sus modalidades, de modo que éste resulte cometido a su nombre, bajo su amparo o en su beneficio, se le impondrá suspensión de sus actividades hasta por un año, y además serán sancionados penalmente, los dirigentes, administradores y mandatarios que ordenen, permitan o ejecuten dichos delitos, conforme a lo prescripto en el primer párrafo de este artículo.

CAPÍTULO VII DESPOJO DE INMUEBLES Y AGUAS

ARTÍCULO 405.- Se aplicarán las sanciones de uno a cinco años de prisión y multa de tres a diez días de salario:

- I. Al que de propia autoridad y haciendo violencia física o moral en las personas o en las cosas, o furtivamente, o empleando amenazas o engaño, ocupe un inmueble ajeno, o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca;
- II. Al que de propia autoridad y haciendo uso de cualquiera de los medios indicados en la fracción anterior ocupe un inmueble de su propiedad, en los casos en que la Ley no se lo permita por hallarse en poder de otra persona, o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante, y
- III. Al que en los términos de las fracciones anteriores, cometa despojo de aguas.

La pena será aplicable, aun cuando el derecho a la posesión de la cosa usurpada sea dudoso o esté en disputa. Cuando el despojo se realice por grupo o grupos, que en conjunto sean mayores de cinco personas, además de la pena señalada en este artículo, se aplicará a los instigadores, y a quienes dirijan la invasión, de tres a diez años de prisión y multa hasta el equivalente de cincuenta días de salario.

A las sanciones que señala este artículo se sumarán las que correspondan por la violencia, la amenaza o por las de cualquier otro delito que resulte cometido.

CAPÍTULO VIII DAÑO EN LAS COSAS

ARTÍCULO 406.- Se impondrán de cinco a doce años de prisión y multa de cinco a veinte días de salario a los que causen incendio, inundación o explosión con daño o peligro de:

- I. Un edificio, vivienda o cuarto donde se encuentre alguna persona;
- II. Ropas, muebles u objetos en tal forma que puedan causar daños a las personas;
- III. Archivos públicos o notariales;
- IV. Bibliotecas, museos, escuelas, edificios y monumentos públicos, y

V. Montes, bosques, selvas, pastos, mieses o cultivos de cualquier otro género.

Cuando el daño en las cosas se produzca por culpa, para la imposición de las sanciones, se estará a lo previsto por el primer párrafo del artículo 96 en relación al 409 de este Código.

ARTÍCULO 407.- Se aplicarán de uno a ocho años de prisión y multa de tres a quince días de salario a los que intencionalmente introduzcan o irruman con sus ganados a los predios, causando daño a los cultivos agrícolas o pastizales de cualquier especie.

Cuando el daño se produzca por culpa o negligencia del propietario del ganado, o del encargado de la conducción o custodia de éste, la sanción aplicable será de seis meses a cuatro años de prisión y multa de uno a diez días de salario.

ARTÍCULO 408.- Si además de los daños directos resulta consumado algún otro delito, se aplicarán las reglas del concurso.

ARTÍCULO 409.- Cuando por cualquier medio se cause daño, destrucción o deterioro de cosa ajena, o de cosa propia en perjuicio de tercero, se aplicarán las sanciones del robo simple.

ARTÍCULO 410.- Se equipara al delito de daño en las cosas y se castigará imponiéndose una sanción de tres meses a tres años de prisión y multa de cincuenta a setenta y cinco días de salario mínimo general vigente, así como la reparación del daño al que:

I. Utilizando cualquier tipo de sustancia o medio realice pintas, escrituras, dibujos, signos, códigos, tallones, mensajes, figuras o gráficos de todo tipo, que alteren o modifiquen su presentación original en bienes muebles e inmuebles, sin consentimiento del dueño o quien legalmente posea la cosa, o

II. Cuando el daño se cometa en bienes de dominio público, monumentos, edificios, sitios o bienes considerados parte del patrimonio cultural con valor histórico o arquitectónico, o el daño se cause sobre bienes de cantera, piedra, madera o cualquier material de difícil o imposible reparación, se sancionará con pena de seis meses a seis años de prisión y multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario mínimo general vigente.

Tratándose de propaganda o promoción de partidos o grupos políticos, se estará a lo dispuesto por la Ley que lo regule.

CAPÍTULO IX OCUPACIÓN ILEGAL DE EDIFICIOS E INMUEBLES DESTINADOS A UN SERVICIO PÚBLICO

ARTÍCULO 411.- Se impondrá de uno a cinco años de prisión y multa hasta el equivalente de treinta días de salario, al que de propia autoridad y haciendo uso de la violencia física en las personas o en las cosas, se apodere de un edificio destinado a un servicio público cualquiera que éste sea.

Se impondrá de uno a siete años de prisión y multa hasta el equivalente de cuarenta días de salario a los instigadores, o quienes dirijan la ocupación y a quienes la instiguen.

Las sanciones a que se refiere este artículo son independientes de las que correspondan por otros delitos.

CAPÍTULO X DELITOS INFORMATICOS

ARTÍCULO 412.- Se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de trescientos a mil días de salario, al que de manera dolosa y sin derecho alguno, ni autorización de quien pueda otorgarlo conforme a la Ley, utilice o tenga acceso a una base de datos, sistemas o red de computadoras o a cualquier parte de la misma, con el firme propósito de diseñar, ejecutar o alterar un esquema o artificio, con el fin de defraudar, obtener dinero, bienes o información en perjuicio de otro.

La misma sanción del párrafo anterior se impondrá, a quien intercepte, interfiera, reciba, use, altere, dañe o destruya un soporte lógico o programa de computadora o los datos contenidos en la misma, en la base, sistema o red con el fin de defraudar, obtener dinero, bienes o información en perjuicio de otro.

TÍTULO VIGÉSIMO
DELITOS CONTRA EL DESARROLLO URBANO
CAPÍTULO I
DEL FRACCIONAMIENTO ILEGAL DE INMUEBLES

ARTÍCULO 413.- Comete el delito de fraccionamiento ilegal de inmuebles, el que por sí o por interpósita persona, fraccione o divida en lotes, un terreno de cualquier naturaleza, con o sin edificaciones, propio o ajeno, transfiera o prometa transferir, la propiedad, la posesión o cualquier otro derecho de un inmueble, cualquiera que sea su régimen jurídico o condición, careciendo de las licencias, autorizaciones o permisos de la autoridad administrativa correspondiente.

Al responsable de este delito, se le impondrá de seis a doce años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario mínimo general vigente en la entidad.

Para efectos punibles, se considera que incurren en la misma responsabilidad:

- I. Quien teniendo las licencias, autorizaciones o permisos correspondientes, incumpla con las obligaciones previstas en las fracciones IX, XI y XII, del artículo 151, de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit;
- II. Aquél que sin contar con las licencias, autorizaciones o permisos de la autoridad administrativa, o incumplidos, realice u ordene realizar cualquier tipo de publicidad ofreciendo en lotes o fracciones, un terreno de cualquier naturaleza, propio o ajeno, para vivienda, comercio o industria, con o sin edificaciones, y
- III. El tercero que enajene, prometa hacerlo o comercialice, lotes de terreno que hayan sido fraccionados o divididos sin contar con las licencias, autorizaciones o permisos de la autoridad administrativa, o teniéndolos no cumpla con los requisitos establecidos para ese efecto.

La pena establecida en el presente artículo, se aplicará también al servidor público que valiéndose de su encargo expida, autorice u otorgue licencias, permisos, autorizaciones o cualquier otra disposición análoga, que permita fraccionar en lotes, un terreno de cualquier naturaleza, o en su caso edificar construcciones, sin que se reúnan las condiciones exigidas por las leyes, planes o programas de desarrollo urbano vigentes, o bien que los expidan sin estar autorizado para ello. Las licencias, permisos, autorizaciones o disposiciones análogas a que se hace referencia, estarán afectadas de nulidad absoluta.

La pena de prisión se incrementará hasta en una mitad más, cuando las conductas previstas en el presente capítulo se realicen en áreas protegidas o de preservación ecológica, o en zonas no consideradas aptas para vivienda, por los planes y programas de desarrollo urbano respectivos.

ARTÍCULO 414.- La reparación del daño consistirá en la suspensión, modificación o demolición, en su caso, de construcciones u obras que hubieren dado lugar al ilícito correspondiente, así como la realización de acciones necesarias para restablecer las condiciones anteriores a la realización del ilícito, en la medida de lo posible.

El agente del ministerio público al ejercer la acción penal, asegurará y procederá a poner en custodia el inmueble ante el organismo encargado del desarrollo urbano en el Estado de Nayarit, poniéndolo a disposición de la autoridad competente para efecto de su posterior decomiso.

Asimismo, deberá girar oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit, ordenando se realice la anotación preventiva, a fin de evitar movimientos traslativos de dominio o la afectación de los mismos con algún gravamen.

ARTÍCULO 415.- Este delito no será sancionado:

I. Si el objeto de fraccionar o dividir un lote se hace en consecuencia de adjudicación por herencia, división de copropiedad que no simule fraccionamiento o por la constitución del minifundio, y

II. Cuando se trate de donaciones y compraventas realizadas entre parientes, en línea ascendente hasta el segundo grado, descendente hasta el tercer grado, o entre cónyuges, concubinos y hermanos.

CAPÍTULO II

DE LA CONSTITUCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES

ARTÍCULO 416.- A quien promueva, induzca, aliente o permita la formación o constitución de asentamientos humanos irregulares, integrados por dos o más familias, que impliquen peticiones respecto de su regularización o causen un perjuicio público por sí o por interpósita persona, o bien, cuando contando con las licencias, autorizaciones o permisos respectivos, incumpla con los términos en que fueron otorgados, se hará acreedor a la pena dispuesta por el artículo 413 de este Código.

Asimismo, será sancionado con igual penalidad, quien lleve a cabo la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura o la constitución de asentamientos humanos en una zona determinada, sin elaborar un análisis de riesgos y definir las medidas para su reducción, omitiendo tomar en consideración la normatividad aplicable y los Atlas municipales y estatales, careciendo de la autorización de la autoridad correspondiente.

Se entiende por asentamiento humano irregular el grupo de personas que se establezcan o pretendan establecerse en un inmueble dividido o lotificado para fines de vivienda, comercio o industria, sin contar con las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes.

TÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO

CAPÍTULO I

ENCUBRIMIENTO

ARTÍCULO 417.- Se impondrá de tres a siete años de prisión y multa hasta el equivalente de treinta días de salario al que después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste, ayude en cualquier forma al responsable a eludir las investigaciones de la autoridad correspondiente o a sustraerse a la acción de ésta, u

ocultare, destruyere o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito o asegure para el inculpado el producto o provecho del mismo.

Igual sanción se aplicará a quien no procure por los medios lícitos que tenga a su alcance, impedir la consumación de los delitos que sepa va a cometerse o se estén cometiendo si son de los que se persiguen de oficio.

Se impondrá de cuatro a diez años de prisión y multa hasta el equivalente de cien días de salario, cuando el encubrimiento sea respecto de delitos de asalto, violación, homicidio, parricidio, filicidio u homicidio contra la mujer por razón de misoginia.

ARTÍCULO 418.- Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de diez a cuarenta días de salario, al que con ánimo de lucro adquiera, reciba u oculte el producto del delito a sabiendas que provenía de éste, o si de acuerdo con las circunstancias debía presumir su ilegítima procedencia, o al que ayude a otro para los mismos fines, salvo los casos específicos que señale este Código.

ARTÍCULO 419.- En los casos del artículo 417, quedan exceptuados de sanción aquellos que no puedan cumplir con el deber a que el mismo artículo se refiere, por correr peligro en su persona o en sus bienes.

CAPÍTULO II ENCUBRIMIENTO POR RECEPCIÓN

ARTÍCULO 420.- Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de cincuenta a cien días de salario, al que adquiera, posea, venda, enajene, pignore, traslade, reciba, oculte, suministre o trafique, uno o más vehículos automotores robados o parte de éstos.

La pena aumentará hasta en una mitad más, cuando de la investigación y peritajes que se realicen por parte del ministerio público, se desprenda que en el o los vehículos robados, se encontraron modificaciones en sus números originales de identificación como remarcación, alteración, trasplante o copia.

Se aplicará la sanción del párrafo primero al que adquiera, posea, venda, pignore, traslade, reciba, oculte, suministre o trafique uno o más vehículos automotores que presenten modificaciones en sus números originales de identificación como remarcación, alteración, trasplante o copia o parte de éstos.

Los adquirentes, detentadores o comercializadores no serán sancionados cuando acrediten fehacientemente buena fe en la adquisición o tenencia de los citados bienes, en los mismos términos a que se refiere la fracción VIII, inciso b), del artículo 381 de este Código.

TÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO

CAPÍTULO ÚNICO

DE LOS DELITOS CONTRA LA ECOLOGÍA Y LA FAUNA

ARTÍCULO 421.- Los actos u omisiones que alteren y afecten el equilibrio ecológico y la protección al ambiente, se castigarán:

I. De tres meses a seis años de prisión y multa, por equivalente de cien a diez mil días de salario mínimo, al que, sin contar con las autorizaciones respectivas o violando las normas de seguridad y operación a que se refiere la Ley de la materia, realice, autorice u ordene la realización de actividades que, conforme a este mismo ordenamiento, se considere como no riesgosas, que ocasionen graves daños a la salud pública o a los ecosistemas.

Cuando las actividades consideradas como no riesgosas a que se refiere el párrafo anterior, se lleven a cabo en un centro de población, se elevará la pena hasta tres años más de prisión y la multa hasta veinte mil días de salario mínimo en el momento que se cometa;

II. De tres meses a seis años de prisión y multa, por el equivalente de mil a diez mil días de salario mínimo, al que, sin autorización de la autoridad estatal o municipal, o contraviniendo los términos en que ésta haya sido concedida, fabrique, elabore, transporte, distribuya, comercie, almacene, posea, use, rehúse, recicle, recolecte, trate, deseche, descargue, disponga o en general, realice actos con materiales o residuos que no sean considerados altamente peligrosos, con arreglo a la Ley de la materia y que le compete conocer al Estado y municipios, que ocasionen o puedan ocasionar

graves daños a la salud pública, a los ecosistemas o sus elementos, previo dictamen que al efecto emitan las autoridades administrativas competentes.

III. De tres meses a cinco años de prisión y multa, por el equivalente de cien a diez mil días de salario mínimo, al que, con violación a lo establecido en las disposiciones legales, reglamentarias y normas técnicas aplicables, realice, autorice u ordene la descarga a la atmósfera de gases, humo o polvos, que ocasionen o puedan ocasionar daños graves a la salud pública, la flora, la fauna o a los ecosistemas, en el ámbito de la competencia estatal o municipal;

IV. De tres meses a cinco años de prisión y multa por el equivalente de cien a diez mil días de salario mínimo, al que, sin autorización de la autoridad competente y en contravención a las disposiciones legales, reglamentarias o normas técnicas aplicables, descargue, deposite o infiltre, ya sea que lo autorice o lo ordene, aguas residuales, desechos o contaminantes, en los suelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua en jurisdicción estatal, o en su caso municipal, que ocasionen o puedan ocasionar graves daños a la salud pública, la flora, la fauna, o los ecosistemas.

Cuando se trate de aguas para ser entregadas en bloque a los centros de población, la pena se elevará hasta tres años más;

V. De tres meses a cinco años de prisión y multa, por el equivalente de cien y diez mil días de salario mínimo, a quien, en contravención a las disposiciones legales aplicables y rebasando los límites fijados en las normas técnicas, genere emisiones o ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, colores o contaminación visual en zona de jurisdicción estatal o municipal, que ocasionen graves daños a la salud pública, la flora, la fauna o a los ecosistemas, y

VI. De tres a ocho años de prisión y multa, por el equivalente de cien a diez mil días de salario mínimo, a quien sin tomar las debidas precauciones e informar previamente a las autoridades municipales y ejidales inicie un incendio que rebase los límites del terreno que posea y dé lugar a un daño generalizado.

ARTÍCULO 422.- Se impondrá de tres meses a tres años de prisión y multa de sesenta a trescientos sesenta días de salario mínimo, a quien siendo propietario o poseedor por cualquier título o encargado de la guarda o custodia de un animal vertebrado, realice en perjuicio de éste cualquiera de las conductas siguientes:

- I. La muerte producida utilizando un medio que prolongue la agonía, causándole sufrimientos innecesarios, salvo en aquellos eventos autorizados por la autoridad competente;
- II. La mutilación orgánicamente grave, que no se efectuó bajo el cuidado de un médico veterinario;
- III. Toda privación de aire, luz, alimento, bebida, espacio suficiente o de abrigo contra la intemperie;
- IV. La privación de atención veterinaria o sanitaria que cause o pueda causar daño al animal, y
- V. Abandone en condiciones que hagan peligrar la vida o integridad del animal.

ARTÍCULO 423.- Se aplicarán las mismas sanciones señaladas en el artículo anterior a la persona que realice en perjuicio de un animal vertebrado cualquiera de las conductas siguientes:

- I. El atropellamiento deliberado, cuando se conduzca un vehículo automotor;
- II. El tiro al blanco en cualquier forma utilizando como objetivo animales vivos, y
- III. Cualquier otra conducta de tortura que se cause a un animal.

TRANSITORIOS:

ARTÍCULO PRIMERO. Declaratoria

Para los efectos señalados en el artículo segundo transitorio del Decreto de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 13 de octubre del año 2012, se declara que la presente legislación recoge los principios del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México, y entrará en vigor de acuerdo con los artículos siguientes.

ARTÍCULO SEGUNDO. Vigencia

Este Código entrará en vigor gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que mediante Bando Solemne emita el Congreso del Estado de Nayarit, previa solicitud de la Secretaría Técnica de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio; la vigencia total del presente Código no podrá exceder del 18 de junio de 2016.

ARTÍCULO TERCERO. Abrogación

El Código Penal vigente promulgado mediante Decreto número 7009, publicado en el Periódico Oficial con fecha veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, así como todas sus reformas, se derogará de manera gradual hasta su abrogación en la medida en que avance la vigencia del presente Código, en los términos de la Declaratoria referida en el artículo transitorio primero.

ARTÍCULO CUARTO. Ultractividad.

Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Código, así como los recursos de apelación serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes al momento en que se cometió el delito.

ARTÍCULO QUINTO. Efectos reincidencia-habitualidad.

Las declaratorias de delincuentes reincidentes y/o habituales realizadas en el sistema penal tradicional, no surtirán ningún tipo de efecto jurídico en el sistema penal acusatorio.

TÍTULO PRIMERO
ÁMBITO DE VALIDEZ DE LA LEY PENAL

CAPÍTULO I
APLICACIÓN DE LA LEY PENAL EN EL ÁMBITO ESPACIAL

CAPÍTULO II
APLICACIÓN DE LA LEY PENAL EN EL ÁMBITO TEMPORAL

CAPÍTULO III
APLICACIÓN DE LA LEY PENAL EN EL ÁMBITO PERSONAL

TÍTULO SEGUNDO
PRINCIPIOS
CAPÍTULO ÚNICO
PRINCIPIOS

TÍTULO TERCERO
CAPÍTULO I
REGLAS GENERALES SOBRE DELITOS Y
RESPONSABILIDADES DE LOS INTERVINIENTES

CAPÍTULO II
TENTATIVA

CAPÍTULO III
CONCURSO DE DELITOS

CAPÍTULO IV
PERSONAS RESPONSABLES DE DELITOS

CAPÍTULO V
CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEL DELITO DE LA
RESPONSABILIDAD PENAL

CAPÍTULO VI
REINCIDENCIA

CAPÍTULO VII
CAUSAS DE IMPUTABILIDAD

CAPÍTULO VIII
DE LOS DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERRELLA DE PARTE

<p>TÍTULO CUARTO SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD CAPÍTULO I SANCIONES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONSECUENCIAS LEGALES PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS SECCIÓN PRIMERA MEDIDAS DE SEGURIDAD</p>
<p>SECCIÓN SEGUNDA CONSECUENCIAS LEGALES ACCESORIAS</p>
<p>SECCIÓN TERCERA SANCIONES</p>
<p>CAPÍTULO II PRISIÓN</p>
<p>CAPÍTULO III LIBERTAD BAJO TRATAMIENTO</p>
<p>CAPÍTULO IV SEMILIBERTAD</p>
<p>CAPÍTULO V TRABAJO EN BENEFICIO DE LA VÍCTIMA O A FAVOR DE LA COMUNIDAD</p>
<p>CAPÍTULO VI SANCIÓN PECUNIARIA</p>
<p>CAPÍTULO VII REPARACIÓN DEL DAÑO</p>
<p>CAPÍTULO VIII SUSPENSIÓN, PRIVACIÓN E INHABILITACIÓN DE DERECHOS</p>
<p>CAPÍTULO IX DECOMISO O DESTRUCCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL DELITO</p>
<p>CAPÍTULO X DE LA SUSPENSIÓN O PRIVACIÓN DE EJERCICIO DE OFICIO,</p>

PROFESIÓN O DERECHO A CONDUCIR VEHÍCULOS

**CAPÍTULO XI
PUBLICACIÓN ESPECIAL DE SENTENCIAS**

**CAPÍTULO XII
PROHIBICIÓN DE IR A LUGAR DETERMINADO O DE RESIDIR EN
EL**

**CAPÍTULO XIII
APERCIBIMIENTO**

**CAPÍTULO XIV
AMONESTACIÓN**

**CAPÍTULO XV
VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD**

**CAPÍTULO XVI
TRATAMIENTO DE DESHABITUACIÓN O DE DESINTOXICACIÓN**

**CAPÍTULO XVII
SUSPENSIÓN, DISOLUCIÓN, PROHIBICIÓN DE REALIZAR
DETERMINADAS OPERACIONES, REMOCIÓN E INTERVENCIÓN
DE PERSONAS JURÍDICAS**

**CAPÍTULO XVIII
DE LA RECLUSIÓN DOMICILIARIA**

**CAPÍTULO XIX
DEL INCUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD**

**TÍTULO QUINTO
APLICACIÓN DE SANCIONES**

**CAPÍTULO I
REGLAS GENERALES**

**CAPÍTULO II
APLICACIÓN DE SANCIONES A LOS DELITOS CULPOSOS**

**CAPÍTULO III
SANCIÓN PARA LA TENTATIVA**

**CAPÍTULO IV
SANCIONES EN LOS CASOS DE CONCURSO**

**CAPÍTULO V
PUNIBILIDAD PARA LA COMPLICIDAD, AUXILIO EN
CUMPLIMIENTO DE PROMESA ANTERIOR Y AUTORÍA
INDETERMINADA**

**CAPÍTULO VI
RECLUSIÓN PARA ENFERMOS MENTALES Y SORDOMUDOS**

**CAPÍTULO VII
SANCIONES A LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO
PRIVADO O QUE SE OSTENTEN COMO TALES**

**CAPÍTULO VIII
CONMUTACIÓN DE LAS PENAS**

**CAPÍTULO IX
SUSTITUCIÓN CONDICIONADA DE PENAS
SECCIÓN PRIMERA
REGLAS GENERALES**

**SECCIÓN SEGUNDA
REGLAS ESPECIALES**

**CAPÍTULO X
LIBERTAD CONDICIONAL**

**CAPÍTULO XI
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA CONDENA**

**TÍTULO SEXTO
EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL**

**CAPÍTULO I
CUMPLIMIENTO DE LA PENA O MEDIDA DE SEGURIDAD**

**CAPÍTULO II
MUERTE DEL DELINCUENTE**

**CAPÍTULO III
PERDÓN DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO**

**CAPÍTULO IV
REINSERCIÓN SOCIAL**

**CAPÍTULO V
CONCLUSIÓN DE TRATAMIENTO DE PERSONAS
INIMPUTABLES**

**CAPÍTULO VI
INDULTO**

**CAPÍTULO VII
PRESCRIPCIÓN
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES**

**SECCIÓN SEGUNDA
PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO DE QUERELLA**

**SECCIÓN TERCERA
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL**

**SECCIÓN CUARTA
PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD DE EJECUTAR LAS
SANCIONES**

**CAPÍTULO VIII
RESPONSABILIDAD CIVIL**

**CAPÍTULO IX
EXISTENCIA DE UNA SENTENCIA ANTERIOR DICTADA EN
PROCESO SEGUIDO POR LOS MISMOS HECHOS**

**CAPÍTULO X
CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO DE OPORTUNIDAD, ACUERDO
REPARATORIO EN JUSTICIA RESTAURATIVA O DE LAS
CONDICIONES DECRETADAS EN LA SUSPENSIÓN
CONDICIONAL DEL PROCESO**

**LIBRO SEGUNDO
DE LOS DELITOS EN PARTICULAR
TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO I**

**DELITOS CONTRA EL ORDEN CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
Y SU INTEGRIDAD TERRITORIAL**

**CAPÍTULO II
CONSPIRACIÓN**

**CAPÍTULO III
REBELIÓN**

**CAPÍTULO IV
SEDICIÓN Y OTROS DESORDENES PÚBLICOS**

**CAPÍTULO V
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD TERRITORIAL DEL ESTADO**

**CAPÍTULO VI
TERRORISMO**

**TÍTULO SEGUNDO
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA**

**CAPÍTULO I
EVASIÓN DE PRESOS**

**CAPÍTULO II
QUEBRANTAMIENTO DE SANCIÓN**

**CAPÍTULO III
ARMAS PROHIBIDAS**

**CAPÍTULO IV
ASOCIACIONES DELICTUOSAS**

**CAPÍTULO V
DELITOS DE TRÁNSITO EJECUTADOS POR CONDUCTORES DE
VEHÍCULOS O AUTORIDADES DE TRÁNSITO**

**TÍTULO TERCERO
ATAQUES A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Y VIOLACIÓN O
RETENCIÓN DE CORRESPONDENCIA**

**CAPÍTULO I
ATAQUE A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN**

CAPÍTULO II

VIOLACIÓN O RETENCIÓN DE CORRESPONDENCIA

**TÍTULO CUARTO
DELITOS CONTRA LA AUTORIDAD
CAPÍTULO I**

DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA DE PARTICULARES

**CAPÍTULO II
OPOSICIÓN A QUE SE EJECUTE ALGUNA OBRA O TRABAJO
PÚBLICO**

**CAPÍTULO III
VIOLACIÓN DE SELLOS**

**CAPÍTULO IV
DELITOS COMETIDOS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS**

**CAPÍTULO V
ULTRAJES A INSIGNIAS PÚBLICAS**

**TÍTULO QUINTO
DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA
CAPÍTULO ÚNICO
DEL DELITO DE CONTAGIO SEXUAL O NUTRICIÓN, DE LA
PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES Y DE LA FALSIFICACIÓN O
ADULTERACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS O
MEDICINALES**

**TÍTULO SEXTO
DELITOS CONTRA LA MORAL PÚBLICA
CAPÍTULO I
ULTRAJES A LA MORAL PÚBLICA O A LAS BUENAS
COSTUMBRES E INCITACIÓN A LA PROSTITUCIÓN**

**CAPÍTULO II
CORRUPCIÓN Y PROSTITUCIÓN DE MENORES O INCAPACES**

**CAPÍTULO III
LENOCINIO**

CAPÍTULO IV

**PROVOCACIÓN DE UN DELITO Y APOLOGÍA DE ESTE O DE
ALGÚN VICIO**

**TÍTULO SÉPTIMO
CAPÍTULO ÚNICO
REVELACIÓN DE SECRETOS**

**TÍTULO OCTAVO
DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS
CAPÍTULO I
SERVIDORES PÚBLICOS**

**CAPÍTULO II
EJERCICIO INDEBIDO DE FUNCIONES**

**CAPÍTULO II
TENTATIVA**

**CAPÍTULO III
ABUSO DE AUTORIDAD, INTIMIDACIÓN Y TORTURA**

**CAPÍTULO IV
COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS**

**CAPÍTULO V
COHECHO**

**CAPÍTULO VI
PECULADO**

**CAPÍTULO VII
CONCUSIÓN**

**CAPÍTULO VIII
DELITOS COMETIDOS EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS**

**CAPÍTULO IX
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO**

**CAPÍTULO X
TRÁFICO DE INFLUENCIAS**

TÍTULO NOVENO

**DELITOS COMETIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y
EN OTROS RAMOS DEL PODER PÚBLICO**

CAPÍTULO I

DELITOS COMETIDOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS

CAPÍTULO II

DELITOS DE ABOGADOS, PATRONOS Y LITIGANES

TÍTULO DÉCIMO

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

CAPÍTULO ÚNICO

RESPONSABILIDAD MÉDICA Y TÉCNICA

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO

FALSEDAD

CAPÍTULO I

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE CRÉDITO

CAPÍTULO II

FALSIFICACIÓN DE SELLOS, MARCAS, LLAVES Y TROQUELES

CAPÍTULO III

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL

CAPÍTULO IV

FALSIFICACIÓN DE CERTIFICACIONES

CAPÍTULO V

**DE LA CERTIFICACIÓN, FORMALIZACIÓN, REGISTRO E
INSCRIPCIÓN DE INMUEBLES**

CAPÍTULO VI

**FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES Y EN INFORMES
DADOS A UNA AUTORIDAD**

CAPÍTULO VII

VARIACIÓN U OCULTACIÓN DEL NOMBRE O DEL DOMICILIO

CAPÍTULO VIII

USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS O DE PROFESIÓN

CAPÍTULO IX

USO INDEBIDO DE CONDECORACIONES, INSIGNIAS,

DISTINTIVOS O UNIFORMES

CAPÍTULO X

DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPÍTULOS PRECEDENTES

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO

**EXPLOTACIÓN DE MENORES O PERSONAS CON
DISCAPACIDAD**

CAPÍTULO ÚNICO

**EXPLOTACIÓN DE MENORES O PERSONAS CON
DISCAPACIDAD**

TÍTULO DÉCIMO TERCERO

DELITOS SEXUALES

CAPÍTULO I

ATENTADOS AL PUDOR

CAPÍTULO II

ESTUPRO

CAPÍTULO III

VIOLACIÓN

CAPÍTULO IV

HOSTIGAMIENTO O ACOSO SEXUAL

TÍTULO DÉCIMO CUARTO

DELITOS CONTRA EL ORDEN DE LA FAMILIA

CAPÍTULO I

DE LA SUPOSICIÓN Y SUPRESIÓN DEL ESTADO CIVIL

CAPÍTULO II

EXPOSICIÓN DE MENORES

CAPÍTULO III

SUSTRACCIÓN Y TRÁFICO DE MENORES

CAPÍTULO IV

BIGAMIA

CAPÍTULO V

INCESTO

**CAPÍTULO VI
ABANDONO DE FAMILIARES**

**CAPÍTULO VII
VIOLENCIA FAMILIAR**

**TÍTULO DÉCIMO QUINTO
CAPÍTULO ÚNICO
DELITOS EN MATERIA DE INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN Y
PROFANACIÓN DE CADÁVERES**

**TÍTULO DÉCIMO SEXTO
DELITOS CONTRA LA PAZ, LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LAS
PERSONAS**

**CAPÍTULO I
AMENAZAS**

**CAPÍTULO II
CHANTAJE**

**CAPÍTULO III
ALLANAMIENTO DE MORADA, OFICINA O ESTABLECIMIENTO
MERCANTIL**

**CAPÍTULO IV
ASALTO**

**CAPÍTULO V
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL**

**CAPÍTULO VI
USURPACIÓN DE IDENTIDAD**

**CAPÍTULO VII
EXTORSIÓN**

**CAPÍTULO VIII
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS**

**TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO
DELITOS CONTRA EL HONOR
CAPÍTULO I
GOLPES SIMPLES**

CAPITULO II INJURIAS
CAPÍTULO III DIFAMACIÓN
CAPÍTULO IV CALUMNIAS
CAPÍTULO V DISPOSICIONES COMUNES A LAS INJURIAS, DIFAMACIÓN Y CALUMNIAS
TÍTULO DÉCIMO OCTAVO DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL
CAPÍTULO I LESIONES
CAPÍTULO II HOMICIDIO
CAPÍTULO III REGLAS COMUNES PARA LESIONES Y HOMICIDIOS
CAPÍTULO IV DISPARO DE ARMA DE FUEGO
CAPÍTULO V INSTIGACIÓN O AYUDA AL SUICIDIO
CAPÍTULO VI PARRICIDIO
CAPÍTULO VII FILICIDIO
CAPÍTULO VIII ABORTO
CAPÍTULO IX ABANDONO DE PERSONAS
TÍTULO DÉCIMO NOVENO

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

CAPÍTULO I

ROBO

CAPÍTULO II

ABIGEATO

CAPÍTULO III

ABUSO DE CONFIANZA

CAPÍTULO IV

FRAUDE

CAPÍTULO V

ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA

CAPÍTULO VI

USURA

CAPÍTULO VII

DESPOJO DE INMUEBLES Y AGUAS

CAPÍTULO VIII

DAÑO EN LAS COSAS

CAPÍTULO IX

**OCUPACIÓN ILEGAL DE EDIFICIOS E INMUEBLES DESTINADOS
A UN SERVICIO PÚBLICO**

CAPÍTULO X

DELITOS INFORMÁTICOS

TÍTULO VIGÉSIMO

DELITOS CONTRA EL DESARROLLO URBANO

CAPÍTULO I

DEL FRACCIONAMIENTO ILEGAL DE INMUEBLES

CAPÍTULO II

DE LA CONSTITUCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

IRREGULARES

TÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO

**CAPÍTULO I
ENCUBRIMIENTO**

**CAPÍTULO II
ENCUBRIMIENTO POR RECEPCIÓN**

**TÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS DELITOS CONTRA LA ECOLOGÍA Y LA FAUNA**

TRANSITORIOS